

# OBSOLESCENCIA PROGRAMADA DE CALIDAD: ANÁLISIS DE SU JURIDICIDAD Y UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN.

ANDRÉS MAURICIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO

DIRECTOR: JESÚS ALFONSO SOTO PINEDA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO

BOGOTÁ  
2018

# UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

## FACULTAD DE DERECHO

Rector:	Dr. Juan Carlos Henao
Secretaria General:	Dra. Martha Hinestroza
Director del Departamento de Derecho Económico:	Dr. José Manuel Álvarez (e)
Director de la Tesis:	Dr. Jesús Alfonso Soto Pineda
Presidente de la Tesis:	Dr. Camilo Pabón Almanza
Examinadores:	Dr. Camilo Ernesto Ossa Bocanegra Dr. Daniel Alejandro Monroy Cely

## CONTENIDO

<b>Introducción.</b>	5
1. La obsolescencia programada.	7
1.1. Definiciones.	8
1.2. Tipos de obsolescencia programada	11
1.2.1. Obsolescencia técnica, tecnológica o de función.	11
1.2.2. Obsolescencia psicológica	12
1.2.3. Obsolescencia de calidad	15
2. La obsolescencia programada de calidad en el derecho comparado	16
2.1. Estados Unidos.	16
2.1.1. United States v. General Electric.	16
2.1.2. Casos contra Apple Computer Inc.	20
2.2. Derecho Comunitario Europeo.	30
2.2.1. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza.	30
2.2.2. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas.	31
2.2.3. Directivas relacionadas con los efectos de la obsolescencia programada de calidad.	32
2.3. Bélgica	33
2.4. Francia	35
2.5. Italia	37
2.6. Argentina.	38
2.7. Ecuador	41
3. La obsolescencia programada en los contratos de compraventa civiles y comerciales.	45
3.1. Vicios Redhibitorios	45
3.1.1. Requisitos de los vicios redhibitorios.	47
3.1.2. Acciones por vicios redhibitorios.	49
3.1.3. ¿Obsolescencia programada de calidad, un vicio redhibitorio?	51
3.2. Garantía en el derecho privado	62
3.2.1. Pacto de garantía de buen funcionamiento.	62
3.2.2. Garantía legal	64
4. Instituciones especiales del derecho del Consumo.	67
4.1. Garantía en el derecho del consumo.	68
4.1.1. Elementos que componen la garantía.	68
4.1.2. Carácter de la obligación de garantía.	72
4.1.3. Alcance de la garantía.	75
4.1.4. Exigibilidad de la garantía.	79
4.1.5. La garantía y la obsolescencia programada.	80
4.2. Derecho y deber de información.	84
4.2.1. Naturaleza y alcance de la información en el Estatuto del Consumidor.	84
4.2.2. La información y la obsolescencia programada.	87
5. Análisis Constitucional.	92
5.1. La protección constitucional al consumidor.	92
5.2. La protección constitucional al medio ambiente.	96
5.2.1. Efectos ambientales de la obsolescencia programada.	96
5.2.2. La Constitución Ambiental y la obsolescencia programada.	99

6. Una propuesta de regulación. ....	103
7. Conclusiones. ....	107
Bibliografía. ....	109

## Introducción.

La obsolescencia programada alude a cualquier técnica utilizada en la producción de bienes para predeterminar su vida útil, forzando a los consumidores a reemplazarlos rápidamente<sup>1</sup>. Práctica común en los sistemas económicos capitalistas. Sin embargo, pese a ser común, su carácter jurídico no se encuentra del todo determinado, debido a que ha sido escasamente regulada en el panorama internacional, aunado a un vacío legal en el ordenamiento colombiano.

Definir la naturaleza jurídica de la obsolescencia programada en el ordenamiento jurídico colombiano, y hacer una propuesta para su regulación, es el objeto de la presente monografía.

La obsolescencia programada puede ser analizada desde las más variadas ópticas jurídicas<sup>2</sup>, sin embargo, hemos decidido enfocar nuestro análisis a partir de la normativa que regula los contratos de compraventa de bienes entre privados, las normas de protección al consumidor, y las normas de la Constitución Política de Colombia de 1991, porque consideramos que en estos ámbitos, es donde mayormente se evidencian los efectos de la obsolescencia programada. Por un lado, la afectación a los compradores o consumidores que adquieren bienes con una vida útil limitada, y por el otro, la afectación al medio ambiente y al régimen constitucional económico de protección al consumidor.

En lo que respecta a la normativa que regula las relaciones jurídicas entre privados en las cuales se transan bienes, buscamos determinar si el marco normativo existente ofrece alguna regulación a la figura, distinguiendo los regímenes de las relaciones contractuales civiles (C2C) y comerciales (B2B), del régimen especial aplicable en materia del derecho del consumo (B2C).

Tratándose del derecho constitucional, buscamos determinar cómo se adecua la regulación existente y la falta de una regulación especial a las normas constitucionales, debido a las consecuencias de la obsolescencia programada. Es decir, determinar si el marco normativo existente se ajusta a la Constitución Política de Colombia de 1991, desde su óptica ecológica y de protección al consumidor.

A partir de las conclusiones obtenidas de los análisis propuestos, se construirá un proyecto de regulación para la República de Colombia.

Con miras a cumplir con los objetivos propuestos, esta monografía se divide en cinco partes.

En la primera parte se esbozará un marco conceptual de la obsolescencia programada para identificar y delimitar plenamente el objeto que vamos a analizar jurídicamente.

---

<sup>1</sup>SLADE, Giles, *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, p. 5.

<sup>2</sup> Ejemplo de esto es la obra *Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada*. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017., coordinada por Jesús Alfonso Soto Pineda, en la cual, 13 autores plasmaron sus consideraciones frente a la obsolescencia programada desde los siguientes tópicos jurídicos: Derecho Constitucional, Nomoárquica Jurídica, Derecho Comunitario Europeo, Derecho del Consumo, Derecho Contractual Privado, Derecho de la Competencia, Contratación Internacional, Derecho Internacional Privado y Derecho de la Empresa.

En la segunda, se expondrá el tratamiento jurídico que ha tenido la obsolescencia programada en el derecho comparado.

En la tercera, se analizará la obsolescencia programada a la luz de las normas que rigen el contrato de compraventa civil y comercial, especialmente en materia de vicios redhibitorios u ocultos y garantías.

En la cuarta, se analizará la adecuación de la obsolescencia programada a las normas que rigen la garantía y el deber de información en el derecho del consumo.

En la quinta, se contrastará el marco normativo existente a la luz de las disposiciones de la Constitución Política de 1991.

Por último, se hará una propuesta de regulación fundamentada en los análisis previos y se expondrán las conclusiones del trabajo.

## 1. La obsolescencia programada.

Los orígenes de la obsolescencia programada se pueden rastrear hasta el siglo XVII, en un texto de Nicholas Barbon, en el cual se evidencia el interés económico que se cierne sobre el tiempo de uso de los productos como un factor relevante en la economía de mercado, *Discourse of Trade*:

*La moda o alteración del vestir es un gran promotor del comercio, porque ocasiona el invertir en un paño antes de que el viejo se desgaste: es el espíritu y la vida del comercio, crea una circulación y da valor, por turnos, a todo tipo de bienes básicos. Mantiene el gran grueso del comercio en movimiento.*<sup>3</sup>

A nuestro juicio, esto pone de presente una idea básica, relativa a la necesidad de que se cambien los bienes aún antes de que se desgasten o no puedan usarse, pues se promueve el comercio y el flujo de capital. Idea que, a nuestro juicio, constituye el fundamento prístino de la obsolescencia programada.

La obsolescencia programada, como un concepto económico empezó a tomar forma en 1928<sup>4</sup>, en palabras de Justus George Frederick, quien propuso el “principio de la obsolescencia progresiva” según el cual, los compradores deberían cambiar los productos, aunque estos no se hubiesen desgastado, las personas deberían comprar para estar actualizados, para ser eficientes y para estar acorde con el estilo vigente, comprar por estar a tono con los avances, la tecnología y no para usar el objeto hasta la última gota<sup>5</sup>. Esta idea fue adoptada por Christine Frederick, en *Selling Mrs. Consumer*, donde promovió la obsolescencia desde una perspectiva estética, sugiriendo un cambio en los diseños como una forma de progreso y de abandonar la influencia estética europea en los Estados Unidos<sup>6</sup>.

En 1932 Bernard London publicó *Ending the Depression through Planned Obsolescence*<sup>7-8</sup>, en el cual conceptuó que “el principal problema económico no es estimular a los productores sino organizar a los compradores”<sup>9</sup>, porque son ellos los que determinan el flujo de bienes en el mercado, a partir de la Gran Depresión las personas empezaron a utilizar todos sus bienes por un tiempo mayor al que solían hacerlo<sup>10</sup>, conducta que para London, surgió por un “estado de ánimo histérico y atemorizado”<sup>11</sup> causado por la difícil situación económica de la

---

<sup>3</sup> BARBON, Nicholas. *A Discourse of Trade*. United States: Createspace, 2013. Citador por: CHACÓN, Fuad. *La Travesía Obsoleta: La Indefensión Del Consumidor*. Trabajo de grado para optar al título de Abogado. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014. p 30.

<sup>4</sup> SLADE, Giles. *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. p 58.

<sup>5</sup> FREDERICK, Justus George. *Is Progressive Obsolescence the Path Toward Increased Consumption?*. En *Advertising and Selling*. Septiembre, 1928. No. 10. Citado por: CHACÓN, Fuad. *La Travesía Obsoleta: La Indefensión Del Consumidor*. Trabajo de grado para optar al título de Abogado. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014. p 37-40.

<sup>6</sup> CHACÓN. Op. cit., p. 48.

<sup>7</sup> LONDON, Bernard. *Ending the Depression Through Planned Obsolescence*. New York, Estados Unidos: Octubre, 1932. Consultado el 23 enero de 2018. Disponible en University of Wisconsin Digital Collection: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273;view=1up;seq=1>

<sup>8</sup> Giles Slade en su libro *Made to Break: Technology and Obsolescence in America* dedica un subcapítulo, traducido en español “La utopía del hombre de negocios”, a describir las ideas plasmadas por Bernard London.

<sup>9</sup> *Ibíd.* p. 3. Traducción libre “(...) the essential economic problem has become one of organizing buyers rather than of stimulating producers”.

<sup>10</sup> *Ibíd.* p. 4-5.

<sup>11</sup> *Ibíd.* p. 4. Traducción libre de “ (...) in a frightened and hysterical mood, are using everything that they own longer than was their custom before the depression”.

época, y cuya solución propuso a partir de una intervención estatal<sup>12</sup>.

Esta intervención, para London, debía consistir en una política administrativa de vida útil de los bienes, según la cual, los bienes funcionarían por un tiempo determinado oficialmente<sup>13</sup>, y una vez cumplido, estos debían ser entregados por sus propietarios a una agencia estatal<sup>14</sup>, encargada de otorgar bonos que podrían ser utilizados en la compra de objetos nuevos o en el pago de impuestos<sup>15</sup>. Así, nuevos productos saldrían de las fábricas constantemente en reemplazo de los obsoletos, asegurando la existencia y funcionamiento de la industria, al igual que la existencia de empleos para la población<sup>16</sup>.

La idea de London no se materializó en una política de Estado como él lo hubiera querido, pero, empezó a hacer parte de la política de diseños y producción de bienes por parte de las industrias, con el mismo principio: comprar, desechar y comprar de nuevo, un círculo vicioso que alimenta la economía de mercado<sup>17</sup>. Idea que hoy se encuentra presente en los más variados objetos, desde automóviles, bombillas eléctricas, medias veladas y hasta celulares<sup>18</sup>.

Para comprender el término de la obsolescencia programada, más allá de la idea esbozada en las páginas precedentes, es preciso, en primer lugar, abordar las definiciones (1.1.) que se le han dado; y en segundo lugar, mencionar las clasificaciones (1.2.) de las que ha sido objeto, con el fin de poder delimitar la obsolescencia programada como objeto de análisis de esta monografía.

### 1.1. Definiciones

A primera vista la obsolescencia programada nos plantea una idea bastante simple, no obstante, no existe una fórmula única para definirla.

Una primera acepción, se halla en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que si bien no tiene una definición del término compuesto de “obsolescencia programada”,

---

<sup>12</sup>Ibíd. p. 6.

<sup>13</sup> Ibid. p.6. “I would have the Government assign a lease of life to shoes and homes and machines, to all products of manufacture, mining and agriculture, when they are first created, and they would be sold and used within the term of their existence definitely known by the consumer”.

<sup>14</sup> Ibid. p. 6. “After the allotted time had expired, these things would be legally “dead” and would be controlled by the duly appointed governmental agency and destroyed if there is widespread unemployment”.

<sup>15</sup> Ibid. p. 7. “The individual surrendering, for example, a set of old dining room furniture, would receive from the Comptroller or Inspector of such a Station or Bureau, a receipt indicating the nature of the goods turned in, the date, and the possible value of the furniture (which is to be paid to him in the future by the Government). (...). Receipts so issued would be partially equivalent to money in the purchase of new goods by the individuals, in that they would be acceptable to the Government in payment of the sales tax which would be levied as part of my plan”.

<sup>16</sup>Ibíd. p. 8. “As a result of the process, nevertheless, the wheels of industry would be greased, and factories would be kept busy supplying new goods, while employment would be maintained at a higher level”.

<sup>17</sup> DANNORITZER, Cosima y RTVE. Comprar, Tirar, Comprar: La Historia Secreta de la Obsolescencia Programada., Noviembre 30, 2010. Consultado el 20 de diciembre de 2017. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/>. En este documental se hace un recorrido histórico desde el origen hasta la actualidad de la obsolescencia programada, a la vez que registra varios casos de obsolescencia programada en productos de uso cotidiano, y como se han llevado a cabo procedimientos judiciales a partir de la obsolescencia programada.

<sup>18</sup> A este respecto es obligada la consulta de la obra “Made to Break: Technology and Obsolescence in America” de Giles Slade, en la cual se expone como la obsolescencia programada empezó a ser una política propia de todas las industrias desde el siglo XIX y como permanece aún en todas las industrias, especialmente en las de alta tecnología.



si refiere a la obsolescencia<sup>19-20</sup>, como un adjetivo que denota que algo está volviéndose obsoleto<sup>21</sup>, es decir, antiguo o inadecuado a las modas actuales.

Por otro lado, en diccionarios de tradición anglosajona se encuentran definiciones del término compuesto, por ejemplo:

- Merriam-Webster Dictionary: la práctica de producir o diseñar algo (como un automóvil) de tal forma que solo se podrá usar por un corto periodo de tiempo generando que las personas tengan que comprar otro<sup>22</sup>.
- Cambridge Business English Dictionary: situación en la que los bienes son deliberadamente hechos o diseñados de tal forma que no duren por un largo periodo de tiempo<sup>23</sup>.
- Longman Dictionary Of Contemporary English: cuando un producto es deliberadamente fabricado de tal forma que será rápidamente reemplazado por otro más a la moda o técnicamente avanzado, esto es hecho para que las personas compren productos más de seguido<sup>24</sup>.
- English Oxford Living Dictionaries: Una política de producción de bienes manufacturados que busca que estos se conviertan rápidamente en obsoletos para que sean reemplazados, mediante la realización de cambios frecuentes en el diseño, la interrupción en el suministro de partes de repuesto y mediante el uso de materiales poco duraderos<sup>25</sup>.

De las definiciones señaladas ut-supra, encontramos como elemento común la consideración entorno a que la obsolescencia programada hace referencia a una situación en la que los bienes son fabricados para que se vuelvan inservibles rápidamente, y deban ser reemplazados, estimulando la compra de nuevos bienes.

Adicionalmente, es posible encontrar definiciones de personas que se han encargado de analizar el fenómeno de la obsolescencia programada.

---

<sup>19</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2017. "Obsolescencia". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=OpKodB3>.

<sup>20</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2017. "Obsolescente". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=OpPC1nB>.

<sup>21</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2017. "Obsoleto: 1. adj. Anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=OpPT4RW>.

<sup>22</sup> MERRIAM-WEBSTER. Dictionary. "Planned obsolescence". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/planned%20obsolescence>. Traducción libre de: "The practice of making or designing something (such as a car) in such a way that it will only be usable for a short time so that people will have to buy another one".

<sup>23</sup> COMBLEY, Roz. Cambridge Business English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 577.

<sup>24</sup> LONGMAN. Longman Dictionary of Contemporary English Online. "Planned obsolescence". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://www.ldoceonline.com/dictionary/planned-obsolescence>. Traducción libre de: "when a product is deliberately made so that it will soon be replaced by something more fashionable or more technically advanced. This is done so that people will want to buy new things more often".

<sup>25</sup> OXFORD UNIVERSITY PRESS. English Oxford Living Dictionaries. "Planned obsolescence". Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: [https://en.oxforddictionaries.com/definition/planned\\_obsolescence](https://en.oxforddictionaries.com/definition/planned_obsolescence). Traducción libre de: "A policy of producing consumer goods that rapidly become obsolete and so require replacing, achieved by frequent changes in design, termination of the supply of spare parts, and the use of non-durable materials."

Tim Hindle en su libro *Guide to management ideas and gurus*, editado por The Economist, define la obsolescencia programada como “una estrategia de negocios consistente en el proceso de volver obsoleto un producto, desde su concepción. Lo que genera que en el futuro el consumidor tenga la necesidad de adquirir nuevos productos y servicios que el productor ofrece como remplazo para los anteriores”<sup>26</sup>.

A partir de la anterior definición y de la introducción del libro en el que se encuentra, se evidencia una consideración positiva en torno a la obsolescencia programada, de hecho, en el referido libro se le considera como una de las estrategias o ideas en la administración de los negocios que más ha influenciado a las empresas desde el siglo pasado, y que ha trascendido del mundo de las aulas de administración a hacer parte del desarrollo normal de los negocios<sup>27</sup>.

Giles Slade, en su libro *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*, concibe a la obsolescencia programada como “la diversidad de técnicas utilizadas para limitar artificialmente la durabilidad de bienes manufacturados con miras a estimular el consumo repetitivo”<sup>28</sup>.

Magdalena Correa Henao, por su parte, considera que la obsolescencia programada es “una fórmula de actuación empresarial que incrementa la producción y el consumo, bien sea por el acortamiento de la vida útil objetiva de los bienes o porque las nuevas tecnologías y tendencias favorezcan el uso y la adquisición de nuevos productos”<sup>29</sup>.

Para efectos de este escrito, proponemos la siguiente definición, extraída de las enseñanzas de los autores aquí referenciados: la obsolescencia programada se refiere a las técnicas utilizadas en la producción de bienes que buscan limitar la vida útil de estos con el fin de estimular o crear la necesidad del consumo repetitivo de los bienes.

Existiendo claridad sobre lo que es la obsolescencia programada, nos corresponde ahora enunciar las clases o tipos en que esta se puede desarrollar, con el fin de delimitar el objeto de nuestro estudio.

---

<sup>26</sup>HINDLE, Tim. *Guide to management ideas and gurus*. Londres: Londres Profile Books Ltd - Economist books, 2008. p.147. Traducción libre de: “... Is a business strategy in which the obsolescence (the process of becoming obsolete – that is, unfashionable or no longer usable) of a product is planned and built into it from its conception. This is done so that in future the consumer feels a need to purchase new products and services that the manufacturer brings out as replacements for the old ones”.

<sup>27</sup>Ibíd. p.1. “This book provides a short introduction to the management concepts that have most influenced companies over the past century or so, and to some of the more influential people behind them. These people and their ideas are no longer confined to the pages of learned management journals or to the lecture halls of prestigious business schools. Many are mentioned nowadays in the pages of the everyday business press and in general-management training material. Yet few of them are familiar to the average person in an office”.

<sup>28</sup>SLADE, Op. cit., pág. 5. Traducción libre de: “(...) is the catch-all phrase used to describe the assortment of techniques used to artificially limit the durability of a manufactured good in order to stimulate repetitive consumption”.

<sup>29</sup>CORREA, Magdalena. La obsolescencia programada: tensión constitucional y abuso del derecho. En: SOTO, Jesús (Coordinador). *Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada*. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 53.

## 1.2. Tipos de obsolescencia programada

Teniendo en cuenta las definiciones expresadas, a partir de la naturaleza de la técnica empleada para la limitación de la vida útil de los bienes y la consecuente estimulación del consumo repetitivo, se puede distinguir entre varios tipos de obsolescencia programada<sup>30</sup>, a saber: (1.2.1.) obsolescencia técnica o tecnológica, (1.2.2.) obsolescencia psicológica y (1.2.3.) obsolescencia de calidad.

### 1.2.1. Obsolescencia técnica, tecnológica o de función.

La obsolescencia técnica o tecnológica es considerada la primera fase en el desarrollo de la obsolescencia<sup>31</sup>, se refiere a la situación en la que “un producto existente se vuelve anticuado con la salida de un nuevo producto al mercado que desempeña su misma función en una forma mejor”<sup>32</sup>, es decir, aquella causada por el progreso tecnológico, técnico o científico que introduce mejoras funcionales a los productos nuevos, poniendo en desventaja funcional a los productos antiguos, acortando su vida útil por la simple existencia de un producto nuevo y mejor funcionalmente.

Como ejemplo de la obsolescencia técnica tenemos el encendido eléctrico en los automóviles<sup>33</sup>. Con la incorporación de este en el año 1913, se generó la obsolescencia de todos los carros anteriores cuyo encendido requería el accionamiento de una manivela. Esta característica resultó más atractiva para el consumidor, en vista de que solo se requería girar una llave para encender el automotor.

Otro ejemplo, lo encontramos en la industria de la música, donde los medios de reproducción y almacenamiento de audio mejoran progresivamente en materia de fidelidad de sonido y capacidad de almacenamiento, por ejemplo, muchos dispositivos que durante el siglo XX eran los medios normales para escuchar música, hoy son considerados obsoletos o piezas de colección como los tocadiscos, Walkmans, LP's y casetes, entre otros, que perecieron ante la llegada de los discos compactos y archivos de reproducción digitales. Lo mismo se predica del almacenamiento de datos de computación en medios portátiles, que ha evolucionado desde los ya desconocidos disquetes o *floppy disk* hasta la omnisciente “nube”<sup>34</sup>.

Este tipo de obsolescencia es categorizada por Soto<sup>35</sup> como “obsolescencia objetiva funcional”, la cual es “no planeada” cuando con las modificaciones surtidas se realicen verdaderas mejoras, como lo sería un aumento en la capacidad de almacenamiento o un aumento en la fidelidad de imagen o sonido; y será “forzosa” cuando los avances o modificaciones realizados no compongan ninguna mejoría, sino simplemente un cambio con

---

<sup>30</sup> SLADE, Op. cit., p. 3-4.

<sup>31</sup> Ibíd. p. 4.

<sup>32</sup> PACKARD, Vance. *Waste Makers*. New York: Ed. David McKay Company, 1960. p. 55. Traducción libre de: “In this situation an existing product becomes outmoded when a product is introduced that performs the function better”.

<sup>33</sup> SLADE, Op. cit., p. 4..

<sup>34</sup> AMAZON WEB SERVICES. Almacenamiento en la nube: ¿Qué es el almacenamiento en la nube?. Consultado el 10 de febrero de 2018. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-storage/>

<sup>35</sup> SOTO, Jesús. En torno a la relevancia jurídica de una estrategia empresarial consolidada y subyacente: la obsolescencia programada. En: Colección Enrique Low Murtra: Derecho Económico. Tomo X. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 337.

el cual se busca incrementar el consumo de bienes similares, haciendo incompatibles los productos anteriores.

Adicionalmente, propone el citado autor<sup>36</sup>, que se considere la existencia de una especial “obsolescencia objetiva informática”, la cual se produce cuando un software es empujado al desuso debido a la aparición de uno nuevo, con el que a su vez es incompatible, y también, cuando se altera el rendimiento de un hardware en razón de la evolución del software al que soporta, quedando el primero obsoleto porque no ejecuta apropiadamente el segundo<sup>37</sup>.

En similar sentido a la denominada “obsolescencia objetiva funcional forzosa”, Chacón propone un subtipo complementario de obsolescencia denominada “obsolescencia de compatibilidad”, definida como los “cambios incorporados a versiones recientes de un producto que, como su nombre bien lo permite entrever, relegan totalmente a la incompatibilidad a las anteriores o a las posteriores, lo que obliga al usuario a actualizarse forzosamente adquiriendo una vez más el bien de consumo”<sup>38</sup>.

Sostenemos que este tipo de obsolescencia, la técnica, puede ser considerada como de normal ocurrencia, toda vez que obedece o es resultado de los avances en los campos de la técnica, ciencia, diseños y a los esfuerzos realizados por las empresas en I+D<sup>39</sup>, y por tal, no será objeto de nuestro análisis jurídico.

Además, en las situaciones en que esta obsolescencia es entendida como aquella que busca generar la incompatibilidad entre productos, consideramos que esto no deja de ser la mera introducción de cambios o variaciones en los productos desarrollados por una empresa, lo cual no puede ser vedado a la luz de la libertad de empresa y no tendría relevancia a la luz del análisis propuesto en este estudio, sin embargo, si se analizará aquella situación en la cual mediante una actualización de software se torna inservible al hardware.

### 1.2.2. Obsolescencia psicológica

La siguiente fase del desarrollo histórico de la figura<sup>40</sup>, estuvo marcada por la obsolescencia psicológica, la cual se presenta cuando “un producto que estando en buenas condiciones de calidad y funcionamiento se desgasta y se hace menos deseable en la mente del consumidor a razón de cambios estéticos en los productos nuevos”<sup>41</sup>. Dicho de otra forma, en palabras de Slade, es el mecanismo consistente en el cambio del estilo de un producto para inducir a los consumidores en compras repetitivas<sup>42</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibíd.* p. 339 - 340.

<sup>37</sup> Sin perjuicio de lo expuesto por el respetado autor, consideramos que el evento en que el software genera la obsolescencia del hardware puede ser considerado y catalogado como un evento de obsolescencia programada de calidad, conforme con lo que se expondrá en el siguiente acápite 1.2.3.

<sup>38</sup> CHACÓN. *Op. cit.*, p. 307.

<sup>39</sup> Investigación y Desarrollo (I+D): referido a la creación de nuevos productos o a la mejora de los ya existentes a través de la aplicación de los resultados obtenidos con investigaciones científicas.

<sup>40</sup> SLADE, *Op. cit.*, p 4.

<sup>41</sup> PACKARD, *Op. cit.*, p. 55. Traducción libre de: “In this situation a product that is still sound in terms of quality or performance becomes “worn out” in our minds because a styling or other change makes it seem less desirable”.

<sup>42</sup> SLADE, *Op. cit.*, p.5.

Partiendo de la definición precitada, la obsolescencia psicológica podría adoptar varias formas, que van desde la realización de cambios al color del producto, la adición de ornamentación no funcional hasta el cambio del perfil del producto.

El elemento fundamental de la obsolescencia psicológica corresponde a la alteración psíquica del consumidor mediante el marketing<sup>43</sup>, con lo que se busca incidir en la conciencia del individuo para generarle la idea de que el producto que tiene se ha vuelto obsoleto o desactualizado, sin importar su funcionamiento técnico real, para que en el surja la necesidad de cambiar su antiguo producto por uno nuevo, sin importar que el nuevo no represente ningún mejora técnica o funcional sino meramente estética.

El efecto de la obsolescencia psicológica es brillantemente resumido por Slade, así “la obsolescencia psicológica fue diseñada para inducir al consumidor en un estado de ansiedad basado en la creencia de que todo aquello que es viejo, es indeseable, poco funcional o descompuesto si se compara con algo nuevo”<sup>44</sup>, por ello, “en términos de manufactura, la obsolescencia psicológica es superior a la obsolescencia técnica, porque es más barata de implementar y puede ser usada a voluntad”<sup>45</sup>.

En palabras de Soto<sup>46</sup>, esta es una “obsolescencia subjetiva de estilo” entendida como aquella por la cual se introducen nuevas formas y diseños, creados para dirigir a los consumidores hacia un nuevo estilo o hacia la desaparición del anterior. Slade<sup>47</sup>, por su parte, considera que la obsolescencia de estilo es un tipo especial de obsolescencia psicológica.

Varios son los ejemplos de la utilización de la psicología en la producción masiva de bienes para influir en la tasa de cambio de los productos. Uno de los primeros, como lo expone Slade<sup>48</sup>, lo encontramos en la introducción del modelo Chevy de 1923, el cual superaría en ventas a su contrincante, el modelo T de Ford, con una simple estrategia: rediseño estético anual, siendo la misma pieza de ingeniería mecánica con variaciones únicamente estéticas. Esto daría lugar a que Ford adoptara esta misma estrategia e iniciara la producción del modelo “A”.

Esta tendencia ha trascendido en la industria automotriz hasta el día de hoy, mediante la introducción de nuevos modelos cada año, que en muchas ocasiones no revelan cambios sustanciales a la motorización o estructura de los vehículos. Esta tendencia en la industria es acertadamente resumida por Soto así:

*(...) el negocio automotor tuvo un cambio drástico de perspectiva, dando a lo superficial una gran relevancia y permitiendo a los productores planificar la duración de los vehículos en razón a los componentes utilizados para fabricarlos, así como también a la impresión de antigüedad, que con la velocidad en los lanzamientos*

---

<sup>43</sup> SOTO, Op. cit., p. 335.

<sup>44</sup> SLADE, Op. cit., p. 50. Traducción libre de: “psychological obsolescence was a strategy designed to put the consumer into a state of anxiety based on the belief that whatever is old is undesirable, dysfunctional, and embarrassing, compared what is new”.

<sup>45</sup> SLADE, Op. cit., p. 36. Traducción libre de: “In manufacturing terms, psychological obsolescence was superior to technological obsolescence, because it was considerably cheaper to create and could be produced on demand”.

<sup>46</sup> SOTO, Op. cit., p. 335.

<sup>47</sup> SLADE, Op. Cit. p. 50. “Obsolescence of style -a specialized kind of psychological obsolescence- focuses consumer attention on the visual or design features of conspicuously consumed personal items”.

<sup>48</sup> SLADE, Op. cit., p. 29-55.

*de nuevos automóviles, generaba, y sigue generando en los consumidores, el deseo de cambiar.*<sup>49</sup> (Negritas fuera de texto)

Un ejemplo paradigmático de este tipo de obsolescencia lo encontramos en toda una industria, la textil y de accesorios, donde pese a que los bienes conserven su funcionalidad y calidad *in integrum*, los consumidores se ven alentados y seducidos a comprar los últimos productos sacados al mercado, todo para estar conforme a los arquetipos de la moda vigente, aunque, resalta Soto<sup>50</sup>, que además de la obsolescencia psicológica, en esta industria se opta por hacer productos de baja calidad que por lo mismo tienen una elevada tasa de cambio.

En términos económicos, la obsolescencia psicológica representa un avance respecto a la obsolescencia técnica, en tanto resulta más barata y fácil de implementar.

Para efectos del análisis jurídico pretendido en este escrito, consideramos que la obsolescencia psicológica resulta irrelevante en la medida en que es la variación de diseños o la actualización estética de los productos por parte del empresario, y por tanto, no incide directamente en la voluntad ni compele al individuo a realizar compras sucesivas, es el comprador quien a partir de una concepción individual, bien con el afán de estar a la moda o de conservar un determinado estatus, se enfoca en adquirir los productos más novedosos sin importar si suponen o no una mejora técnica, no existiendo a nuestro juicio una afectación a un derecho, bien jurídico o norma del ordenamiento, en todo caso, no desconocemos que autores como Soto<sup>51</sup>, Chacón<sup>52</sup> y Correa<sup>53</sup>, entre otros, proponen análisis jurídicos para este tipos de obsolescencia.

Antes de analizar el tercer tipo de obsolescencia programada, la obsolescencia de calidad, consideramos acertado enfatizar en que, a la luz del análisis jurídico que proponemos, los dos tipos de obsolescencia expuestos son irrelevantes, puesto que entendemos que la obsolescencia técnica es producto de la innovación de las empresas o de los cambios que las empresas introducen en sus productos, y la obsolescencia psicológica, por su parte, no incide directamente en la voluntad o derechos propios de los adquirentes de bienes o consumidores.

Además, consideramos que estos dos tipos de obsolescencia se enmarcan dentro del principio *pro libertate*, que en palabras de Magdalena Correa Henao, es el fundamento jurídico de la obsolescencia programada<sup>54</sup>, sin embargo, dentro de este principio de libertad económica y de empresa, consideramos que no se enmarca la obsolescencia programada de calidad, por las razones que procederemos a exponer, previa una presentación de su concepto.

---

<sup>49</sup> SOTO, Op. cit., p. 347.

<sup>50</sup> SOTO, Op. cit. p. 357. “En la moda, el fashion se ha convertido en una pieza esencial de la industria, que a su vez se lleva a la práctica por medio de la transformación estacional de las prendas, aprovechando los colores, los cortes y el movimiento cíclico de los estilos. Lo que al verse aunado a la calidad más bajas de los productos, genera un movimiento continuo en la oferta y la demanda (...)”.

<sup>51</sup> Véase: En torno a la relevancia jurídica de una estrategia empresarial consolidada y subyacente: la obsolescencia programada. En: Colección Enrique Low Murtra: Derecho Económico. Tomo X. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia.

<sup>52</sup> Véase: La Travesía Obsoleta: La Indefensión Del Consumidor. Trabajo de grado para optar al título de Abogado. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014.

<sup>53</sup> Véase: La obsolescencia programada: Tensión constitucional y abuso del derecho. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.

<sup>54</sup> CORREA, Op. Cit. p. 59 “ (...) el fundamento de la obsolescencia programada en el principio *pro libertate* es resultado, en primer lugar, de la aplicación de la faceta negativa de las libertades económicas, desde la cual, al no estar prohibida, ni comprendida dentro de las restricciones por adscribir a autonomía empresarial despierta por la ley, se encuentra permitida por el ordenamiento jurídico”.

### 1.2.3. Obsolescencia de calidad

La obsolescencia de calidad, también denominada como obsolescencia absoluta, según Slade<sup>55</sup>, constituye la fase más desarrollada de la figura e inicio con la asunción de los fabricantes y productores de su capacidad para determinar la vida útil de los bienes que producen.

Definida como “la obsolescencia configurada desde el momento inicial de diseño, mediante la inclusión de los elementos que sean necesarios para garantizar que el producto ajustará su vida útil a la proyectada por la empresa productora”<sup>56</sup>.

A partir de la anterior definición, se resalta un evento histórico, el “Cartel Phoebus”<sup>57</sup> como ejemplo paradigmático de lo que es la obsolescencia programada de calidad. Así fue llamado al acuerdo realizado en 1924 entre los productores mundiales de bombillas en la época, en el que acordaron repartirse el mercado a nivel mundial y pactaron que la vida útil de las bombillas incandescentes comercializadas por los firmantes no podría exceder de 1.000 horas, aun cuando para la época, ya existían bombillas con una duración de 2.500 horas o mucho más, como la bombilla que se instaló en la estación de bomberos de Livermore, California, en 1901 y que a enero de 2018 aún continuaba encendida<sup>58-59</sup>. Este “acuerdo” tuvo una vigencia de 15 años<sup>60</sup>, y según Chacón<sup>61</sup>, sus efectos han perdurado hasta nuestros días<sup>62</sup> con las actuales bombillas fluorescentes o ahorradoras que todavía se sujetan al modelo de 1000 horas de funcionamiento, adoptado ahora de forma anual, de tal manera que las compañías publicitan la duración de sus bombillas por años, por ejemplo 5 u 8 años, pero aclaran en la “letra menuda” que la duración anual se refiere a un uso normal de 1000 horas por año.

Este sistema de producción se extendería desde entonces hasta la actualidad, haciendo presencia en una gran variedad de productos, en la mayoría de las industrias, desde medias veladas, pasando por impresoras, máquinas de afeitar hasta los celulares y ordenadores que usamos a diario.

La obsolescencia programada de calidad es el objeto de nuestro estudio porque revela una afectación al derecho de propiedad<sup>63</sup> que tienen los compradores y consumidores respecto de

---

<sup>55</sup> SLADE, Op. cit., p. 5.

<sup>56</sup> SOTO, Op. Cit. p. 336.

<sup>57</sup> En la tesis realizada por CHACÓN, dedica un capítulo titulado “La nochebuena más oscura” (Págs. 71 a 103) a describir como se inició, desarrollo y los efectos que engendró hasta el día de hoy el denominado “Cartel Phoebus” frente a la vida útil de las bombillas.

<sup>58</sup> GUINNESS WORLD RECORDS. Longest Burning Light Bulb. Consultada el 2 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-burning-light-bulb>.

<sup>59</sup> CENTENNIAL LIGHT BULB COMMITTEE. Bulb-cam. Consultada el 2 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.centennialbulb.org/index.html>.

<sup>60</sup> CHACÓN, Op. cit., p. 81.

<sup>61</sup> CHACÓN, Op. cit. págs. 93-97.

<sup>62</sup> SOTO expone consideraciones en este mismo sentido: “A pesar de lo dicho por empresas como Osram, que defienden que el acuerdo fue extendido una única vez en 1934 en razón de su éxito, así como que el mismo fue anulado en 1940 como resultado de la Segunda Guerra Mundial, incluso a día de hoy se pone en duda dicha circunstancia, toda vez que el Mercado de los bombillos no ha experimentado la aparición de ningún producto de mayor durabilidad que aquella pactada en 1924”. SOTO, Op. Cit. p. 344.

<sup>63</sup> SOTO, Op. Cit. p. 394. “La fabricación en obsolescencia tiene capacidad para limitar un derecho como lo es el de uso y disposición de la propiedad, que en principio, no admite límites planteados y/o definidos por la empresa de forma unilateral, toda vez que los objetivos corporativos no deben prevalecer en ningún caso frente a los intereses económicos y sociales de los consumidores, como partes más débiles de la relación de consumo”.

los bienes que adquieren, adicionalmente, tiene efectos ambientales debido al aumento de productos convertidos en desechos una vez termina su vida útil.

Son esas implicaciones, las que, a nuestro juicio, generan que la obsolescencia programada de calidad deba ser analizada jurídicamente para determinar que normas de nuestro ordenamiento jurídico plantean una regulación a las problemáticas descritas.

Adicionalmente, proponemos, que dentro de esta tipología de obsolescencia, se incluya una “obsolescencia informática de calidad”, en el sentido de lo expuesto por Soto<sup>64</sup>, cuando en forma sobrevenida mediante actualizaciones de software se altera en forma negativa el rendimiento del hardware generando que la experiencia de usuario se vea afectada a tal punto que se causa la impresión de que el hardware ha cumplido con su vida útil y que debe ser cambiado. Reconocemos, que en esta propuesta se evidencia que el mecanismo de obsolescencia es introducido con posterioridad a la producción del bien, sin embargo, esto se produce porque desde la producción se establece un sistema de actualizaciones posproducción.

Antes de adentrarnos en el análisis del ordenamiento jurídico colombiano, consideramos acertado exponer el tratamiento jurídico que se le ha dado a la obsolescencia programada de calidad en el derecho comparado con el fin de tener elementos de juicio adicionales para estructurar nuestra propuesta de regulación en el derecho colombiano.

## **2. La obsolescencia programada de calidad en el derecho comparado**

En algunos países del mundo la obsolescencia programada de calidad ha sido objeto de regulación en forma general mediante la emisión de normas que regulan esta figura, y en forma particular mediante la decisión de jueces en el trámite de procesos judiciales. A continuación, expondremos estos tratamientos analizando el caso de varios países, expondremos nuestro punto de vista frente a cada ordenamiento, y al final manifestaremos las conclusiones o puntos clave importantes con miras a hacer una propuesta de regulación.

### **2.1. Estados Unidos.**

En los Estados Unidos no existe una legislación específica sobre la obsolescencia programada, pero se han registrado casos judiciales cuyos fundamentos fácticos evidencian la existencia de productos sometidos a obsolescencia programada de calidad, los cuales serán expuestos a continuación.

#### **2.1.1. United States v. General Electric<sup>65</sup>.**

Fue un proceso civil iniciado por el Gobierno de los Estados Unidos, representado por los asistentes especializados designados por el Fiscal General del Departamento de Justicia de

---

<sup>64</sup> Ibid. págs. 399 - 400

<sup>65</sup> Este caso es referenciado y explicado entre las páginas 330 a 336 de la tesis de CHACÓN.



los Estados Unidos, contra General Electric Co. y los licenciados de sus patentes, con el proceso pretendía evitar la concentración monopólica de los demandados en el mercado de la bombilla incandescente a partir de las leyes de competencia norteamericanas<sup>66</sup>. El proceso fue decidido por la Corte del Distrito de New Jersey el 19 de enero de 1949 y corregida el 4 de abril del mismo año, del fallo se destaca lo siguiente:

*El Gobierno argumenta que debido a su tamaño, posición financiera y dominio en el mercado del bombillo eléctrico incandescente la General Electric tenía el poder de:*

- (a) Intimidar a los comercios para que no vendieran productos de quienes podían competir con la General Electric;*
- (b) Deteriorar la calidad de los bombillos que producía, incluso teniendo el conocimiento técnico para fabricar un mejor producto,*  
*(...) <sup>67</sup>. (Negritas fuera de texto)*

El poder de “deteriorar la calidad de los bombillos que producía, incluso teniendo el conocimiento técnico para fabricar un mejor producto” es el que nos interesa, pues en este se evidencian hechos que revelan la existencia de obsolescencia programada de calidad, frente a este, el Gobierno de los Estados Unidos alegó 3 cargos.

El primero, “la General Electric no produce como estándar una bombilla con capacidad lumínica mayor a 14 lúmenes, sin perjuicio de que el Dr. Coolidge testificó que era posible producir bombillas con 24 lúmenes”<sup>68</sup>.

Frente al primer cargo, desde un análisis probatorio la Corte decidió que “No es razonable inferir desde las pruebas presentadas que la General Electric tenía el poder de comercializar al público una bombilla de 60 watt con una capacidad lumínica superior a 24 lúmenes, como el gobierno argumentó”<sup>69</sup>.

El segundo cargo, versó sobre las lámparas de mano, el Gobierno sostuvo que: “En los 20’s las lámparas de mano producidas por la General Electric tenían una vida útil de tres baterías. Esta fue reducida a dos baterías y en 1932 el departamento de ingeniería de la compañía propuso reducirlo a una batería. Esto se encuentra probado en un memorando firmado por Mr. Prideaux”<sup>70</sup>.

General Electric se opuso al segundo cargo, alegando que: “El propósito del cambio en la vida útil del bombillo era el de reducir los costos energéticos de la luz para el usuario de la

---

<sup>66</sup> District Court for the District of New Jersey. United States V. General Electric Co. et al. F. Supp. 753 (1949). Consultado el 4 de abril de 2018. Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/82/753/1755675/>.

<sup>67</sup> Ibid. Traducción libre: “The Government argued generally that due to its size, financial position and dominance in the incandescent electric lamp industry, General Electric had the power (a) to intimidate businesses from selling to purchasers who might compete with General Electric;

(b) to deteriorate the quality of the lamps it produced and with its technical knowledge to produce a better product; and  
(c) to exclude lamp companies from domestic licenses.”

<sup>68</sup> Ibid. Traducción libre: “Government concluded that General Electric does not produce a commercial standard line lamp better than 14 lumens, although Dr. Coolidge testified that 24 lumens were possible”.

<sup>69</sup> Ibid. Traducción libre: “It is unreasonable to infer from the state of this showing that General Electric had the power to deliver to the consuming public a 60 watt lamp having an efficiency rating of 24 lumens as the Government argued”.

<sup>70</sup> Ibid. Traducción libre: “In the 1920s a flashlight bulb manufactured by General Electric would have a life coextensive with three batteries. This was reduced to two batteries and in 1932 the engineering department of General Electric made a study of a proposal to change the design life of flashlight lamps to one battery life. This is set forth in a memorandum signed by Mr. Prideaux”.

linterna, esto se logró haciendo que la vida útil de las lámparas fuera más corta pero que fueran más luminosas, y esto, por accidente devino en un aumento en la venta de las linternas en un 60%”<sup>71</sup>.

El tercer cargo, se refería a dos modelos de bombillos, el bombillo nocturno denominado “C-7” con una vida útil de 2000 horas y el bombillo para árbol de navidad denominado “C-7½” con una vida útil de 500 horas, respecto de los cuales el Gobierno alegó que: “General Electric se opuso a cualquier plan que permitiera el reemplazo de la bombilla C-7 ½ por la C-7 que tenía mayor durabilidad, debido a que estaban preocupados por la baja en ventas y por la oposición de los fabricantes de árboles de navidad”<sup>72</sup>, teniendo en cuenta que los licenciados deseaban usar el bombillo C-7 porque este era más duradero, y precisamente en oposición a esa idea la General Electric emitió memorandos a sus empleados en los que les comunicaba que debían evitar enviar a los licenciados los bombillos C-7 si tenían conocimiento de que iban a ser usados en árboles de navidad.

General Electric solicitó que este cargo fuera desestimado teniendo en cuenta que “el énfasis en las ventas de los bombillos C-7 ½ para los árboles de navidad se hizo debido a razones técnicas fundamentadas en las diferencias en el diseño de los bombillos según su uso y sin consideración alguna a su consumo”<sup>73</sup>, las razones eran las siguientes:

*(...) los bombillos C-7 son pequeños y diseñados para emitir una luz tenue en pasillos, enfermerías, etc. requiriendo que este encendido toda la noche sin importar la cantidad de luz emitida, por lo tanto, su larga vida útil. Mientras que la C-7½ de similar tamaño y forma atiende a un fin diferente que es el de ser muy luminosas por hacer parte de la decoración de los árboles de navidad, están diseñadas para emitir gran cantidad de luz y por ello su vida útil corta. No obstante, este bombillo le duraría a un usuario común hasta por 10 navidades. El bombillo C-7 aunque pudiera ser instalado en el enchufe del árbol de navidad, es inadecuado debido a la poca capacidad lumínica del mismo ya que no estaba hecho para aguantar a las condiciones de trato a que está expuesto un bombillo de árbol de navidad*<sup>74</sup>.

En lo referido al segundo y tercer cargo, la Corte del Distrito de New Jersey sentenció lo siguiente:

***Si bien el primer cargo demandado por el Gobierno ha sido rechazado, los restantes cargos concernientes a los bombillos de linterna y bombillos de árbol de navidad demuestran la existencia de la capacidad de General Electric para acortar la vida***

---

<sup>71</sup> Ibíd. Traducción Libre: “(...)the main purpose of the change in the life of the lamp was to lower the total costs of light to a flashlight user by making the design life of lamps then in use shorter so as to cause them to give more light, and that, incidentally, it was estimated that its sales of flashlight lamps would be increased about 60%”.

<sup>72</sup> Ibíd. Traducción libre: “General Electric was opposed to any plan which would permit the substitution of the long lived night lamp for the Christmas tree lamp having the shorter life because it was concerned with loss of sales and the opposition of the Christmas tree string manufacturers”.

<sup>73</sup> Ibíd. Traducción libre: “it emphasized the sale of the C-7-1/2s for Christmas tree lamps without thought of the consumer's interest but insisted that technical reasons for different designs of the lamps were the paramount considerations”.

<sup>74</sup> Ibíd. Traducción libre: “(...) the night light was a small lamp designed to throw a spot of dim light for use in hallways, nurseries, etc. It was required to burn throughout the night and the amount of light produced was unimportant so that long life could be given to it. The Christmas tree lamp of similar size and shape was entirely different in purpose being required to produce the sparkle and brilliance of particular interest to Christmas tree decoration. Designed to give brilliant light it had a shorter design life. Even so, it would last the ordinary consumer about 10 Christmas seasons, disregarding shocks in handling. The night lamp, although it would fit into the socket of the Christmas tree lamp, was unsuited because it lacked brilliance and was not of the rugged construction to meet the rougher handling to which the Christmas tree lamp was exposed (...)”.

*útil de un bombillo. De igual forma, debe tenerse en cuenta la relación indisoluble que existe entre la vida útil de un bombillo y su capacidad lumínica. Se ha probado que los bombillos de linterna y el bombillo C-7 ½ de árbol de navidad, constituyen un margen mínimo en la industria del bombillo incandescente, aunque la producción y el beneficio obtenido de ellos se encuentra lejos de ser insignificantes.*

*A pesar de las afirmaciones de buena fe, discreción comercial, investigación técnica e interés de los consumidores. Es manifiesto en las dos situaciones que la consideración primordial era la obtención del máximo de ganancias posibles para el productor. También, es manifiesto que General Electric tenía el poder, en el caso del bombillo linterna, de acortar la vida útil del bombillo, y en el caso del bombillo C-7 ½ de árbol de navidad, tenía la capacidad, de cuando menos, promover un producto con una vida corta para un uso específico sobre uno que tenía cuatro veces su vida útil.*

*En todo caso, las pruebas del proceso conducen a la conclusión de que en virtud de la posición dominante ejercida por General Electric en la industria del bombillo y a la falta de competencia en el mismo, tenía el poder de establecer el estándar de eficiencia de los bombillos incandescentes para toda la industria y en ese caso determinar su vida útil, lo que es un poder conferido por el monopolio ostentado<sup>75</sup>. (Negritas fuera de texto)*

Del fallo de este proceso judicial se puede extraer una consideración especial, relativa a que el juzgador consideró que la obsolescencia programada de calidad era reprochable a la luz de la libre competencia, puesto que el “estándar de eficiencia” había sido impuesto en desarrollo de una posición dominante en un mercado, sin embargo, se echa de menos alguna consideración frente a las afectaciones que pudieron haber sufrido los consumidores en su calidad de actores relevantes del mercado.

---

<sup>75</sup> Ibid. Traducción libre: “Although the Government’s contention that it has proved that General Electric could have produced a 60 Watt lamp giving 24 lumens of light has been rejected, these latter contentions with regard to flashlight bulbs and Christmas tree lamps illustrate an existing ability upon the part of General Electric to shorten the life of a lamp. At the same time it should be borne in mind that the life of a lamp is inextricably related to the power of its light in that the greater the strength of the light the shorter will be the life of the lamp. It is realized that flashlight and Christmas tree lamps are lines of lesser importance in the incandescent electric lamp industry, although the overall production and profit in them is far from inconsequential. Despite assertions of good faith, sound business discretion, great technical research, and consideration for the interest of the consuming public, there was manifested in the two situations a paramount concern in what would afford the maximum return in profits to the manufacturer and that General Electric had the power in the instance of the flashlight lamp, to shorten the life of the lamp, and in the instance of the Christmas tree lamp, at least, to promote a product with a short life for a specific use over one that had four times its life. However, the total proof leads to the conclusion that by virtue of General Electric’s dominating position in the industry and relative lack of competition it had the power to set the standard of efficiency of incandescent electric lamps for the entire industry and in so doing to determine what should be their length of life, and this constitutes an attribute of monopoly”.

### 2.1.2. Casos contra Apple Computer Inc.

Contra la empresa de Cupertino se han intentado varias acciones judiciales cuyos fundamentos fácticos revelan la existencia de obsolescencia programada de calidad.

#### (I) La batería del iPod de primera generación.

El primer caso data del 26 de diciembre de 2003 cuando la Corte Superior de California conoció de una acción de grupo en contra de Apple<sup>76-77</sup>. Según los demandantes los hechos que dieron lugar a la acción, se circunscriben a que la primera generación del iPod presentaba un problema en la batería, la cual tras unos 12 a 18 meses de uso empezaba a deteriorarse hasta no poder ser recargada<sup>78</sup>, dejando de funcionar el producto, ante ese desperfecto algunos consumidores acudieron al servicio técnico de Apple encontrándose con que debían pagar \$99 dólares para cambiar la batería del iPod, lo cual consideraban como engañoso frente a la publicidad que decía que el iPod podría durar hasta 27 años reproduciendo una canción diaria<sup>79</sup>, aunado a que no había información relativa a la batería<sup>80</sup>. Además, los usuarios no podían reparar el producto por si mismos ni mediante terceros diferentes a los autorizados por Apple, pues abrir la carcasa del dispositivo anularía la garantía<sup>81</sup>.

El parágrafo 42 de la demanda resume los cargos contra Apple así:

*Apple oculto en fraudulentamente a los consumidores que adquirieron un iPod que la batería interna del dispositivo puede consumirse y que su duración es limitada a un tiempo corto que va del año a los 18 meses. Apple ha ocultado fraudulentamente a los consumidores que la batería solamente podría ser reemplazada a un elevado costo, y que la batería debía ser reemplazada reiteradamente por tanto tiempo como el consumidor usara el iPod. Las tergiversaciones realizadas por Apple entorno a la vida útil y durabilidad de la batería del iPod tenían como fin engañar y conducir a los consumidores a gastar cientos de dólares en sus iPods<sup>82</sup>.*

<sup>76</sup> SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF SAN FRANCISCO. Andrew E. Westley V. Apple Computer Inc. Case No. CGC 03 427701 (2003). Consultado el 4 de abril de 2018. Disponible en: <http://www.plainsite.org/dockets/wog8xuhz/superior-court-of-california-county-of-san-francisco/andrew-e-westley-v-apple-computer-inc-et-al/>.

<sup>77</sup> PRITZKER, Elizabeth & WILLIAMS, Steven. First Amended Class Action Complaint. En el proceso de Andrew E. Westley V. Apple Computer Inc. Case No. CGC 03 427701 (2003). Disponible en: <https://www.plainsite.org/dockets/download.html?id=40774246&z=7631139e>

<sup>78</sup> Ibid. “24. (...) However, contrary to Apple’s misrepresentations, the battery can no longer be recharged after approximately twelve to eighteen months.”

<sup>79</sup> Ibid. “ 23. As presently set forth on Apple’s iPod webpage, “iPod gives you a huge 10GB, 20GB and 40GB hard drive-big enough to hold 10,000 songs. Do the math: that’s four weeks of music-played continuously, 24/7 – or one new song a day for the next 27 years.””.

<sup>80</sup> Ibid. “ 23. (...) Apple never disclosed any contrary information about the battery. Attached hereto as Exhibit D is a true and correct copy of original iPod product packaging. There is no indication on this packaging of the finite life”.

<sup>81</sup> Ibid. “3. (...) The iPod is not designed to be opened by the consumer (even if the could obtain the battery), and opening an iPod voids the warranty (...)”.

<sup>82</sup> Ibid. Traducción libre: “Apple fraudulently concealed from consumers that iPod’s internal battery is exhaustible and will last for a limited duration of as little as one year to 18 months. Apple fraudulently concealed from consumers that the battery could only be replaced at substantial expense, and that the battery would have to be repeatedly replaced for as long as the consumer used the iPod. Apple’s misrepresentations concerning the longevity and durability of iPod’s battery were designed and implemented to lure consumers into spending hundreds of dollars for iPods”.

El fundamento jurídico de la *class action* fue la alegada violación de Apple a la Ley de Competencia Leal y al artículo 17200 del Código de Negocios y Profesiones de California<sup>83</sup>, alegando que la política de Apple relativa a que los consumidores no podían reemplazar las baterías de los iPod era una práctica que generaba un enriquecimiento ilegítimo a favor de la compañía y un detrimento de los compradores, pues suponía tener que reemplazar dicho dispositivo en el futuro.

En las fases iniciales del proceso se logró demostrar técnicamente que la batería no duraba el término anunciado por Apple, sin embargo, el proceso no llegó a ser decidido por el juez del caso debido a que las partes llegaron a una conciliación en la cual Apple se obligó a reparar las baterías defectuosas y entregar un bono canjeable en productos de su marca a los consumidores<sup>84</sup>.

Si bien no existió una decisión judicial definitiva, creemos que la actitud conciliadora de Apple en el caso puede ser tomado como un indicio de las probabilidades de éxito de la misma, especialmente, teniendo en cuenta que con la demanda se acusaba a la compañía de utilizar una estrategia de obsolescencia para lucrarse con la venta y reparación del iPod de primera generación.

## (II) iOS 9.0 y el iPhone 4s.

Una *class action* fue presentada en contra de Apple el 29 de diciembre de 2015<sup>85</sup>, los accionantes alegaron en el texto de la demanda, lo siguiente: la empresa en forma deliberada afectó el funcionamiento del iPhone 4s con la actualización 9.0 del sistema operativo iOS<sup>86</sup>, de tal manera que resultaba imposible darle un uso normal al dispositivo<sup>87</sup>; indicaron que Apple incurrió en prácticas comerciales engañosas y publicidad engañosa según lo establecidos los artículos 349 y 350 de la *New York General Business Law* y de los artículos 56:8-1 y siguientes de la *New Jersey Consumer Fraud Act*, puesto que la compañía anunció que la versión 9.0 de iOS era compatible con el iPhone 4s<sup>88</sup> y no era cierto ya que no podía usarse el dispositivo con normalidad, generando que “Los accionantes afrontaran una

---

<sup>83</sup> California. Bus. & Prof. Code. Section 17200. As used in this chapter, unfair competition shall mean and include any unlawful, unfair or fraudulent business act or practice and unfair, deceptive, untrue or misleading advertising and any act prohibited by Chapter 1 (commencing with Section 17500) of Part 3 of Division 7 of the Business and Professions Code.

<sup>84</sup> Este proceso es ampliamente descrito en: DANNORITZER, Cosima y RTVE. Comprar, Tirar, Comprar: La Historia Secreta de la Obsolescencia Programada., Noviembre 30, 2010. Consultado el 20 de diciembre de 2017. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/>.

<sup>85</sup> BUSSINESS INSIDER. People are suing Apple for \$5 million claiming iOS 9 slowed down their iPhones. Diciembre, 2015. Consultado el 15 de enero de 2018. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/apple-ios-9-class-action-lawsuit-2015-12>.

<sup>86</sup> PERETZ, Bronstein & SHIMON, Yiftach. Second Ammendment Class Action Complaint. En el proceso de Lerman. Et Al. V. Apple Inc. Case No. 1:15-cv-07381. Consultado el 14 de abril de 2018. Disponible en: [http://www.classactionsreporter.com/sites/default/files/apple\\_os9\\_update\\_complaint.pdf](http://www.classactionsreporter.com/sites/default/files/apple_os9_update_complaint.pdf). P. 2 “After the update, Plaintiffs’ iPhones were no longer functional for normal use. After the update, Plaintiffs’ devices slowed down significantly, with delayed responses to touch interactions, application (“App” or “Apps”) launches (Apple and third party Apps), and many other problems in all other aspects of the phone’s performance, including crashes, freezes, App shutdowns or failure to launch apps, and difficulty or failure to make and receive calls. Basically, Plaintiffs’ devices became slow and buggy, with significant usability problems during everyday use”.

<sup>87</sup> Ibid. p. 3. “10 The update caused performance problems in all aspects of the iPhone’s functionality, including core functions like the phone, email, text messages, contacts, etc. (...)”.

<sup>88</sup> Ibid p 9. “40. Apple explicitly advertises and advises consumers that the iPhone 4s is compatible with iOS 9. <https://www.apple.com/ios/whats-new/#compatibility> (last accessed December 2, 2015). This is also obvious from the fact that Apple pushes the update to and makes it available for download on the iPhone 4s, but not older iPhone models. (...)”.

decisión difícil: usar un dispositivo malfunctionante y lento que perturbaba su diario vivir o gastar cientos de dólares y comprar otro celular inteligente ”<sup>89</sup>.

Al día en que se escriben estas palabras (30 de septiembre de 2018) aún no existía una sentencia por parte del juez Sterling Johnson Jr. del Distrito Este de Nueva York, no obstante, en noviembre de 2017 el juez denegó una *motion to dismiss*<sup>90</sup> presentada por los abogados de Apple, expondremos lo más relevante de esta decisión.

Los demandados solicitaron la desestimación con fundamento en que “el Acuerdo de Usuario de iOS 9 prohíbe cualquier demanda relacionada con el funcionamiento satisfactorio o la compatibilidad del sistema operativo con alguno de los dispositivos ”<sup>91</sup>.

A su vez, los demandantes alegan que “en el Acuerdo de Usuario no se hace mención ni se informa a los usuarios que iOS 9 tiene la potencialidad de destruir su dispositivo, y en ninguna forma, podría una renuncia del usuario otorgar a Apple el derecho de destruir los dispositivos con la excusa de una actualización que aumente el rendimiento de los dispositivos”<sup>92</sup>.

Para analizar la procedencia de la moción de desestimación, el juez analizó los cargos de la demanda según las disposiciones de la *New York General Bussines Law* y la *New Jersey Consumer Fraud Act*, teniendo como base el siguiente *Standards of review*:

*Para sobrevivir a una moción de desestimación, la demanda debe fundamentarse en un número suficiente de hechos, que de ser aceptados como ciertos, establecen una reclamación de perjuicios procedente por sí misma. Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009). Una reclamación es procedente por sí misma cuando el demandante invoca contenido fáctico que permite al tribunal inferir razonablemente que el demandado es responsable de la mala conducta endilgada. Iqbal, 556 U.S. at 678. La demanda debe contener más que etiquetas y afirmaciones conclusivas. Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007)*<sup>93</sup>.

Frente a las disposiciones de la *New York General Bussines Law*, expresó que, la sección 349 prohíbe “actos o prácticas engañosas en los negocios, intercambios, relaciones comerciales o en la prestación de cualquier servicio en este estado” y la sección 350 prohíbe “la publicidad engañosa en los negocios, intercambios, relaciones comerciales o en la prestación de cualquier servicio en este estado”, y para probar la violación a estas dos disposiciones “el

---

<sup>89</sup> Ibid. Traducción libre de: “1. (...) leaving Plaintiffs with a difficult choice: use a slow and buggy device that disrupts everyday life or spend hundreds of dollars to buy a new phone”.

<sup>90</sup> NEW YORK EASTERN DISTRICT COURT. Order on motion to dismiss. Lerman et Al. vs. Apple Inc. Case No. 1:15-cv-07381 (2017). Consultado el 17 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.truthinadvertising.org/wp-content/uploads/2017/11/Lerman-v-Apple-order-denying-motion-to-dismiss.pdf>.

<sup>91</sup> Ibid. p. 3. Traducción libre: “Defendants move to dismiss Plaintiffs' claims arguing, among other things, that the iOS 9 User Agreement bars any suit regarding the satisfactory operation of iOS 9 or its compatibility with any device”.

<sup>92</sup> Ibid. p. 3. Traducción libre: “Plaintiffs assert that nothing in the agreement disclaims or makes a user aware of the potential that iOS 9 will destroy their device, nor should a mere disclaimer entitle Apple to intentionally damage their devices under the guise of an update that will “enhance performance”.

<sup>93</sup> Ibid. p.4. Traducción libre: “To survive a motion to dismiss, a complaint must contain sufficient facts that if accepted as true, would “state: a claim to relief that is plausible on its face.” Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009). A claim is facially plausible where “the plaintiffpleads factual content that allows the court to draw the reasonable inference that the defendant is liable for the misconduct alleged.” Iqbal, 556 U.S. at 678. The complaint must contain “more than labels” and conclusory assertions. Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007)”.

demandante debe probar que el demandado incurrió en una conducta **materialmente engañosa** y que el sufrió un **perjuicio** a raíz de dicha conducta”<sup>94</sup> (Negritas fuera de texto).

De seguido, enunció el juez que una práctica es sustancialmente engañosa, cuando “la conducta tiene una alta probabilidad de engañar a un consumidor razonable que actúa razonablemente de acuerdo con las circunstancias propias”<sup>95</sup>, y en el análisis de esta, debe tenerse en cuenta “la posición de las partes en la negociación y el acceso a la información”<sup>96</sup>.

Por su parte, el perjuicio a la luz de las disposiciones analizadas debe ser “existente, aunque no necesariamente en términos pecuniarios”<sup>97</sup>. Por último, expresó, que “aunque la conexidad no es uno de los elementos de un reclamo fundamentado en la sección 349 (Stutman, 95 N.Y.2d at 29), el demandante debe probar que el engaño sustancial o la omisión causaron el perjuicio”<sup>98</sup>.

Existiendo claridad conceptual sobre lo que es una práctica sustancialmente engañosa, el juzgador centró el análisis en los argumentos esgrimidos por las partes:

*Los demandantes que alegan la violación a la ley de New York, sostienen que en el aviso de descarga de la actualización 9.0 de iOS existía un engaño sustancial, pues se informaba que iOS 9.0 mejoraría el rendimiento del dispositivo, cuando en realidad destruía o disminuía considerablemente la utilidad del iPhone 4s. Esto es suficiente para satisfacer el elemento de engaño sustancial*<sup>99</sup>.

*También, satisficieron el elemento de tergiversación material, al alegar que iOS 9 fue dañino debido a factores dentro de la órbita de control de Apple y que Apple conocía esta condición debido a las pruebas que realiza antes de sacar al público la actualización, sin embargo, no reveló dicha condición*<sup>100</sup>.

*Apple sostiene que ninguna de estas conductas es un engaño sustancial. En primer lugar, alega, que a pesar del enunciando en la pantalla al descargar la actualización, existe una declaración de no responsabilidad. Sin embargo, Apple sabe que el descargo de responsabilidad no surte efectos frente a la moción de desestimación, pues frente a la sección 349 no puede plantearse una defensa en asuntos de derecho sustancial*<sup>101</sup>.

*En segundo lugar, Apple sostiene que el Acuerdo de Usuario de iOS 9 informa la conducta alegada como engañosa, por tanto, no procede reclamo alguno por engaño*

---

<sup>94</sup> Ibid. p. 4. Traducción libre: “To prove a violation of Section 349 or 350, a plaintiff must show that the defendant engaged in consumer-oriented conduct that was materially misleading and that the plaintiff suffered an injury as a result of that deceptive act or practice.”

<sup>95</sup> Ibid. p. 5. Traducción libre: “likely to mislead a reasonable consumer acting reasonably under the circumstances”.

<sup>96</sup> Ibid. p. 5. Traducción libre: “In assessing the adequacy of pleadings under Sections 349 and 350, courts may take into account the parties’ relative bargaining positions and access to information”.

<sup>97</sup> Ibid. p. 5. Traducción libre: “An injury under Sections 349 and 350 must be ‘actual, although not necessarily pecuniary, harm’”

<sup>98</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre: “And although ‘reliance is not an element of a § 349 claim, (Stutman, 95 N.Y.2d at 29), a plaintiff must prove that the material misrepresentation or omission caused the injury’”.

<sup>99</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre: “The New York Plaintiffs alleged that the download screen makes material misrepresentations by stating that iOS 9 will ‘enhance performance’ and make their devices ‘more intelligent’ when iOS 9 actually destroys (or at least greatly diminishes the value of) iPhone 4s devices. This allegation is sufficient to satisfy the material misrepresentation element”.

<sup>100</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre: “Alternatively, the New York Plaintiffs also ‘satisfied this element by alleging that iOS 9 was harmful due to factors within Apple’s control and that Apple knew about its harmfulness from pre-release testing yet failed to disclose that harm’”.

<sup>101</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre: “Apple argues that neither of these constitutes a material misrepresentation. First, Apple claims, despite its Download screen representations, its disclaimers bar the instant claim. But Apple knows well that disclaimers cannot, at the motion to dismiss stage, bar a Section 349 suit because disclaimers do not establish a defense as a matter of law”.

*sustancial. Apple arguye que un consumidor razonable no habría sido engañado debido a las revelaciones contenidas en el Acuerdo de Usuario. Sin embargo, esta Corte concluye que, un consumidor racional podría encontrar que el Acuerdo de Usuario no informa que iOS 9 convertía (o podría convertir) al iPhone 4s en un dispositivo inutilizable<sup>102</sup>.*

*Por último, Apple alega que la información contenida en la pantalla de descarga de iOS 9 no era engañosa. La pantalla decía lo siguiente “mejora los cimientos del sistema operativo, aumenta el rendimiento, mejora la seguridad y otorga hasta una hora extra de batería”. (...). Los demandantes alegan que la expresión “aumenta el rendimiento” es engañosa toda vez que la actualización destruye a los dispositivos. Apple sostiene que los demandantes están usando la expresión fuera de contexto. Sin embargo, la Corte, no encuentra contexto alguno donde la expresión “aumenta el rendimiento” sea compatible con “destruye los dispositivos iPhone 4s”<sup>103</sup>.*

Tras la exposición de los argumentos de las partes, concluyó que, en todo caso, los demandados no lograron desvirtuar los argumentos de la demanda, frente a la existencia de una práctica engañosa, porque “inducir a un consumidor a descargar iOS 9 sabiendo que va a destruir su dispositivo se enmarca en lo contenido en las secciones 349 y 350”<sup>104</sup>.

Al no haberse desvirtuado la alegada existencia de una práctica engañosa, consideró el juez que se solicitó fundadamente la existencia de un perjuicio, en la medida que, “fundamentaron su reclamo en que iOS 9 destruye en forma irreversible (una vez actualizado el sistema operativo, no se puede regresar a la versión anterior), o disminuye considerablemente el valor del iPhone 4s, sin que los alegatos de Apple al respecto tengan merito como para ser considerados”<sup>105</sup>.

Frente al nexo de causalidad, considero el juez que los demandantes lo habían alegado en forma suficiente, teniendo en cuenta que fueron los términos anunciados por Apple en la pantalla de descarga lo que condujo a los consumidores a creer que iOS 9 mejoraría el rendimiento de los dispositivos, por ello, descargaron la actualización, y fue esta la que destruyó o dejó sus dispositivos inservibles<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> Ibid. p. 7. Traducción libre: “Second, Apple claims the iOS 9 User Agreement fully discloses the allegedly deceptive conduct, foreclosing any claim of misrepresentation. This argument is a variant of the first. Apple is arguing that no reasonable consumer would have been misled by its conduct in light of the disclosures made in the agreement. But by this Court's reading, a reasonable consumer, could find that the agreement does not disclose that the iOS 9 software would (or could) render their iPhone 4s inoperable”.

<sup>103</sup> Ibid. p. 7. Traducción libre: “Finally, Apple argues that the representations in the download screen were not misleading. The download screen says “improvements at the foundation of the operating system enhance performance, improve security and give you up to an hour of extra battery life”. (...). Plaintiffs allege that the phrase “enhance performance” is misleading since the update actually destroyed their devices. Apple claims that Plaintiffs' isolation of “enhance performance” inappropriately takes that phrase out of context. But the court is hard-pressed to find any context which makes “enhance performance” compatible with “destroys iPhone 4s devices”.”

<sup>104</sup> Ibid. p. 8. Traducción libre: “Even if “enhance performance” only meant improving security and extending battery life, that argument still does not defeat the New York Plaintiff's claims since inducing a consumer to download iOS 9 while knowing that it will destroy their device implicates Sections 349 and 350”.

<sup>105</sup> Ibid. p. 8. Traducción libre: “The New York Plaintiffs have sufficiently pleaded injury in that they claim iOS 9 irreversibly (It is important to note that the iOS 9 download was irreversible. Once applied to a device, Plaintiffs could not revert to their prior operating system) destroyed, or greatly diminished the value of, their device. Apple's opposition to this prong is without merit”.

<sup>106</sup> Ibid. p. 9. “Finally, the New York Plaintiffs have sufficiently pleaded causation. Apple misled them into believing iOS 9 would enhance the performance of their devices through representations it made in its download screen. As a result, they downloaded the software, which destroyed, or greatly diminished the value of their devices. Apple concedes Plaintiffs encountered the download screen prior to downloading iOS 9 and that it makes the above representations. As such, Apple's causation arguments are without merit. Therefore, the New York Plaintiffs' Sections 349 and 350 claims are plausible”.



Por lo anterior, consideró el juez Sterling, que las reclamaciones fundamentadas en las secciones 349 y 350 de la ley neoyorquina son plausibles y merecedoras de seguir la causa hasta el juicio.

Respecto de las reclamaciones fundamentadas en la violación de la *New Jersey Consumer Fraud Act*, determinó el juez que estas se debían fundamentar en: (1) conducta ilegal, (2) perjuicio verificable y (3) relación de causalidad entre la conducta ilegítima y el perjuicio verificable.

La conducta ilegal es “toda práctica comercial indeseada, ilusoria, fraudulenta, falsa, engañosa, o aquella por la cual se oculta, se suprime u omite un hecho material conocido con el fin de generar confianza en una persona... Sin importar que esta práctica haya efectivamente inducido en error, engañado o afectado a alguien. El elemento principal es la capacidad de engañar. Si es un acto positivo no se debe probar la intención de engañar. Si es un acto omisivo se debe alegar la intención.”<sup>107</sup>.

Mientras que un perjuicio verificable es aquella pérdida definida, cierta y medible, en oposición a aquella que es meramente teórica, sin que sea necesario que dicha pérdida le haya generado una erogación monetaria al afectado<sup>108</sup>.

Analizando el caso concreto, el juez Sterling consideró que las reclamaciones fundamentadas en la ley de Nueva Jersey, eran fácticamente iguales a las realizadas bajo la ley de Nueva York, y que desde esa óptica cumplían con lo requerido por la *Consumer Fraud Act*<sup>109</sup>. En ese mismo sentido se pronunció frente a los alegatos de Apple, que al ser prácticamente los mismos eran “más humo que fuego”, y por tanto improcedentes<sup>110</sup>.

Este caso se enmarca dentro de lo que hemos denominado como obsolescencia objetiva informática de calidad <sup>111</sup>, porque el software (iOS 9.0) convierte en obsoleto el hardware (iPhone 4s), sin embargo, en el caso concreto la discusión sustancial se cierne sobre la existencia de información engañosa puesto que, en la información suministrada en el Acuerdo de Usuario, la compañía manifestaba que el software era compatible, e incluso, que podría generar mejoras en términos de rendimiento.

Del caso expuesto, consideramos especialmente relevante el hecho de que vía un pronunciamiento judicial se ha reconocido que un mecanismo de obsolescencia programada de calidad puede constituirse en una conducta engañosa para el público, anotando que en el

---

<sup>107</sup> Ibid. p. 9. “(...) unconscionable commercial practice, deception, fraud, false pretense, false promise, misrepresentation, or knowing concealment, suppression, or omission of any material fact with intent that others rely... whether or not any person has in fact been misled, deceived or damaged thereby.” N.J.S.A. 56:8-2. The prime ingredient is the capacity to mislead. See *Fenwick v. KayAm. Jeep, Inc.*, 72 N.J. 372, 378 (1977). For affirmative acts of unlawful conduct, intent is not an element. See *Cox v. Sears Roebuck & Co.*, 138 N.J. 2, 17-18 (1994). But for omissions, plaintiffs must allege that the defendant acted with knowledge; and intent is an element”.

<sup>108</sup> Ibid. p. 10. “Ascertainable loss is defined as a definite, certain and measurable loss, rather than one that is merely theoretical. See *Thiedemann v. Mercedes-Benz USA, LLC.*, 183 N.J. 234, 248 (2004). However, the loss need not yet have been experienced as an out-of-pocket loss to the plaintiff. Id. at 248-49; see also, *Cox*, 138 N.J. at 22-23 (noting that to demonstrate “loss” a victim need not have actually spent money to perform repairs to correct defendant’s errors)”.

<sup>109</sup> Ibid. p. 11. “In terms of substance, Vorrasi’s claims are sufficient for the same reasons as the New York Plaintiffs’ claims.”

<sup>110</sup> Ibid. p. 12. “Naturally, Apple disagrees. **But Apple’s retorts are more smoke than fire.** Apple simply regurgitates the same arguments that failed against the New York Plaintiffs: the iOS9 User Agreement bars the claim and the download screen makes no misrepresentations. But now, Apple adds two new arguments: Vorrasi’s omission claim does not properly plead knowledge, and does not plead quantifiable loss. As explained above, each of these arguments are without merit” (Negritas fuera de texto).

<sup>111</sup> Ut supra. Acápites 1.2.3.

caso en concreto la discusión se cierce sobre la veracidad de la información suministrada al consumidor.

### (III) Batterygate

Como *Batterygate*<sup>112</sup>, se conoció a la controversia alrededor de las denuncias públicas hechas por los usuarios de iPhone en contra de Apple, alegando que la versión 10.2.1. del sistema operativo de los celulares -iOS-, generaba que los modelos anteriores al iPhone 8 sufrieran una disminución en su rendimiento con la actualización del sistema operativo. Denunciaban los usuarios que la compañía ralentizaba los modelos antiguos para que los usuarios se vieran obligados a adquirir los modelos más recientes<sup>113</sup>.

En respuesta a las denuncias, la compañía emitió un comunicado el 28 de diciembre de 2017, en el que informó que con la versión 10.2.1. de iOS se implementó una herramienta en su sistema operativo que disminuía la capacidad de procesamiento de los dispositivos más antiguos de ciertos modelos de iPhone (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 plus y iPhone SE) para prevenir reinicios automáticos, que según la compañía se justifican en el envejecimiento de las baterías de iones de litio que se degradan con el uso hasta ser inservibles<sup>114</sup>.

En dicho comunicado, Apple manifestó que para “hacer frente a las dudas de nuestros consumidores, reconocer su lealtad y mantener la confianza de quien haya dudado de las intenciones de Apple”<sup>115</sup>, se reduciría el costo del recambio de baterías para los modelos desde el iPhone 6 en adelante<sup>116</sup> y que a inicios de 2018 iban a incluir en iOS una utilidad dentro del sistema operativo que le permitiera al usuario conocer el estado de la batería y evaluar por sí mismos si afecta el rendimiento del dispositivo.

Múltiples medios de comunicación dieron a conocer que con fundamento en los hechos denunciados por el público y el comunicado emitido por Apple se presentaron acciones de grupo alrededor de todo el mundo. En Estados Unidos se tiene conocimiento de por lo menos

---

<sup>112</sup> Denominado así por la publicación Business Insider. Véase: BUSINESS INSIDER. Batterygate: How Apple secretly slowed down older iPhones and why it's such a big deal. Diciembre, 2017. Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/apple-batterygate-how-older-iphones-slowed-down-and-why-its-a-big-deal-2017-12>.

<sup>113</sup> Todo comenzó con una entrada en la sección de Reddit dedicada a Apple titulada “PSA: iPhone slow? Try replacing your battery!” iniciada por un usuario llamado TeckFire, según se informa en: THE VERGE. Apple confirms iPhones with older batteries will take hits in performance. Diciembre, 2017. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.theverge.com/2017/12/20/16800058/apple-iphone-slow-fix-battery-life-capacity>.

<sup>114</sup> APPLE INC. A Message to Our Customers about iPhone Batteries and Performance. Diciembre, 2017. Consultado 20 de enero de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/iphone-battery-and-performance/>.

<sup>115</sup> Ibid. Traducción libre. “To address our customers’ concerns, to recognize their loyalty and to regain the trust of anyone who may have doubted Apple’s intentions”.

<sup>116</sup> En Estados Unidos el precio bajo de 79 USD a 29 USD. En Colombia el precio bajo de \$289.000 a \$99.000. Según los comunicados emitidos por la compañía para el mercado norteamericano y colombiano respectivamente, este ultimo puede ser consultado en <https://www.apple.com/co/iphone-battery-and-performance/>.

cincuenta y nueve acciones de grupo<sup>117-118</sup>, a continuación, expondremos los fundamentos jurídicos centrales de algunas de ellas.

Stefan Bogdanovich & Dakota Speas Vs. Apple Inc<sup>119</sup>. Los demandantes, en su nombre y en el de los demás que componen su grupo, alegaron: (I) Incumplimiento de contrato implícito, debido a que la compañía de forma premeditada interfirió en la velocidad y capacidad de uso de los dispositivos, teniendo la obligación de no realizar este tipo de intervenciones, debido a la existencia de un contrato implícito entre la empresa y sus clientes; y (II) Daño a bienes muebles, porque con la alteración a los celulares, los usuarios no pudieron usarlos en una forma normal y se vieron compelidos a adquirir baterías nuevas lo que les generó gastos económicos.

Keaton Hearvey Vs. Apple Inc<sup>120</sup>. El demandante, en su nombre y de los demás que componen su grupo, alegó: (I) Ocultamiento fraudulento, fundamentado en que Apple no informó a los usuarios el defecto de la batería, la reducción en el desempeño y que cambiar la batería era la única solución posible; (II) Actos desleales y engañosos en violación del *Consumers Legal Act*; y (III) Prácticas comerciales ilícitas, fraudulentas y desleales en violación de la *Unfair Competition Law*.

Eliezer Rabinovits & Victor Mazzeo Vs Apple Inc<sup>121</sup>. Los demandantes alegaron la existencia de actos y prácticas engañosas en violación de la sección 349 y 350 de la *New York General Bussiness Law*, fundamentados en la información falsa y engañosa proporcionada por Apple Inc. frente a la batería de los celulares.

Michael Hakimi Vs. Apple Inc<sup>122</sup>. El demandante, en su nombre y de los demás que componen su grupo, alegó: (I) Responsabilidad estricta por producto; (II) Negligencia en responsabilidad por producto; (III) Violación de varias disposiciones del *Consumers Legal Act* -secciones 1750 y subsiguientes del Código Civil de California-; (IV) Competencia desleal en violación de la sección 17200 y subsiguientes del *Bussiness and Professions Code*; (V) Incumplimiento de la garantía expresa bajo la Magnuson-Moss Warranty Act; (VI) Incumplimiento de la garantía expresa; (VII) Incumplimiento de la garantía implícita relativa a que un producto sirve para un propósito especial; (VIII) Violación de la garantía mercantil

---

<sup>117</sup> En el blog especializado en Apple, “Mac Rumors”, se informó que hay 59 acciones de grupo en contra de Apple por ralentizar los iPhones a lo largo de 16 distritos judiciales. 30 de estas acciones han sido presentadas ante el juez Edward. J. Davila en el Distrito Norte de California. Información extraída de: MACRUMMORS. Apple Now Faces More Than 60 Class Actions Over iPhone Slowdowns, Consolidation Likely Next Month. Febrero, 2018. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.macrumors.com/2018/02/26/iphone-slowdown-class-action-consolidation/>.

<sup>118</sup> THE WASHINGTON POST. Apple will offer discounts on replacement batteries, following lawsuits over iPhone slowdowns. Diciembre, 2017. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: [https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/12/28/french-lawsuit-filed-against-apple-for-slowing-down-iphones-could-come-with-jail-time/?utm\\_term=.d8f12fd8469b](https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/12/28/french-lawsuit-filed-against-apple-for-slowing-down-iphones-could-come-with-jail-time/?utm_term=.d8f12fd8469b).

<sup>119</sup> SAADIAN, Bobby & JONES, Colin. Class Action Complaint. En el proceso de Stefan Bogdanovich & Dakota Speas Vs. Apple Inc. Case No: n/a. United States District Court For The Central District Of California. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: [https://es.scribd.com/document/367729251/Class-Action-Lawsuit-against-Apple-Inc#from\\_embed](https://es.scribd.com/document/367729251/Class-Action-Lawsuit-against-Apple-Inc#from_embed).

<sup>120</sup> FAZZIO, Jeffrey & Michelletti, Dinna. Class Action Complaint For Damages And For Equitable Relief . En el proceso de Keaton Harvey Vs. Apple Inc. Case No. CV-10-01610. United States District Court Northern District Of California. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367815541/Keaton-Harvey-vs-Apple-Battery-Issue-Lawsuit-3-Dec-2017>.

<sup>121</sup> BERNSTEIN, Stanley; OTTENSOSER, Seth y BEIGE, Stephanie. Class Action Complaint. En el proceso de Eliezer Rabinovits And Victor Mazzeo Vs. Apple Inc. Case No. n/a. United States District Court For The Southern District Of New York. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367816750/Eliezer-Rabinovits-v-Apple-Class-Action>.

<sup>122</sup> SETAREH, Shaun & SEGAL, Thomas. Class Action Complaint. En el proceso de Michael Hakimi Vs. Apple Inc. Case No. n/a. United States District Court Northern District Of California. Consultado el 2 de mayo de 2018. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367896137/Michael-Hakimi-v-Apple-Class-Action-for-Purposely-Slowing-IPhones>.

implícita; (IX) Violación de las leyes californianas en contra de la publicidad engañosa; (X) Fraude; y (XI) Enriquecimiento sin justa causa.

Adicionalmente, fue reportado en Bloomberg<sup>123</sup> que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (D.O.J.) y la Comisión de Bolsa y Valores (S.E.C.), iniciaron investigaciones en contra de Apple por los hechos aquí relatados con el fin de determinar si la empresa viola la regulación frente al deber de informar a sus usuarios que la actualización del sistema operativo podía disminuir el rendimiento de los dispositivos, lo cual pudo haber inducido en error a los inversionistas sobre el rendimiento de los modelos antiguos de celulares.

En otros países también se han iniciado acciones a causa del *Batterygate*, que incluimos en el presente acápite debido a que se refieren a los mismos hechos descritos.

En Israel, se presentó una acción de grupo y se abrió una investigación por supuesta violación de los derechos del consumidor.

La acción de grupo<sup>124</sup> se interpuso con fundamento en que Apple oculto información al no anunciar que la actualización 10.2.1. de iOS podría afectar el rendimiento de los dispositivos anteriores al iPhone 8, afirmaron los accionantes que Apple tenía “un interés claro en ocultar información a los usuarios porque prefieren que reemplacen su antiguo iPhone por uno nuevo lo más rápido posible”<sup>125</sup>.

La investigación administrativa<sup>126-127</sup> fue iniciada por la *Consumer Protection and Fair Trade Authority*, entidad encargada de la protección al consumidor, con el fin de determinar si Apple ocultó información relevante a los consumidores en razón de la incidencia que tuvo la actualización de iOS 10.2.1. en los modelos de iPhone previos al 8. En la investigación se interrogó al director de Apple Israel, Tony Friedman, y se anunciaron posibles multas contra la compañía.

En China, el medio gubernamental de noticias Xinhua<sup>128</sup>, anunció que el *Shanghai Consumer Council*, requirió a Apple para que informase las razones y soluciones que podían plantearse frente a la reducción en el rendimiento de los modelos de iPhone afectados por la actualización 10.2.1. del sistema operativo, ante lo cual la compañía respondió que con una posterior versión del sistema operativo los usuarios podrían elegir entre un mejor rendimiento o la protección de la batería.

---

<sup>123</sup> BLOOMBERG. U.S. Probes Apple Over Updates That Slow Older iPhones. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/u-s-said-to-probe-apple-over-updates-that-slow-older-iphones-jd1yahj7>.

<sup>124</sup> HAARETZ DAILY NEWSPAPER. Apple Slapped With Class Action Suit in Israel for Deliberately Slowing Older iPhones. Diciembre, 2017. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.haaretz.com/israel-news/business/apple-slapped-with-class-action-in-israel-for-slowing-older-iphones-1.5629578>.

<sup>125</sup> Ibíd. Traducción libre: “The lawsuit also alleges that although Apple says it had technical motives for releasing its slowing updates, it had a clear interest in hiding the information from users because it would prefer they replace old iPhones with new ones as soon as possible”.

<sup>126</sup> REUTERS. Israeli agency investigating Apple over handling of iPhone slowdown. Abril, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-apple-batteries-israel/israeli-agency-investigating-apple-over-handling-of-iphone-slowdown-idUSKBN1HH1W8>.

<sup>127</sup> MACRUMORS. Israeli Consumer Protection Bureau Launches Investigation Into Apple Over iPhone Slowdown Controversy. Abril, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.macrumors.com/2018/04/10/iphone-slowdown-investigation-israel/>.

<sup>128</sup> XINHUANET. Apple responds to Shanghai Consumer Council's inquiry on iPhone slowdown. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: [http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/19/c\\_136909003.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/19/c_136909003.htm).

En Corea del Sur, se han presentado tres acciones de grupo y una denuncia criminal en contra de Apple.

Dos de las tres acciones de grupo fueron presentadas por parte del *Citizens United for Consumer Sovereignty*, un colectivo de ciudadanos que representa los intereses de los consumidores. La primera, en representación de 122 de personas fue interpuesta en enero de 2018, con pretensiones que ascienden a la suma 2,000 dólares por persona fundamentadas en la reparación de los perjuicios causados por las incidencias en el rendimiento de los dispositivos experimentados a partir de la actualización 10.2.1. de iOS, que en opinión del colectivo, fue hecho intencionalmente con el fin de aumentar las ventas de las nuevas versiones de iPhone<sup>129</sup>. La segunda demanda fue interpuesta en marzo de 2018 en representación de 401 personas<sup>130</sup>.

La tercera acción de grupo fue presentada por la firma de abogados Hanuri a finales de marzo de 2018, en representación de 63.767 consumidores, con pretensiones de indemnización equivalentes a 188 dólares por cada demandante, en razón del engaño y estrés mental sufridos por los usuarios de los modelos antiguos de los iPhone que se vieron afectados con la disminución en el rendimiento de sus dispositivos<sup>131</sup>.

El colectivo de ciudadanos mencionado presentó el 18 enero de 2018 una denuncia criminal en contra de Tim Cook por destrucción de propiedad y fraude a causa de los problemas presentados por el *Batterygate*<sup>132</sup>. La oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl anunció el 19 de enero de 2018 la apertura formal de la investigación y la asignación de esta a la unidad encargada de investigar los delitos en contra de la propiedad intelectual<sup>133</sup>.

Por último, en cuanto corresponde a las acciones judiciales impetradas, es menester mencionar, aunque no haga parte del derecho comparado, que en Colombia fue instaurada una acción de grupo fundamentada en los hechos aquí relatados, por el señor Oscar Ivan Guaque Peña y otros miembros del grupo no identificados en contra de la subsidiaria de Apple en Colombia, la cual fue admitida el día 22 de junio de 2018<sup>134</sup> por parte del Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá. Las pretensiones de la demanda se encaminan a la indemnización de daños y perjuicios sufridos por los consumidores en atención a la falta de calidad e idoneidad de los dispositivos celulares que se vieron afectados por la actualización del sistema operativo, igualmente, fundamentaron la pretensión indemnizatoria en la falta de información respecto de los efectos que generó la actualización de iOS en los dispositivos<sup>135</sup>.

---

<sup>129</sup> YONHAP NEWS AGENCY. Consumer group to file 1st local lawsuit against Apple over iPhone slowdown. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <http://english.yonhapnews.co.kr/business/2018/01/10/0502000000AEN20180110001300320.html>

<sup>130</sup> KOREA TIMES. Apple sued by 64,000 iPhone users. Marzo, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: [https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/04/133\\_246494.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/04/133_246494.html).

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> REUTERS. South Korean group files complaint against Apple CEO over iPhone slowdown. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-apple-southkorea-lawsuit/south-korean-group-files-complaint-against-apple-ceo-over-iphone-slowdown-idUSKBN1F80AG>

<sup>133</sup> YONHAP NEWS AGENCY. Prosecutors launch probe into iPhone slowdown scandal. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. <http://english.yonhapnews.co.kr/national/2018/01/19/0302000000AEN20180119005400315.html>.

<sup>134</sup> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Consulta de Procesos Judiciales. Consultado el 23 de Septiembre de 2018. Disponible en: <http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8UIP515FtiV2nQwrMWGQcrVvzu4%3d>.

<sup>135</sup> ARAQUE, Camilo & Mesa, Juan. Acción de grupo. En el proceso de Oscar Iván Guaque Peña y Otros Vs. Apple Colombia S.A.S., proceso No. 11001310301520180016600. Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá D.C.

De lo expuesto con relación al fenómeno conocido como *Batterygate*, el cual puede ser clasificado como un mecanismo de obsolescencia informática de calidad<sup>136</sup>, se extrae que si la actualización de un software genera efectos negativos respecto del hardware sobre el cual se ejecuta, y estos no son anunciados a los consumidores, tanto en el ordenamiento norteamericano como en el de los otros países enunciados, es legítima la interposición de acciones jurídicas en contra de las compañías por la omisión de información a los consumidores o por la emisión de información engañosa.

En general, en cuanto al derecho norteamericano, se concluye que, pese a que no existe una regulación expresa, las normas existentes brindan herramientas para que los consumidores y compradores de bienes pueden exigir la protección de sus derechos frente a la presencia de mecanismos de obsolescencia programada de calidad en los productos que adquieren, específicamente a partir del derecho que tienen a ser informados, y a que no se usen prácticas fraudulentas o engañosas en su detrimento.

## 2.2. Derecho Comunitario Europeo.

En el Derecho Comunitario Europeo encontramos varios textos que han tratado jurídicamente la obsolescencia programada de calidad, entre ellos, un Dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 17 de octubre de 2013 y una Resolución del Parlamento Europeo del 4 de julio de 2017, al igual que varias directivas que han tratado los efectos de la obsolescencia programada de calidad en escenarios específicos, a continuación, expondremos cada uno de ellos.

### 2.2.1. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza.

En este Dictamen<sup>137</sup> el Comité Económico y Social Europeo, con el fin de “ayudar a reforzar la confianza en nuestras empresas europeas”<sup>138</sup> emite una serie de recomendaciones y conclusiones respecto del fenómeno de la obsolescencia programada<sup>139</sup>, sin embargo, dado el objeto del presente escrito procederemos a relatar únicamente las recomendaciones contenidas en el dictamen relacionadas con la obsolescencia programada de calidad, resaltando que en el Dictamen se enuncia que el Comité “aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato”<sup>140</sup>.

- Frente a la reparación de los productos. Recomienda a las empresas que posibiliten la reparación de los productos, que garanticen la existencia piezas de recambio y que detallen en los manuales las formas de reparación<sup>141</sup>.

<sup>136</sup> Ut supra. Acápites 1.2.3.

<sup>137</sup> UNIÓN EUROPEA. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. Dictamen “Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza”. Diario Oficial de la Unión Europea. Bruselas. 2014. C 67. P. 23. Ponente: LIBAERT, Thierry. Coponente: HABER, Jean-Pierre. Consultado el 4 de mayo de 2018. Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE1904>.

<sup>138</sup> Ibid. Numeral 1.1.

<sup>139</sup> Se expone que la obsolescencia programada tiene efectos medioambientales, sociales, culturales, económicos y en materia de salud pública. Véanse los numerales 2.8. a 2.12. del Dictamen.

<sup>140</sup> Ibid. Numeral 1.2.

<sup>141</sup> Ibid. Numeral 1.3.



- Frente a la información al consumidor. Recomienda que se informe al consumidor la vida útil o número estimado de utilizaciones de los productos, al igual que el precio por año estimado en función de la vida útil<sup>142</sup>.
- Frente a las garantías del consumidor. Propone el establecimiento de una garantía de vida útil mínima de los productos<sup>143</sup>.
- Frente a la contratación pública. Se anima a los estados a establecer políticas en contra de la obsolescencia programada en materia de contratación pública<sup>144</sup>.

#### 2.2.2. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas.

En esta Resolución<sup>145</sup>, el Parlamento Europeo, hace varias peticiones al Consejo Europeo en lo que respecta a formas de lucha en contra de la obsolescencia programada, a continuación, destacaremos algunas de las consideraciones previas y de las peticiones hechas, relacionadas con la obsolescencia programada de calidad.

##### Consideraciones previas:

- Considerando la necesidad de promover una prolongación de la vida útil de los productos, para acabar con la obsolescencia programada<sup>146</sup>.
- Considerando que no se informa debidamente a los consumidores sobre la durabilidad de los productos<sup>147</sup>.
- Considerando que no debería permitirse la comercialización de los productos con defectos incorporados, concebidos para averiarse y, en último término, dejar de funcionar tras haberse hecho uso de ellos un determinado número de ocasiones, los cuales generan la desconfianza de los consumidores<sup>148</sup>.

##### Peticiones:

- Se pide a la Comisión Europea el establecimiento de criterios de resistencia mínima de los productos desde su diseño, a partir de los siguientes elementos: (I) consistencia del producto, (II) posibilidad de reparación y (II) capacidad de mejorar el producto conforme con el paso del tiempo<sup>149</sup>.
- Se pide a la Comisión Europea la promoción de la posibilidad técnica de reparar los productos, mediante: (I) impulso de medidas que hagan atractiva la reparación para los consumidores, (II) establecimiento de incentivos a los productores para que suministren los manuales de mantenimiento y reparación en el momento de la

<sup>142</sup> Ibíd. Numeral 1.7.

<sup>143</sup> Ibíd. Numerales 1.8. y 1.9.

<sup>144</sup> Ibíd. Numeral 1.5.

<sup>145</sup> UNIÓN EUROPEA. PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas. Pendiente de publicación oficial. 2017. Consultado el 4 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0287&language=ES&ring=A8-2017-0214>.

<sup>146</sup> Ibíd. Literales D. y F.

<sup>147</sup> Ibíd. Literal N.

<sup>148</sup> Ibíd. Literal T.

<sup>149</sup> Ibíd. Numeral 1.

compra, (III) fomentar políticas que garanticen la disponibilidad de piezas de recambio indispensables para un funcionamiento correcto y seguro de los bienes<sup>150</sup>.

- Se pide a la Comisión que mejore la información sobre la durabilidad de los productos, mediante: (I) el establecimiento de una etiqueta europea voluntaria en la que se informe sobre la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación; (II) la normalización de las informaciones incluidas en los manuales relativas a la durabilidad, la capacidad de evolución y las posibilidades de reparación de un producto, entre otras medidas<sup>151</sup>.
- Proteger a los consumidores de la obsolescencia de los programas informáticos, mediante: (I) implementación de mayor transparencia en lo que respecta a la evolución, las actualizaciones de seguridad y la durabilidad; (II) establecimiento de un plazo mínimo de vida útil de los programas, y (III) que las actualizaciones indispensables del soporte lógico sean reversibles y objeto de una información sobre las consecuencias en el funcionamiento del aparato, así como que el soporte lógico nuevo esencial sea compatible con la generación precedente de este soporte<sup>152</sup>.

### 2.2.3. Directivas relacionadas con los efectos de la obsolescencia programada de calidad.

En opinión de Raquel Regueiro, la unión europea ha luchado contra la obsolescencia programada en una forma “marginal, indirecta y específica”<sup>153-154</sup>, conforme con lo normado en 4 directivas europeas que regulan temas específicos en los cuales se evidencia la regulación de algunos de los efectos propios de la obsolescencia programada de calidad.

La primera, la *Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores*, en cuyo artículo 11, se dispone que los países velaran porque los fabricantes: (I) desarrollen aparatos electrónicos cuyas pilas y acumuladores puedan ser fácilmente extraíble, (II) emitan instrucciones relativas a como extraer las pilas y acumuladores, y (III) informen la clase de pilas y acumuladores existentes en los productos, en palabras de Regueiro, el objetivo de la norma es “(...) evitar que la obsolescencia de una parte del aparato provoque la del aparato en su conjunto. (...) y fomenta[r] el aumento de la duración de la vida útil de los aparatos, lo que a la vez permite reducir la producción de los desechos de productos que son especialmente difíciles de reciclar”<sup>155</sup>.

La segunda, la *Directiva 2009/125/CE por la que se instaure un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía*, que en opinión de Regueiro “(...) completa la directiva 2006/66/CE. Al obligar a los productores a que las características de la ecoconcepción estén presentes en cada estadio del producto, la directiva promueve que estos productos duren más y, siempre que

---

<sup>150</sup> Ibid. Numeral 9.

<sup>151</sup> Ibid. Numeral 27.

<sup>152</sup> Ibid. Numerales 37 a 40.

<sup>153</sup> REGUEIRO, Raquel. La obsolescencia programada desde la perspectiva de la Unión Europea. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 126

<sup>154</sup> Ibid. p. 131. “(...) no tratan nunca de forma expresa el problema de la obsolescencia programada sino que buscan mitigar o eliminar alguno de sus efectos”.

<sup>155</sup> Ibid. p. 127.



sea posible, puedan ser reutilizados” de allí que “al lidiar con una consecuencia de la obsolescencia programada [la vida útil], la directiva lucha, aunque sea de forma indirecta, contra la obsolescencia en sí”<sup>156</sup>.

La tercera, la *Directiva 2008/98/CE sobre los residuos*, según la citada autora<sup>157</sup>, consagra que los productores de bienes serán los encargados de la gestión de los residuos o desechos en que se convierten sus productos, lo que genera un efecto disuasorio sobre ellos, en el sentido de conminarlos para que permitan la reutilización de sus productos, evitando que estos se conviertan en desechos, puesto que la gestión de los desechos se encuentra a cargo del productor.

La cuarta, es la *Directiva 2014/53/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos*, la cual guarda consonancia con la obsolescencia programada de compatibilidad, pues como bien refiere Regueiro, esta directiva “dispone en su artículo 3 que los equipos radioeléctricos se fabriquen de manera que puedan interactuar con accesorios, en particular con los dispositivos de carga comunes. En otras palabras, los equipos radioeléctricos deberán ser compatibles con un cargador universal”<sup>158</sup>.

En términos generales, podemos concluir que la Unión Europea ha reconocido la importancia respecto de legislar frente a la obsolescencia programada, desde tres objetivos generales: (I) establecimiento de información obligatoria por parte de los productores relativa a la vida útil de los productos, (II) establecimiento de una garantía de vida útil o duración mínima de los productos, y (III) fomento de la reparabilidad de los productos, a partir de estos se deben desarrollar regulaciones específicas.

### 2.3. Bélgica

En el año 2012 la Comisión de Finanzas y Asuntos Económicos del Senado Belga, profirió una resolución que exhortaba al gobierno para que prohibiera la obsolescencia programada, el Documento Legislativo No. 5-1251/4<sup>159</sup>, en algunos de sus apartes señala:

*Demandar del gobierno:*

***1. Luchar, en Bélgica, contra la obsolescencia programada de los productos relacionados con la energía, de acuerdo al derecho europeo y a la ley del 21 de diciembre de 1998 relativa a las normas de promoción de los modos de producción y de consumo durables y la protección del medio ambiente y la salud, incluyendo: -La promoción de la prevención de la obsolescencia programada y desalentar el desarrollo y la comercialización de productos relacionados con la energía cuya vida útil se ha limitado deliberadamente. (...)***

---

<sup>156</sup> Ibid. p. 129.

<sup>157</sup> Ibid. p. 131.

<sup>158</sup> Ibid. p. 153.

<sup>159</sup> BELGICA. SENÁT DE BELGIQUE: COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES. Proposition de résolution visant le développement de l'économie circulaire et la lutte contre l'obsolescence programmée. Document législatif. Bruselas. 2012. 5 - 1251/4. Consultado 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=83888219>.

**2. Solicitar en el panorama europeo la adopción de un marco normativo para la lucha contra la obsolescencia programada de los productos relacionados con la energía: Que promueva un etiquetado estándar de los productos relacionados con la energía en los cuales se informe el carácter reparable y la vida útil de los mismos. Que promueva la prevención de la obsolescencia programada y que desaliente la producción y comercialización de productos relacionados con la energía cuya vida útil se ha limitado deliberadamente. (...)**<sup>160</sup>. (Negrillas fuera de texto)

El 15 marzo de 2018, la Cámara de Representantes del Parlamento Belga -*Chambre des représentants*-, emitió una resolución solicitando al gobierno federal “(...) adoptar medidas precisas, coherentes y eficaces en favor del desarrollo de la economía circular y la lucha contra casos probados de obsolescencia programada”, incluyendo medidas como “ (...) la obligación de facilitar piezas de recambio por un tiempo mínimo a un precio proporcional, ofrecer mejor información al consumidor sobre la vida útil de un producto así como las formas de repararlo, (...) adoptar medidas que alienten a los consumidores a adoptar modelos de consumo sostenibles”<sup>161</sup>.

Si bien las peticiones de las cámaras del Parlamento Federal Belga no han sido adoptadas por el ejecutivo, han existido intentos de regulación por parte del primero<sup>162</sup>, el más importante de ellos, cursa actualmente en la comisión económica de la *Chambre des représentants*, un proyecto de ley *relative à l'obsolescence programmée*<sup>163</sup>, de cuyo articulado pendiente por aprobación se resaltan los siguientes:

- Artículo 2. Modifica el artículo 1694<sup>quarter</sup> del Código Civil Belga, en el sentido de aumentar el término de garantía legal de responsabilidad por los defectos del producto o de su instalación de seis meses a dos años<sup>164</sup>.
- Artículo 3. Incluye una definición en el artículo I.8 del Código de Derecho Económico Belga, relativa a la obsolescencia programada: “Obsolescencia programada: el uso de técnicas por las cuales un fabricante que ofrece sus productos

<sup>160</sup> Ibid. Traducción Libre: “1. de lutter, en Belgique, contre l'obsolescence programmée des produits liés à l'énergie, conformément au droit européen et à la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment: en favorisant la prévention de l'obsolescence programmée et en décourageant le développement et la commercialisation de produits liés à l'énergie dont la durée de vie a été volontairement limitée; (...) 2. de plaider au niveau européen pour l'adoption d'un cadre législatif visant à lutter contre l'obsolescence programmée des produits liés à l'énergie: -qui uniformise l'étiquetage des produits liés à l'énergie et y intègre des informations harmonisées relatives à leur caractère réparable ainsi qu'à leur durée de vie; - qui favorise la prévention de l'obsolescence programmée et qui décourage le développement et la commercialisation de produits liés à l'énergie dont la durée de vie a été volontairement limitée (...)”.

<sup>161</sup> BELGICA. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. Proposition de résolution visant le développement de l'économie circulaire et la lutte contre l'obsolescence programmée. Bruselas. 2018. 54K2884004. P. 8199. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2884/54K2884006.pdf>.

<sup>162</sup> Un intento de regulación fallido fue el Proyecto de ley para modificar el Código Civil Belga y el Código de Derecho Económico Belga, con el fin de luchar contra la obsolescencia programada (Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code de droit économique, visant à lutter contre l'obsolescence programmée) rechazado por el pleno de la Chambre des représentants el 15 de marzo del 2018. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1603&legisl=54&inst=K>.

<sup>163</sup> De acuerdo con el estado del trámite revelado en la página oficial de la Cámara. Consultado 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1783&legisl=54&inst=K>.

<sup>164</sup> BELGICA. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. Proposition de loi relative à l'obsolescence programmée. Document parlementaire. Bruselas. 2016. 54K1783. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1783/54K1783001.pdf>. “Art. 2. À l'article 1649<sup>quarter</sup>, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil, les mots “dans un délai de six mois” sont remplacés par les mots “dans un délai de deux ans”.

en el mercado reduce deliberadamente la vida útil de un producto para aumentar su tasa de reemplazo”<sup>165</sup>.

- Artículo 4. Incluye dentro del Código de Derecho Económico Belga, la obsolescencia programada como una práctica comercial engañosa<sup>166</sup>.
- Artículo 5. Incluye dentro del Código de Derecho Económico Belga, a la obsolescencia programada como una conducta pasible de una sanción de nivel 6. La sanción de nivel 6 puede ser una multa de 500 a 100.000 euros o una pena de prisión de uno a cinco años. Además, establece la reforma, que la multa se determinará proporcionalmente a los beneficios derivados de la infracción, hasta en un 5% del volumen de negocios medio anual<sup>167-168</sup>.

De este proyecto de regulación se destacan como mecanismos de protección contra la obsolescencia programada, la información que se debe suministrar al consumidor, la garantía de reparabilidad de los bienes, el establecimiento de un término de garantía legal de 2 años, y la consideración de la obsolescencia programada como una práctica comercial engañosa que puede ser objeto de una sanción económica.

## 2.4. Francia

A tercer trimestre de 2018 Francia es el único país en el que se ha prohibido expresamente la obsolescencia programada, estableciéndola como un delito, mediante la ley No. 2015-992, relativa a “La transición energética para el crecimiento económico sostenible”<sup>169</sup>, la cual proscribe la implementación de técnicas de obsolescencia de calidad en los productos que sean incorporados al mercado por cualquier agente y establece, que en caso de incurrir en la prohibición, podrá ser sancionado con prisión de dos años y en una multa equivalente a 300.000€, en los siguientes términos:

### *Sección 2 bis: Obsolescencia programada*

#### *Artículo L213-4-1*

*1. –La obsolescencia programada se define a partir del conjunto de técnicas empleadas por un agente del mercado que se encuentran destinadas a reducir en forma deliberada la vida útil de un producto para aumentar la tasa de reemplazo.*

<sup>165</sup> Ibid. Traducción libre de: “Art. 3. L’article I.8. du Code droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 39°, rédigé comme suit: 39° obsolescence programmée: usage de techniques par lesquelles un fabricant mettant sur le marché des produits réduit délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.”

<sup>166</sup> Ibid. Traducción libre de: “Art. 4. Dans le livre VI, titre 4, chapitre 1er, section 3, du même Code, est inséré un article VI.100/1, rédigé comme suit: “VI.100/1 L’obsolescence programmée est une pratique commerciale trompeuse”.

<sup>167</sup> Ibid. “Art. 5. Dans le livre XV, titre III, chapitre 2, section 4, est inséré un article XV.86/1, rédigé comme suit: ‘XV.86/1 Sont également punis d’une sanction de niveau 6 ceux qui commettent une infraction à l’article VI.100/1. Le montant de l’amende est déterminé proportionnellement aux avantages tirés de l’infraction et peut atteindre, le cas échéant par dérogation à l’article XV.70., 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé par rapport aux trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de l’infraction’.”

<sup>168</sup> BELGICA. PARLEMENT FÉDÉRAL BELGE. Code de droit économique. Document Parlementaire. Bruselas. 2013. A11134. P. 19975. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=fr&la=F&table\\_name=loi&cn=2013022819](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819). “Art. XV.70. Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d’une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6. (...) La sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement”.

<sup>169</sup> FRANCIA. ASSEMBLÉE NATIONALE. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Journal officiel de la République française. Paris. 2015. N°0189. P. 14263. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/texte>.

II. –La obsolescencia programada se sanciona con una pena de prisión de dos años y una multa de €300.000.

III. –La cuantía de la multa podrá ser aumentada, de forma proporcional a las utilidades reportadas por la infracción, en un 5% de la facturación anual, calculada a partir de los 3 últimos periodos de facturación conocidos al momento de los hechos<sup>170</sup>.

Adicionalmente, la norma trae consigo el establecimiento de una campaña gubernamental tendiente al establecimiento de una política nacional de prevención y gestión de residuos, como también, agrega una sección al *Code de la Consommation*, que trata de los fraudes y falsificaciones en materia de conformidad de productos y servicios.

Con fundamento en el artículo transcrito un colectivo de personas denominado *Halte à l'Obsolescence Programmée* que “busca un mundo sin obsolescencia programada”<sup>171</sup> presentó una denuncia penal en contra de empresas fabricantes de impresoras<sup>172</sup>, con fundamento en que estas empresas (específicamente obraban pruebas conclusivas en contra de Epson), utilizan dos técnicas que constituyen obsolescencia programada para hacer que los consumidores cambien rápidamente los cartuchos de tinta, la primera, “la impresora no permite que se realicen impresiones, indicando que el cartucho se ha acabado cuando aún tiene tinta”<sup>173</sup>, y la segunda, “los cartuchos anuncian falsamente que se ha acabado la tinta en su interior”<sup>174</sup>, además, manifestaron que varios modelos de impresoras cuentan con un chip especial que impide al usuario el uso de cartuchos de tinta genéricos o rellenados, obligando al consumidor a usar cartuchos nuevos y originales. El colectivo anunció el 28 de diciembre de 2017 que había sido notificado por parte de la *Procureur de la République* de la apertura de la investigación en contra de Epson, con fundamento en los hechos denunciados<sup>175</sup>.

Este mismo colectivo ha presentado denuncia penal en contra de Apple<sup>176-177</sup> por incurrir en obsolescencia programada al “ralentizar excesivamente” los modelos de iPhone 6, 6s y SE con la actualización de iOS 10.2.1, *batterygate*. Sostienen que, “la reducción del rendimiento de un dispositivo debe ser comparado con la reducción en la vida útil del mismo”<sup>178</sup> ya que en el caso en concreto “la reducción en el rendimiento del dispositivo genera que el consumidor se vea obligado a separarse de su dispositivo para comprar uno más eficiente”<sup>179</sup>,

---

<sup>170</sup>Ibid. Traducción libre: “Section 2 bis .Obsolescence programmée. Article L213-4-1.-I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits”.

<sup>171</sup> HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. “Noss missions H.O.P.”. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/a-propos/#pourquoi-hop>.

<sup>172</sup> HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Plainte au Procureur de la République contre indéterminées. París: 18 de septiembre 2017. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2017/09/Plainte-obsolescence-programmée-imprimante.pdf>.

<sup>173</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre de: “Le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d'encre seraient vides alors qu'il reste encore de l'encre”.

<sup>174</sup> Ibid. p. 10. Traducción libre de: “Le tampon absorbeur d'encre faussement annoncé en fin de vie”.

<sup>175</sup> HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Epson mis en cause par une plainte pénale en obsolescence programmée : l'enquête est ouverte. Diciembre, 2017. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/dossier-de-presse/>.

<sup>176</sup> HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Faut-il télécharger la mise à jour Apple ?. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en: <https://www.halteobsolescence.org/faut-telecharger-mise-a-jour-apple/>.

<sup>177</sup> HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Plainte au Procureur de la République contre Apple France. París: 27 de diciembre de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en: <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2017/12/Plainte.pdf>

<sup>178</sup> Ibid. p. 5. Traducción libre: “(...)la réduction de la performance d'un appareil au cours de sa durée de vie, doit être comparée à une réduction de la durée de vie.”

<sup>179</sup> Ibid. Traducción libre: “En l'espèce, non seulement la durée de vie durant laquelle on est en droit d'attendre un usage normal du téléphone a été réduite, mais le consommateur est poussé à se séparer de son appareil pour en acheter un autre plus performant”.

de ahí que “la reducción de la vida útil del dispositivo tenga como objetivo aumentar la tasa de reemplazo del mismo”<sup>180</sup>. En enero de 2018, el colectivo fue notificado de la apertura de la investigación en contra de la compañía de Cupertino<sup>181</sup>.

Del panorama francés podemos concluir que una regulación especial podría ser lo acertado a efectos de proteger a los consumidores, especialmente, si se tiene en cuenta el efecto disuasorio que podría tener, una sanción económica considerable relativa al “5% de la facturación anual, calculada a partir de los 3 últimos periodos de facturación conocidos al momento de los hechos”, no obstante, establecer la obsolescencia programada como un delito no se adecua al principio de la *ultima ratio* propio del derecho penal, toda vez que por vía de regulación del derecho del consumo podría alcanzarse el mismo fin sin establecer medidas privativas de la libertad, especialmente, en el orden de las medidas propuestas al interior de los organismos que integran la Comunidad Europea y en Bélgica.

## 2.5. Italia.

El 18 de enero de 2018 el ente administrativo italiano encargada de la protección del consumidor y de la competencia, la *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, emitió un comunicado a la prensa<sup>182</sup>, en el cual anunciaba la apertura de una investigación en contra de Apple y Samsung, producto de denuncias instauradas por algunos consumidores y de investigaciones previas, de las cuales se llegaba a concluir que las empresas se encontraban presuntamente involucradas en una política comercial “destinada a explotar las debilidades de algunos componentes de sus productos para reducir en el tiempo el funcionamiento de los productos e inducir al consumidor a adquirir nuevas versiones de los mismos”<sup>183</sup>. También, se anunció que se investigaría el hecho de que las compañías pusieron a disposición de los consumidores “actualizaciones de software sin señalar los efectos que podrían generar las mismas frente al adecuado funcionamiento de los dispositivos, ajustado a las características de alta tecnología de estos”<sup>184</sup>, esto último en clara referencia al *Batterygate*.

Para la *Autorità*, tales conductas podrían constituirse en violaciones<sup>185</sup> de los artículos 20 (Prohibición de prácticas comerciales desleales), 21 (Acciones engañosas), 22 (Omisiones engañosas) y 24 (Prácticas comerciales agresivas) del Código del Consumo Italiano<sup>186</sup>. Por

<sup>180</sup> Ibid. p. 6. Traducción libre de: “La réduction de la durée de vie du téléphone doit avoir comme objectif d’augmenter le taux de remplacement”.

<sup>181</sup> HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Plaintes HOP : ça en est où ? . Junio, 2018. Consultado el 22 de septiembre de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/plaintes-hop/>.

<sup>182</sup> ITALIA. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Comunicato Stampa: avviati procedimenti nei confronti di samsung e apple per aggiornamenti software degli Smartphone. Enero, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9119-ps11009-ps11039-avviati-procedimenti-nei-confronti-di-samsung-e-di-apple-per-aggiornamenti-software-degli-smartphone.html>.

<sup>183</sup> Ibid. Traducción libre: “In particolare, i professionisti avrebbero posto in essere una generale politica commerciale volta a sfruttare le carenze di alcuni componenti per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistare nuove versioni degli stessi”.

<sup>184</sup> Ibid. Traducción libre: “sarebbero stati, altresì, proposti ai clienti aggiornamenti software dei propri telefoni cellulari senza segnalare le possibili conseguenze dello stesso aggiornamento e senza fornire sufficienti informazioni per mantenere un adeguato livello di prestazioni di tali dispositivi, promossi ed acquistati per le loro specifiche ed elevate caratteristiche tecnologiche”.

<sup>185</sup> Ibid. “Tali comportamenti potrebbero risultare in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo”.

<sup>186</sup> ITALIA. PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA. Decreto Legislativo No. 206. (6, settembre, 2005). Codice del Consumo. Gazzetta Ufficiale, Roma, 2005, No. 235 del 8 de octubre. Consultado el 6 de agosto de 2018. Disponible en: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm>.



último, anuncian que ya empezaron a recolectar pruebas con la colaboración de los peritos de la policía financiera y del cuerpo especial contra el fraude tecnológico<sup>187</sup>.

Resulta evidente como tanto la obsolescencia programada de calidad como la obsolescencia informática de calidad, que cumplen el mismo propósito, son entendidas por las autoridades como prácticas desleales o engañosas en perjuicio de los derechos de los consumidores.

## 2.6. Argentina.

En este país se han presentado cuatro proyectos de ley mediante los cuales se ha buscado regular la obsolescencia programada de calidad.

Los dos primeros proyectos de ley a que haremos referencia fueron presentados por el Senador Pedro Guillermo Guastavino, y fueron los proyectos S-1934 de 2012<sup>188</sup> (presentado el 25 de junio de 2012) y el S-985 de 2015<sup>189</sup> (presentado el 7 de abril de 2015), los cuales han propuesto el mismo articulado con los mismos fundamentos, los proyectos caducaron respectivamente sin haber sido aprobados en los términos necesarios para convertirse en ley el 28 de febrero de 2014 y el 28 de febrero de 2017.

La regulación propuesta por el Senador Guastavino consistía en incluir en el artículo 4° sobre información de la ley argentina de Defensa del Consumidor, un inciso cuyo texto era “En el caso de los bienes de uso, se debe especificar la vida útil del producto, así como las condiciones en que la misma fue estimada”<sup>190</sup>.

Los fundamentos o motivos de regulación expuestos por el Senador Guastavino fueron los siguientes:

*El presente proyecto propone incorporar el deber del productor de informar la vida útil estimada del bien ofrecido y las condiciones mediante las cuales ésta fue calculada.*

*Las condiciones para calcular la vida útil de un producto cualquiera son necesarias para todo productor o fabricante. Dichas condiciones consisten en las diferentes pruebas y/o experimentos a los que son expuestos los productos para estimar su tiempo de vida.*

*Al momento de la adquisición de un producto, cabe la posibilidad de que existan más de un fabricante del mismo bien y más de un precio para productos similares, para lo cual el consumidor podría, en caso de ser aprobado el*

---

<sup>187</sup> AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Op. Cit. “L’Autorità ha a tal fine effettuato accertamenti ispettivi presso le sedi dei professionisti, per i quali si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, assistito per i profili tecnici delle operazioni dai militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche dello stesso Corpo”.

<sup>188</sup> ARGENTINA. SENADO. Expediente de Proyecto de Ley 1934/12. Buenos Aires, 2012. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1934.12/S/PL>.

<sup>189</sup> ARGENTINA. SENADO. Expediente de Proyecto de Ley 985/15. Buenos Aires, 2015. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/985.15/S/PL>.

<sup>190</sup> GUASTAVINO, Pedro. Proyecto de Ley S-0985/15. Buenos Aires, 2015. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/985.15/S/PL#textoOriginal>.

*presente proyecto, decidir sobre aquel que tenga una vida útil mayor según el uso final que éste desee darle al producto. De esta manera se estaría ayudando a incentivar el consumo responsable y sustentable ambientalmente.*

*Asimismo, es muy importante para los casos de las garantías, que los consumidores sepan la relación entre ésta y el tiempo por el cual podrían hacer uso de las cosas.*

*En la actualidad los fabricantes están constantemente cambiando los diseños de los productos, y por consiguiente, sus partes y repuestos. Esto hace que sea probable que, al momento que el consumidor necesite un cambio o un repuesto, su producto de encuentre discontinuado y ya no existe stock de repuestos. Este problema podría resolverse en el caso que se estipule la vida útil estimada, siendo de esta forma obligatoria para el fabricante, productor o importador contar con los repuestos necesarios para continuar con el goce del bien.*

Si bien la propuesta de regulación hecha por el referenciado parlamentario es sencilla, pues se refiere a establecer la vida útil de los productos como información obligatoria, no se pueden perder de vista los fundamentados esbozados que se pueden resumir en que es necesario garantizar al consumidor la información que le permita tomar una decisión de consumo informada, a partir del análisis de las relaciones vida útil/precio y vida útil/garantía de los productos.

Adicionalmente a las iniciativas mencionadas, en la Cámara de Diputados (cámara baja del Congreso Argentino) cursaron otros dos proyectos de ley<sup>191</sup>, que también contaban con un mismo articulado, el primero fue el Proyecto de Ley 5802-D-2012<sup>192</sup> firmado por el Diputado Carlos Marcelo Comi el 22 de agosto de 2012, y el segundo fue el Proyecto de Ley 1143-D-2014<sup>193</sup> firmado por el Diputado Pablo Lautaro Javkin y 3 parlamentarios más el 20 de marzo de 2014, ambos proyectos se titularon como “Regulación del proceso de venta y de ofrecimiento de bienes electrónicos y de alto valor económico”.

El articulado de estos proyectos fue más ambicioso y comprensivo que el presentado por el Senador Guastavino, a continuación, haremos un resumen del articulado conforme con la versión presentada por el Diputado Javkin:

- Artículo 1°. Establece que el objeto de la ley es disponer obligaciones a cargo de todos los involucrados en la cadena de suministros de los bienes electrónicos o de los bienes de alto valor económico, construidos mediante el ensamblado de varias piezas.
- Artículo 2°. Establece que todos los involucrados en la cadena de suministro “estarán obligados a informar al consumidor el período de tiempo útil para el cual ha sido

---

<sup>191</sup> Respecto de las fechas de archivo de los proyectos no se encuentra la respectiva información en el archivo de la Cámara de Diputados de Argentina.

<sup>192</sup> COMI, Carlos. Proyecto de Ley 5802-D-2012 “Regulación del proceso de venta y de ofrecimiento de bienes electrónicos y de alto valor económico”. Buenos Aires, 2012. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5802-D-2012&tipo=LEY>.

<sup>193</sup> JAVKIN, Pablo et al. Proyecto de Ley 1143-D-2014 “Regulación del proceso de venta y de ofrecimiento de bienes electrónicos y de alto valor económico”. Buenos Aires, 2014. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1143-D-2014&tipo=LEY>.

concebido, diseñado y fabricado el bien, mediando un uso normal, responsable y adecuado del mismo”. De igual forma deberán “describir las fallas probables en el funcionamiento del equipo o en su diseño que lo torne parcial o totalmente inhábil para el fin para el cual fue desarrollado, dando detalles de fechas, o períodos de tiempo dentro de los cuales se espera o especula que el producto comience a presentar alguna falla determinada, describiéndola lo más claramente posible”. Y en todo caso, la información que suministren deberá fundamentarse en los resultados de estudios realizados sobre los productos en las fases de diseño o desarrollo por parte del fabricante.

- Artículo 3°. Se prohíbe la importación de productos en los que no se suministre la información establecida en la ley.
- Artículo 4°. Se prohíbe la venta de productos que no hayan sido sometidos a estudios por parte del fabricante que sirvan de fuente de la información establecida en la ley.
- Artículo 5°. Se establece que la autoridad de protección al consumidor de Argentina será la entidad encargada de la aplicación de la ley, y tendrá a su cargo varias facultades: (I) Llevar un registro de los fabricantes e importadores, los productos comercializados y las fallas informadas, (II) Multar a los fabricantes e importadores cuando existan errores en la información suministrada o no se corresponda a la realidad, (III) Ordenar la prohibición de venta de un producto cuya información se encuentre consignada erróneamente, hasta que sea ajustada.
- Artículo 6°. Se establece que las sumas recogidas a partir de las multas serán destinadas a un fondo para el *adecuado tratamiento de la basura electrónica y/o de complejo tratamiento*.
- Artículo 7°. Se prohíbe la importación de productos electrónicos usados o en desuso.

La propuesta de regulación hecha por los congresistas Javkin y Comi se resalta por ser ambiciosa y extensiva, en el sentido de establecer mínimos de información al consumidor, por cuanto establece que se debe informar no solo la vida útil de los productos sino también las fallas probables que pueden presentar, y adicionalmente, establece múltiples competencias a cargo de la entidad administrativa de protección al consumidor que le facultan a realizar un verdadero control sobre la efectiva aplicación de la ley.

Además de lo expuesto, se resalta el ánimo regulatorio de los congresistas argentinos que intentaron incluir la vida útil como un elemento de la información mínima que deben suministrar los fabricantes de los bienes, con el fin de asegurar que los consumidores cuenten con la información necesaria para tomar decisiones de compra informadas frente a la obsolescencia programada de los productos.



## 2.7. Ecuador

El 9 de diciembre de 2016 fue promulgado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -Código Ingenios-<sup>194</sup>, en el cual se estableció el deber a cargo de las instituciones públicas de verificar que los bienes adquiridos por ellas no sufran de obsolescencia programada, en los siguientes términos:

***DISPOSICIONES GENERALES. VIGÉSIMA PRIMERA. - Las instituciones públicas deberán realizar un control aleatorio de sus bienes ex post a la adquisición, para verificar que estos no sufran de obsolescencia programada.***

*Para efecto de aplicación de esta norma se entenderá como obsolescencia programada el conjunto de técnicas mediante las cuales un fabricante, importador o distribuidor de bienes, en la creación o a través de la modificación del producto, reduce deliberada e injustificadamente su duración con objeto de aumentar su tasa de reemplazo.*

*El órgano público encargado de las compras públicas en coordinación con el INEN regularán la aplicación de esta disposición.*

*En los casos en los que se determine la existencia de obsolescencia programada, los proveedores de dichos bienes quedaran impedidos para contratar con el Estado de manera permanente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y las sanciones administrativas y penales a las que hubiere lugar en aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado y el Código Orgánico Integral Penal, respectivamente.*

*Se generarán los efectos señalados en el inciso anterior, cuando se compruebe, a través de los órganos correspondientes, la obsolescencia programada en el comercio entre particulares.* (Negritas fuera de texto)

En materia de contratación estatal se consagró un deber a cargo de las instituciones públicas, según el cual, tras adquirir bienes deberán determinar si estos sufren de obsolescencia programada. En caso de que la sufran, quien haya suministrado los bienes será sancionados con inhabilidad permanente para contratar con el estado ecuatoriano, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que pudiere existir.

Esos mismos efectos se producirán cuando se compruebe que los bienes objeto de contratación entre privados se encuentran afectados por obsolescencia programada. Desde nuestra interpretación, la norma indica que el particular que comercie objetos sometidos a obsolescencia programada podrá ser sancionado con impedimento para contratar con el Estado en forma permanente, sin embargo, la norma no resulta ser del todo clara, pues podría interpretarse en el sentido de que se inhabilitará al privado para contratar, lo que en materia de derecho mercantil se traduciría en la inhabilidad para un comerciante de ejercer el comercio.

---

<sup>194</sup> ECUADOR. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (29, noviembre, 2016). Registro Oficial, Quito, 2016. No. 899 del 9 de diciembre. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>.

Desde nuestra concepción surgen dos críticas a la norma, la primera, lo que ya se enunció, relativo a que no existe meridiana claridad respecto de la sanción a imponer a quienes suministren bienes sometidos a obsolescencia tratándose del tráfico mercantil entre los privados, y la segunda, que al predicarse dicha sanción de los “proveedores”, pareciera que se limitará la misma a quien funge como vendedor en las relaciones inmediatas, descartándose por ejemplo al productor o importador de los bienes, que los suministra a quien funge como vendedor inmediato.

Para que la citada prohibición de la obsolescencia programada trascienda de la normatividad y sea efectiva se requiere primero una regulación por parte del Servicio Nacional de Contratación Públicas y del Instituto Ecuatoriano de Normalización.

El Código Ingenios fue reglamentado por el Decreto Ejecutivo 1435 de 2017<sup>195</sup> en el cual se resaltan varios artículos que desarrollan la regulación de la obsolescencia programada, procederemos a exponerlos.

En el artículo 63 se establecen las formas en que se puede presentar la obsolescencia programada, ampliando el espectro de la definición contenida en el Código Ingenios:

*Artículo 63.- De la obsolescencia programada. - La obsolescencia programada, entre otras formas, podrá presentarse de las siguientes maneras:*

- 1. **Obsolescencia programada directa:** es la limitación de la vida útil de un aparato, después de un cierto número de utilizaciones, a través de la inclusión de un dispositivo interno que logre este fin;*
- 2. **Obsolescencia programada indirecta:** Es aquella derivada de la imposibilidad de reparar un aparato por falta de repuestos adecuados o cuando ha sido diseñado deliberadamente para imposibilitar su reparación; y,*
- 3. **Obsolescencia por incompatibilidad:** es la limitación de la vida útil de un aparato producida por la incompatibilidad de los sistemas operativos o programas del ordenador cuya actualización se obliga por parte del proveedor o del productor.*  
(Negritas fuera de texto)

Las definiciones contenidas en los numerales 1 y 2, hacen referencia expresa a la obsolescencia programada de calidad, siendo el primero la definición de la misma, y la segunda, una referencia a los métodos utilizados por los productores para evitar la superación de la obsolescencia de calidad.

En el artículo 64 se establecen los lineamientos que deberá seguir el Servicio Nacional de Contratación Públicas y el Instituto Ecuatoriano de Normalización al regular la disposición Vigésima Primera del Código Ingenios:

*Artículo 64.- De los lineamientos de regulación. Para la regulación de la Disposición Vigésima Primera del Código, a cargo del órgano público encargado de las compras públicas en coordinación con el órgano rector del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y el INEN, se deberá observar los siguientes lineamientos:*

---

<sup>195</sup> ECUADOR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. Decreto ejecutivo 1435 de 2017. (23, mayo, 2017). Registro Oficial Suplemento, Quito, 2017. No. 9 del 7 de junio. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/REGLAMENTO-CODIGO-CONOCIMIENTOS.pdf>.

- 1. Establecimiento de incentivos y requerimientos para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo, así como garantías técnicas mínimas para el funcionamiento, manuales de reparación y de funcionamiento;*
- 2. Establecimiento de la obligación de entregar la información respecto a las averías más frecuentes y de almacenar y producir repuestos para reparar tales averías; y,*
- 3. Establecimiento de certificaciones voluntarias de durabilidad.*

Creemos que el espíritu de estos lineamientos no es el de establecer una prohibición en sí misma de la obsolescencia programada -como lo es el de la disposición vigésimo primera-, sino que con ellos se busca establecer mecanismos que garanticen la posibilidad de reparar los bienes, es decir, superar los mecanismos de obsolescencia programada.

En el artículo 65<sup>196</sup> se establece que el control de verificación de los bienes comprados por las entidades para determinar si se encuentran sometidos a obsolescencia programada deberá realizarse anualmente conforme con las directrices del ente rector de la administración pública.

Por último, en el artículo 66<sup>197</sup> se establece que cada institución pública deberá emitir un informe anual dando cuenta de la existencia de obsolescencia programada en los bienes que ha adquirido y en caso de que exista obsolescencia deberá notificar a varias entidades administrativas.

De las normas citadas, tenemos que Ecuador es el país que en mayor medida ha regulado la obsolescencia programada en cuanto a su conceptualización, sin embargo, se observa que la regulación de orden sancionador fue emitida únicamente con miras de salvaguardar los intereses económicos del Estado Ecuatoriano que se ven afectados por la tasa de recambio de los bienes adquiridos.

En conclusión, de lo expuesto en el presente capítulo, tenemos que la obsolescencia programada como fenómeno económico empezó a ser regulada a partir del segundo decenio del siglo XXI. Con anterioridad, el derecho no se había preocupado por una regulación expresa, sin embargo, se evidenció como por vía judicial en el derecho norteamericano, se debatieron situaciones jurídicas problemáticas fundamentadas en situaciones donde existía obsolescencia programada.

La reciente regulación en la materia se ha desarrollado en países de tradición jurídica romano-germánica como Francia y Ecuador, en los cuales se ha establecido la prohibición de la obsolescencia programada con una correspondiente sanción, al igual, que el establecimiento de mecanismos que faciliten superar la obsolescencia programada, en el caso de Ecuador.

De igual forma, se destaca que en organismos al interior de la Unión Europea y en Bélgica se haya reconocido la necesidad de una regulación frente a la obsolescencia programada, y

---

<sup>196</sup> *Ibíd.* **Artículo 65.** Del control aleatorio de los bienes de las instituciones públicas. - El control aleatorio de obsolescencia programada de aquellos bienes adquiridos por las instituciones públicas se realizará de manera anual conforme las directrices emitidas por el ente rector de la administración pública, considerando los parámetros establecidos en este reglamento.

<sup>197</sup> *Ibíd.* **Artículo 66.** Del informe anual sobre obsolescencia programa de bienes. - El informe anual sobre obsolescencia programa de bienes será aprobado por la máxima autoridad de cada institución y, en caso de determinarse que ha existido, este informe será notificado a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la Secretaria Nacional de la Administración Pública y demás autoridades competentes.

que específicamente, en el primer caso se hayan establecidos derroteros a seguir por los cuales dirigir la regulación.

Se resalta que, en países como Italia, Israel y Corea, en los que no existe una regulación especial, se han iniciado investigaciones administrativas, e incluso penales, en razón de los efectos adversos que genera la obsolescencia programada respecto de los intereses y derechos de los consumidores.

De igual forma es menester resaltar los esfuerzos legislativos llevados a cabo en Argentina con el fin de asegurar que la vida útil de los productos haga parte de la información obligatoria a cargo de los productores.

Consideramos que las medidas legislativas frente a las judiciales o administrativas podrían resultar más eficaces para controlar la obsolescencia de calidad. En efecto, al ser normas de orden general, personal y abstracto, abarcarían un mayor número de supuestos fácticos que aquellos sometidos a la regla del precedente.

El reconocimiento jurídico de la obsolescencia en el derecho comparado se alza como un parangón relevante a la hora de analizar la figura con miras a la creación de un proyecto de regulación especial sobre la obsolescencia programada de calidad. De la experiencia comparada, extraemos los siguientes elementos, que a nuestro juicio deben hacer parte de una regulación de la figura.

1. Establecer un marco conceptual de la obsolescencia programada de calidad.
2. Catalogar la obsolescencia programada de calidad como una conducta engañosa o desleal en materia del derecho del consumo.
3. Incorporar la información de la vida útil como parte de la información que debe contener el etiquetado o a la que están obligados a informar los productores.
4. Establecer un catálogo de sanciones diferentes a las generadas por responsabilidad penal, por ejemplo, multas impuestas en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, inhabilidad para ejercer el comercio o inhabilidad para contratar con la nación.
5. Establecer una acción jurisdiccional en favor de los consumidores cuando se vean afectados por mecanismos de obsolescencia programada.
6. Establecer un tiempo mínimo, en función de la vida útil informada, durante el cual los productores de bienes deben garantizar la reparabilidad de los bienes.
7. Incorporar una regulación especial frente a las actualizaciones de software en materia de información y garantía.
8. Implementar políticas de protección ambiental respecto de los desechos generados por la obsolescencia programada.

En la normatividad colombiana no existe regulación especial de la obsolescencia programada. No obstante, consideramos que varias figuras y normas del derecho privado podrían regular esta figura. Tales como la institución de los vicios ocultos, propios del contrato de compraventa, las garantías legales del mismo contrato, o en las categorías especiales que se encargan de proteger al consumidor. Por ello, analizaremos la

obsolescencia programada desde la perspectiva del contrato de compraventa del derecho privado (3.), y posteriormente, a la luz del derecho del consumo (4.).

### 3. La obsolescencia programada en los contratos de compraventa civiles y comerciales.

En este punto analizaremos las implicaciones de la obsolescencia programada de calidad respecto de dos figuras propias del contrato de compraventa en el derecho privado, la primera, la figura de los vicios redhibitorios de la cosa vendida (3.1.), y la segunda, las garantías a favor del comprador (3.2.).

#### 3.1. Vicios Redhibitorios

Al plantear un análisis jurídico de la obsolescencia programada, se piensa en los vicios redhibitorios como la figura que ofrecería una regulación ante la situación en que se ha predeterminado la vida útil de un bien objeto de venta. En el presente aparte, nos dedicaremos a determinar si esta institución ofrece una regulación ante el fenómeno de la obsolescencia programada de calidad.

Antes de aterrizar a los vicios ocultos, es acertado realizar una lectura de las normas relativas a las características que deben cumplir los bienes objeto del contrato de compra venta, según la legislación civil y mercantil, específicamente el Capítulo VI del Título XXIII del Libro IV del Código Civil (C.C.)<sup>198</sup>, y el Capítulo II del título II del Libro IV del Código de Comercio (C.Co.)<sup>199</sup>. Tras lo cual se concluye que, dentro de dichos requisitos, nada se establece sobre la vida útil o las condiciones de uso temporal con que deben cumplir los bienes objeto del contrato de compraventa.

Entrando en materia de los vicios redhibitorios, según lo dispuesto en el artículo 1880<sup>200</sup> de Código Civil, el vendedor tiene dos obligaciones frente a la cosa vendida: (I) la entrega de la cosa, y (II) su saneamiento.

La obligación de saneamiento comprende según el artículo 1893<sup>201</sup> del C.C., dos objetos: (I) amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y (II) responder por los defectos ocultos de esta. En el mismo sentido de la disposición citada, se desarrolla el artículo 934<sup>202</sup> del Código de Comercio, según el cual, el comprador tendrá derecho a pedir

---

<sup>198</sup> COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 57 de 1887. (15, abril, 1887). Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional: se adopta el Código Civil de la Nación. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1887, No. 7.019 P.1.

<sup>199</sup> COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1971, No. 33.339 de junio. P. 1.

<sup>200</sup> Código Civil. Artículo 1880. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida. (...)

<sup>201</sup> Código Civil. Artículo 1893. La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y **responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios**. (Negrillas nuestras)

<sup>202</sup> Código de Comercio. Artículo 934. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor.

la resolución del contrato de compraventa mercantil o la reducción del precio del mismo, si “la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos”.

Los vicios redhibitorios se encuentran definidos en el artículo 1915 del Código Civil así:

*Artículo 1915. Son vicios redhibitorios los que reúnen las calidades siguientes:*

- 1.) Haber existido al tiempo de la venta.*
- 2.) Ser tales, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio.*
- 3.) No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio.*

Por su parte, el Código de Comercio define los vicios ocultos, así:

*Artículo 934. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. (Negritas fuera de texto)*

Frente a los vicios redhibitorios, concluye Oviedo, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en nuestro ordenamiento existe un concepto funcional de vicio redhibitorio, entendido como: “el defecto que cumpla con los requisitos de gravedad, oculto y ser anterior al contrato, (...), [que] **produce la inidoneidad del bien para obtener su uso natural o pactado de forma expresa o implícita entre las partes**”<sup>203</sup> (Negritas fuera de texto).

Existiendo claridad frente a la definición de la figura objeto de estudio, procederemos a analizar los requisitos de existencia de los vicios redhibitorios (3.1.1.), consecuentemente, haremos unas breves indicaciones respecto de las acciones que emanan de los vicios redhibitorios (3.1.2.), para así contar con los insumos requeridos en orden a determinar si la obsolescencia programada de calidad es un vicio redhibitorio (3.1.3.).

---

En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida.

<sup>203</sup>OVIDIO, Jorge. La Garantía Por Vicios Ocultos En la Compraventa. Bogotá: Universidad de La Sabana - Editorial Temis, 2015. p. 79.

### 3.1.1. Requisitos de los vicios redhibitorios.

Los requisitos que configuran la existencia de un vicio redhibitorio son los mismos en materia civil y comercial<sup>204</sup>, y se desarrollan así:

#### (I) El vicio debió haber existido al tiempo de la venta.

Hace referencia a que el defecto obedece a una “causa anterior al contrato o concomitante a él, sea cual fuere el momento de la aparición externa del daño”<sup>205</sup>.

Respecto a la existencia del vicio como germen o como principio de vicio, nos refiere Oviedo que: “para la verificación del requisito del vicio de ser anterior al contrato, no se requiere que se haya desarrollado en su totalidad. Basta que con anterioridad a la celebración del contrato, si la cosa fuere un cuerpo cierto, o a su determinación, si fuere de género, exista al menos el germen del vicio oculto o la potencialidad del mismo para desarrollarse y manifestarse con posterioridad al contrato y a la entrega del bien”<sup>206</sup>.

#### (II) El vicio debe ser grave.

El defecto debe ser tal que, la cosa vendida no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente, de manera que, de haberlo conocido el comprador, no hubiera comprado la cosa, o la hubiere adquirido a un menor precio.

Frente a este requisito la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de marzo de 1969, consideró que la gravedad del defecto debe ser de tal entidad que la cosa no sirva para su uso ordinario, o que se reduzca la posibilidad de darle el uso ordinario<sup>207</sup>, además, se instó al operador jurídico para que realice el examen del vicio de acuerdo con el uso natural de la cosa<sup>208</sup>, posición reiterada en múltiples sentencias de la Alta Corte<sup>209</sup>.

Encuentra Oviedo<sup>210</sup>, que puede existir un vicio que no sea grave, en el sentido de inutilizar o disminuir el uso de la cosa, pero que resulte relevante y el cual únicamente generará al

---

<sup>204</sup> BONIVENTO, José. Los Principales Contratos Civiles Y Su Paralelo Con Los Comerciales. 19ª ed. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2015. p.154.

<sup>205</sup> Ibíd. p. 144.

<sup>206</sup> OVIEDO. Op. cit. p. 108.

<sup>207</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de marzo de 1969, M.P.: Enrique Lopez de la Pava. Gaceta Judicial. T. CXXIX Nos. 2306, 2307 y 2308, p. 17. Consultado el 11 de mayo de 2018. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CXXIX%20n.%202306-2308%20\(1969\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CXXIX%20n.%202306-2308%20(1969).pdf). En los siguientes términos “el vicio redhibitorio no consiste en imperfecciones o defectos que incomoden o desagraden al comprador, ni en factores extraños al uso natural de la cosa vendida. **El vicio no ha de ser, pues, leve, sino grave, por estorbar del todo el uso ordinario del bien enajenado o por reducirlo en forma considerable**” (Negritas fuera de texto).

<sup>208</sup> Ibíd. p. 18. Frente a la valoración que debe hacer el juzgador de este requisito específico se dijo “(...) debe obrar con **criterio objetivo**, o sea, **considerando el uso que naturalmente puede hacerse de la cosa vendida** o a que **está destinada al tiempo de su entrega** y el defecto que presenta, y decidiendo si este vicio **impide por completo o disminuye ese uso natural (...)**” (Negritas fuera de texto).

<sup>209</sup> Las consideraciones de la Sentencia del 25 de marzo de 1969 son citadas en las siguientes sentencias: Sentencia de Casación Civil del 11 de septiembre de 1991 (MP: Alberto Ospina Botero), Sentencia de Casación Civil del 14 de enero de 2015 (M.P: Edgardo Villamil Portilla) y Sentencia de Casación Civil del 19 de octubre de 2009 (M.P: William Namén Vargas).

<sup>210</sup> OVIEDO. Op. Cit. p. 84.

comprador el derecho de pedir la reducción del precio (*actio quanti minoris*), conforme con lo signado en el artículo 1925<sup>211</sup> del Código Civil.

Por último, y en consonancia con lo anterior, se ha incluido en la doctrina, un criterio a analizar en cuanto a la gravedad del vicio: **la reparabilidad**. Según Cárdenas<sup>212</sup>, si el defecto es reparable, no es grave, pero en todo caso daría lugar a la reducción del precio. Y en ese mismo sentido, opina Oviedo, que “la reparabilidad o no del defecto si puede incidir en la valoración objetiva que debe hacer el juez para calificar el vicio como redhibitorio”<sup>213</sup>, además, considera que, si el vicio es reparable y con la reparación se restaura el funcionamiento normal de la cosa, dejaría de ser grave, pero en todo caso tendrá derecho el comprador a la rebaja del precio<sup>214</sup>, y apoya su postulado en las consideraciones de la Sentencia de Casación Civil del 14 de enero de 2005 (M.P: Edgardo Villamil Portilla)<sup>215</sup>.

### (III) El vicio debe ser oculto.

En el sentido de que el defecto no fue manifestado por el vendedor al comprador, ni era conocido por el comprador (sin ser negligente), y tampoco podía conocerlo el comprador en razón de su profesión u oficio. A este respecto concluye Bonivento<sup>216</sup>, que consiste en que el vicio no debe revelarse o apreciarse a la hora de que el comprador haga un examen ordinario de la cosa vendida al celebrar el contrato.

En lo que respecta al conocimiento del comprador, en Sentencia de Casación Civil del 5 de julio de 1899, la Corte Suprema de Justicia, dio aval a una consideración del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de que son ocultos aquellos vicios que no surgen frente al comprador con la simple vista del bien<sup>217</sup>.

---

<sup>211</sup>Código Civil. Artículo 1925. Si los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa en el número 2o. del artículo 1915, no tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta, sino sólo para la rebaja del precio.

<sup>212</sup> CARDENAS, Juan. La resolución por problemas de funcionamiento de la cosa en el derecho colombiano: el regimen interno-vicios ocultos y garantía mínima presunta – y el regimen de la compraventa internacional de mercaderías. En: GAITÁN, José y MANTILLA, Fabricio (Directores). La terminación del contrato. Nuevas tendencias del Derecho comparada. Bogotá: Universidad del Rosario, 2007, págs. 217 a 316. Citado por. OVIEDO, op. cit. p. 87.

<sup>213</sup>OVIEDO, Op. Cit. p. 88.

<sup>214</sup>OVIEDO, Op. Cit. p. 89. En los siguientes términos: “(...) si hecha la valoración del defecto se concluye que es reparable, que tal reparación puede hacerse sin ocasionar perjuicio al comprador y con ello, la cosa si sirve para el uso natural o pactado, el vicio dejaría de ser grave, por lo lo cual se verificaría el supuesto del artículo (...) 1925 del Código Civil colombiano y así el comprador tendría de todos modos derecho a la rebaja del precio”.

<sup>215</sup> COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de enero de 2005, M.P.: Edgardo Villamil Portilla. Expediente No. 7524. Consultado el 11 de mayo de 2018. Disponible en: <https://app.vlex.com/vid/n-005-suprema-justicia-sala-civil-14-44113381>. “En efecto, las partes aceptan, que la máquina presentó problemas de funcionamiento, pero que en últimas atañen a la eficiencia y sostenibilidad en el largo plazo, con menor necesidad de mantenimiento y cambio de piezas, defectos tales que no son de la magnitud y gravedad suficientes como para asimilarlos a una falta total de entrega, ni permiten afirmar que la cosa era absolutamente impropia para desarrollar la tarea para la cual fue construida, lo que descarta la acción resolutoria general pretendida en la demanda”.

<sup>216</sup>BONIVENTO, op cit. p. 145.

<sup>217</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de julio de 1899, M.P.: Luis. M. Isaza Gaceta Judicial. T. XIV. Nos. 713 y 714, p. 282. Consultado el 15 de mayo de 2018. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20XIV%20n.%200679-0732%20\(1900-1901\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20XIV%20n.%200679-0732%20(1900-1901).pdf). La cita hecha por la Corte Suprema de Justicia a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en el caso específico: “Desde luego se advierte que lo que la ley, de acuerdo con el sentir común, entiende por vicios redhibitorios en las cosas, es que estas adolezcan de defectos tales que, aplicando a ellas con alguna detención el sentido de la vista, no se puedan descubrir dichos defectos”. Frente a esa consideración, expuso el juez de la casación: “En concepto de esta Superioridad. La interpretación que el Tribunal sentenciador dio a los artículos ultimamente citados, es del todo correcta, pues la enfermedad de algunos cafetos, el paloteo de otros, el estado de descuido de parte de la hacienda, y los demás defectos a que la demanda alude, no constituyen vicios ocultos de la cosa vendida, toda vez que con mediana diligencia y cuidado, pudo el comprador darse cuenta de ellos y proceder en su contrato con perfecto conocimiento de causa”.



Según Oviedo<sup>218</sup>, esta tesis ha sido pacíficamente aceptada en la jurisprudencia nacional, salvo en la Sentencia del 23 de junio de 1955 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se sentenció, que cuando el comprador no era experto debía asesorarse de expertos. Este pronunciamiento, fue superado en Sentencia de Casación Civil del 15 de octubre de 1968, en la cual se dijo que el comprador inexperto no tiene la obligación de contratar a un perito, y sobre este último punto se han edificado las sentencias posteriores.

Opina Bonivento que, en materia comercial, este requisito opera de la misma forma, puesto que el carácter oculto “se simplifica con las expresiones ‘ignorados sin culpa por el comprador’, incorporadas en el artículo 934”<sup>219</sup>. No obstante, sobre este punto, expone Oviedo que la expresión “sin culpa” genera que “al comprador en materia mercantil se le exija una mayor diligencia al observar el bien, pues de lo contrario incurriría en culpa leve. (...) el comprador debe hacer algo más que simplemente mirar el bien para verificar que esté libre de defectos, como podría ser revisarlo, inspeccionarlo con mayor cuidado o realizar una prueba del mismo”<sup>220</sup>, consideramos, que esta última carga también se podría predicar en materia civil respecto del comprador profesional, en razón a los conocimientos que posee.

En lo que respecta a informar el vicio, se debe anotar que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>221</sup>, en aplicación del principio de la buena fe, el vendedor tiene el deber de informar los defectos que conozca del bien, y cuando el vendedor se dedique profesionalmente a la venta o producción y venta de los bienes, tiene el deber de adoptar las medidas exigibles, razonables e idóneas tendientes a conocer la existencia de vicios en la cosa.

Por último, es acertado mencionar que de acuerdo con el artículo 1920 del C.C. las partes pueden establecer que ciertos vicios tengan la naturaleza de redhibitorios, aunque estos por su naturaleza no lo sean<sup>222</sup>.

### 3.1.2. Acciones por vicios redhibitorios.

Ante la existencia de un vicio redhibitorio en el bien objeto de la compraventa, surge para el comprador el derecho de accionar judicialmente, haciendo uso de la acción redhibitoria, la cual procederemos a exponer.

La acción redhibitoria se encuentra consagrada en el artículo 1914 del C.C., en los siguientes términos: “Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz

---

<sup>218</sup> Al respecto, véanse las páginas 96 a 99 de la obra citada de Oviedo.

<sup>219</sup> BONIVENTO, Op. cit. p. 154.

<sup>220</sup> OVIEDO, Op. cit. p. 101.

<sup>221</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de octubre de 2009, M.P.: William Namén Vargas. Expediente No. 00263. Consultado el 15 de mayo de 2018. Disponible en: <https://app.vlex.com/#vid/691832033>. “(...) con sujeción al **postulado de la buena fe** y a ineludibles deberes conexos o coligados al deber central de prestación, en especial, los de protección, transparencia e información, **el vendedor está obligado a informar con claridad, precisión y a plenitud al comprador los vicios o defectos que conozca o deba conocer** y, por ello, la reparación de los daños encuentra también venero en su inobservancia, por cuanto de conocerlos o haber logrado conocerlos, podía evaluarlos y abstenerse de contratar o hacerlo en términos diferentes. **Tales deberes son más intensos en quienes se dedican habitual o profesionalmente a la venta, ya de manera exclusiva, concurrente o conexas con otras actividades, verbi gratia, con la construcción**, sea por sí mismo o por otro, en cuyo caso, han de adoptar todas las medidas exigibles, razonables e idóneas para conocer e informar el exacto estado de la cosa” (Negritas fuera de texto).

<sup>222</sup> Código Civil. Artículo 1920. Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los vicios que naturalmente no lo son.

o mueble, llamados redhibitorios”. De acuerdo con el artículo 1917 del C.C.<sup>223</sup>, el comprador cuyo bien se encuentra afectado por un vicio redhibitorio tiene el derecho a incoar dos tipos de acciones:

- (I) **Acción redhibitoria en sentido estricto:** en virtud de esta se pretende la rescisión del contrato, es decir, volver las cosas al estado anterior a la celebración del contrato. Debiendo el vendedor restituir el precio pagado y el comprador restituir la cosa recibida en ejecución del contrato.
- (II) **Acción estimatoria o *actio quanti minoris*:** en virtud de esta el vendedor pretende que se regule el precio pagado por la cosa, al precio acorde con los vicios que afectan la cosa, es decir, al justiprecio. En este caso debe el vendedor restituir lo pagado en exceso respecto del justiprecio de la cosa. Si la cosa viciosa ha perecido, solamente procederá esta acción, según lo dispuesto en el artículo 1919 del C.C.<sup>224</sup>

A su vez, en el artículo 934 del C. Co. se define la acción redhibitoria en los mismos términos del Código Civil, y se otorga la misma facultad de elección al comprador.

Con la acción redhibitoria propiamente dicha y con la *actio quanti minoris*, se puede pretender la indemnización de perjuicios, cuando el vendedor conocía el vicio o debía conocerlo al tiempo del contrato y no lo informó al comprador, conforme con el texto de los artículos 1918 del Código Civil y 934 del Código de Comercio.

El término de prescripción para estas acciones en materia civil dependerá del tipo de acción y del tipo de bien. Tratándose de la acción redhibitoria propiamente dicha<sup>225</sup>, el término de prescripción es de un año para los bienes inmuebles y de 6 meses para los bienes muebles, contados a partir de la entrega real de la cosa. En lo que respecta a la *actio quanti minoris*<sup>226</sup>, el término de prescripción es de 18 meses respecto de los bienes inmuebles y de un año para los muebles, contados a partir de la entrega real de la cosa, sin perjuicio de las estipulaciones de las partes.

En caso de que la acción redhibitoria prescriba, el afectado podrá hacer uso de la *actio quanti minoris*<sup>227</sup>.

Los términos de prescripción de la *actio quanti minoris*, se aplican también a la acción de reducción del precio contenida en el artículo 1925, aplicable cuando el vicio no es redhibitorio porque no cumple con la característica de ser grave.

---

<sup>223</sup> Código Civil. Artículo 1917. Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta, o la rebaja del precio, según mejor le pareciere.

<sup>224</sup> Código Civil. Artículo 1919. Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta, no por eso perderá el comprador el derecho que hubiere tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder y por su culpa. Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se seguirán las reglas del artículo precedente.

<sup>225</sup> Código Civil. Artículo 1923. La acción redhibitoria durará seis meses respecto de las cosas muebles y un año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que las leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieren ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega real.

<sup>226</sup> Código Civil. Artículo 1926. La acción para pedir rebaja del precio, sea en el caso del artículo 1915 o en el artículo 1925, prescribe en un año para los bienes muebles y en diez y ocho meses para los bienes raíces.

<sup>227</sup> Código Civil. Artículo 1924. Habiendo prescrito la acción redhibitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicios, según las reglas precedentes.

En materia comercial, el término de prescripción es de 6 meses, sin distinciones entre el tipo de acción o la naturaleza del bien, conforme con lo dispuesto en el artículo 938 del C.Co<sup>228</sup>.

### 3.1.3. ¿Obsolescencia programada de calidad, un vicio redhibitorio?

Teniendo en cuenta todo lo expuesto frente a los vicios redhibitorios, sostenemos que la obsolescencia programada de calidad, entendida como, las técnicas utilizadas por los productores al diseñar o fabricar un bien para predeterminar su vida útil con el fin de aumentar la tasa de reemplazo del bien, **se configuran como un vicio redhibitorio, toda vez que cumplen con las tres características definitorias de estos, así:**

- (I) **El vicio existía al tiempo de la venta.** Las técnicas usadas para delimitar la vida útil de los bienes son implementadas desde la fabricación o desde el diseño de los bienes, por tanto, son anteriores a la celebración del contrato de compraventa.
- (II) **El vicio es grave.** El vicio es grave porque sin importar la técnica usada, lo que se busca es volver inútil el bien de tal forma que el comprador se vea compelido a comprar otro bien.
- (III) **El vicio es oculto.** Los productores no anuncian las técnicas usadas para delimitar la vida útil de los productos.

A esta misma conclusión llega Anabalón, en los siguientes términos:

*En nuestra opinión, la circunstancia de que el fabricante introduzca un mecanismo, sea cual sea su naturaleza, que inhabilite el funcionamiento del bien, transcurrido un determinado período de tiempo, y de tal envergadura que imposibilite su uso natural, es constitutivo de un vicio redhibitorio. En efecto, el vicio es contemporáneo al tiempo de la venta (se trata de un defecto de fábrica), reviste el carácter de grave (justamente la obsolescencia programada tiene por propósito inhabilitar total o parcialmente la funcionalidad de la cosa, reduciendo o, derechamente, eliminando toda posibilidad de uso, con el objetivo de forzar al comprador a adquirir un nuevo producto) y es oculto (por su propia naturaleza, los mecanismos por los cuales se introduce la obsolescencia a un producto se ocultan a la vista del comprador)<sup>229</sup>.*

En el mismo sentido opina Sánchez<sup>230</sup>, que la obsolescencia programada puede ser un vicio redhibitorio, sin embargo, da a entender que en la actualidad debido a la facilidad de acceder a la información, puede que ningún mecanismo de obsolescencia programada cumpla con el requisito de ser oculto<sup>231</sup>.

<sup>228</sup> Código de Comercio. Artículo 938. La acción prevista en los artículos 934 y 937 prescribirá en seis meses, contados a partir de la entrega.

<sup>229</sup> ANABALÓN, Pablo. Obsolescencia programada: análisis desde el derecho comparado y proyecciones de su aplicación en materia civil y de derecho del consumo en Chile. Memoria de prueba para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2016. P. 78.

<sup>230</sup> SÁNCHEZ, Mateo. La obsolescencia programada en las prácticas comerciales y su relación con el régimen de vicios ocultos y garantías de consumo. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. págs. 180-183.

<sup>231</sup> SÁNCHEZ. Op. Cit. p. 183. "Hoy todos sabemos que los bienes son creados para morir en determinado tiempo y muchas veces mediante una simple inspección general en la web el usuario se puede cerciorar de la calidad y la vida útil de los productos, más cuando sucede un defecto masivo, el cual asimila más a un defecto evidente que a uno oculto".

Pese a que sostenemos que la obsolescencia programada es un vicio redhibitorio, desde términos puramente conceptuales, consideramos que una respuesta satisfactoria a la pregunta planteada en este acápite, debe darse a partir de casos concretos, en atención a las variables que inciden en la determinación de un defecto como un vicio redhibitorio, incluyendo no solo el defecto en sí mismo considerado, sino también a las calidades de quienes fungen como comprador y vendedor.

Por ello a continuación analizaremos cada requisito de los vicios redhibitorios frente a algunos casos documentados de obsolescencia programada, siguiendo el siguiente orden: exposición del caso, análisis de los requisitos de los vicios redhibitorios en el caso concreto y análisis de la forma de accionar dada la existencia del vicio.

#### (I) Chip contador de impresiones.

El primero caso, se refiere a la impresora Epson Stylus C42UX registrado en el documental “*Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la obsolescencia programada*”, en el cual se demuestra que tras un determinado número de impresiones contadas por un microchip *Eeprom 93C*, ubicado en la tarjeta lógica de la impresora, esta deja de funcionar, requiriendo de un servicio técnico especializado, que según el documental, en Barcelona donde se registra el caso, es más costoso que adquirir una nueva impresora. Además, se expone que el usuario puede superar este mecanismo, acudiendo a un *freeware* especial que cumple la función de reiniciar el contador de impresiones, permitiendo que la impresora funcione nuevamente<sup>232</sup>.

En el documental se deja entrever, que la existencia del chip o la vida útil limitada no es informada por la compañía productora de la impresora, por ello, con el fin de ahondar más en el caso específico, hemos consultado el manual del usuario<sup>233</sup> de dicha impresora buscando alguna mención o notificación relativa a la vida útil de la impresora, a un número máximo de impresiones que pueda realizar, a la existencia de un chip contador o cualquier mención que haga pensar que la impresora servirá por un periodo de tiempo limitado, y nada hemos encontrado al respecto.

A partir de la situación descrita, analizaremos los requisitos que configuran la existencia de un vicio redhibitorio:

1. **Vicio anterior al contrato:** El chip contador que determina el número máximo de impresiones se encuentra en la tarjeta madre de la impresora desde su fabricación. Por lo tanto, cumple con el primer requisito, referido a que el vicio existía al tiempo de la venta.

---

<sup>232</sup> En este documental se plantea una solución a esta técnica de obsolescencia programada, consistente en que mediante un proceso de ingeniería inversa, se reinicia el chip contador de impresiones, de tal forma que podrá volver a utilizarse, hasta que el contador llegue al número máximo de impresiones, y deba repetirse el procedimiento.

<sup>233</sup> EPSON AMERICA INC. EPSON Stylus® C42 Series: User's Manual. 2002. Consultado el 17 de mayo de 2018. Disponible en: <https://files.support.epson.com/pdf/sc42ux/sc42uxu1.pdf>

2. **Gravedad del vicio:** La impresora sirve para su uso natural, sin embargo, una vez alcanzado el número máximo de impresiones establecidas en el chip, la misma se tornará en inservible.

Consideramos, a partir de las reglas de la experiencia, que una persona común o un comprador promedio optaría por no comprar la impresora o comprarla a un precio inferior si se le advierte que esta solo funcionaría por un número determinado de impresiones.

Lo anterior implica que el vicio es grave, cumpliendo con el segundo requisito.

Sin embargo, debe anotarse que el vicio es reparable pues como expusimos, se puede solucionar acudiendo a un servicio técnico o haciendo uso del *freeware* especializado. Sin embargo, creemos que esta reparabilidad no resulta relevante por dos razones: (I) la reparabilidad es inocua si resulta más económico en términos monetarios comprar una impresora nueva, y (II) acudir al *freeware* implicaría un esfuerzo desmesurado para una persona común, pues implicaría tener que conocer la existencia del mismo y documentarse sobre la forma de repararlo, aunado a que este no es un método de reparación oficial.

3. **Carácter oculto del vicio.** El productor, en este caso Epson, por ningún medio manifestó la existencia de esta característica predispuesta en el producto,.

Se desconoce si cuando se comercializaba esta impresora, los vendedores distintos de Epson tenían conocimiento de la existencia del chip y si lo anunciaba, sin embargo, creemos que esta situación también les era desconocida, habida cuenta que esta condición no era anunciada por la compañía productora.

Por ello, a simple vista el comprador no podría conocer la existencia del chip, por tanto, el vicio es oculto.

Dado el caso, que el comprador fuera una persona que debido a su profesión u oficio tenga conocimientos avanzados en circuitos integrados, electrónica o funcionamiento de impresoras, creemos que tampoco tendría forma de saber de la existencia del chip salvo que haya trabajado en el diseño del producto o que por otro medio se hubiera enterado de esta situación.

A partir de lo descrito, nos encontramos ante un mecanismo de obsolescencia programada que se constituye como vicio redhibitorio en la medida que reúne las tres calidades necesarias para este efecto.

En lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de acción por la existencia de un vicio redhibitorio, debemos comentar varios aspectos:

1. El término que transcurra desde la entrega de la impresora hasta el cumplimiento del número máximo de impresiones será fundamental porque este permitirá al usuario conocer la existencia del vicio y consecuentemente accionar. Dicho término

significará la posibilidad del comprador de poder elegir entre el tipo de acción a interponer, de que solo pueda intentar la *actio quanti minoris*, o que las mismas hayan prescrito.

Lo anterior no implica que consideremos como estrictamente necesario que se llegue al número máximo de impresiones generándose la consecuente inutilidad de la impresora para poder intentar una acción redhibitoria. Si no, que la forma más fácil en que el comprador podrá notar la existencia de este vicio es el que mismo se manifieste, sin que la sola manifestación de este exima la carga probatoria a cargo del accionante.

Consideramos como legítimo iniciar una acción redhibitoria sin que se haya llegado al número máximo de impresiones, siempre y cuando se logré demostrar la existencia del chip, la naturaleza del mismo y el efecto inutilidad del bien que este generará.

2. Si se llegará a considerar este vicio como un vicio relevante, pero no grave, porque la impresora puede repararse, en todo caso podrá intentarse la acción de reducción del precio.
3. Creemos que cuando la impresora sea vendida directamente por el productor habrá lugar a la indemnización de perjuicios, debido a que el fabricante tiene conocimiento del vicio. Cosa diferente a cuando sea vendida por un tercero o por alguien que haga parte de la cadena de suministros, porque aunque tengan el deber de informarse respecto de la existencia del vicio y de informarlo a los siguientes compradores, este deber se agota en la adopción de medidas razonables e idóneas tendientes a conocer la existencia de los vicios. Y el carácter técnico que entraña el uso del chip requiere de conocimientos especialísimos y de realizar investigaciones técnicas complejas para llegar al conocimiento del mismo. Cosa diferente es que la información relativa al vicio se encuentre fácilmente en los medios de comunicación disponibles a la mano del vendedor, tales como internet, en ese caso podría ser viable la pretensión de indemnización de perjuicios respecto de un vendedor que no sea productor, sin embargo, podría excepcionarse frente al demandante, que dicha posibilidad de fácil consulta del vicio haría que el mismo no cumpliera con el requisito de oculto, y por tanto no ser un vicio redhibitorio.

## (II) Bombillos.

Las 1.000 horas de vida útil de los bombillos pactada al interior del Cartel Phoebus, es uno de los casos documentados de obsolescencia programada de calidad más antiguos, y según Chacón, las 1000 horas se mantienen hoy en día<sup>234</sup>.

---

<sup>234</sup> CHACÓN. Op. Cit. p. 87-88. “Los ecos de aquella medida retumban aún en lo que nos ha tocado vivir del siglo XXI, pues basta con ir a cualquier almacén de grandes superficies o tienda de barrio en Colombia para constatar que las bombillas incandescentes clásicas que todavía se pueden adquirir en el mercado, oscilando su precio entre \$1.000 y \$4.000, dejan claramente establecido en la caja respectiva que su vida útil está gida por la marca invisible de las 1.000 horas que pactó PHOEBUS en la Nochebuena más oscura que la industria de la luz eléctrica pueda recordar.”

Chacón<sup>235</sup> concluye que durante el año 2013, la vida útil de los bombillos aún se encontraba limitada a 1.000 horas por año. Al respecto hace una recopilación fotográfica de advertencias contenidas en los empaques de varios bombillos en los que se indica un promedio de uso de entre 985,5 a 1.000 horas al año.

Para comprobar si la obsolescencia aún se encuentra en los bombillos disponibles en el mercado, hemos decidido acercarnos a un almacén de grandes superficies y examinar varias marcas y tipos de bombillos, frente a lo cual encontramos que la vida útil de los mismos se encuentra limitada, y es expresada en horas:



<sup>235</sup>Ibíd. p. 93 a 97.



De las fotografías se evidencia que los bombillos son un producto cuya vida útil se encuentra predeterminada y es informado así por los productores, sin que se especifique cual es el mecanismo utilizado para delimitar la vida útil de estos bienes. Se ha dicho que la forma en que los fabricantes predeterminan la vida útil de estos productos es mediante la composición química del filamento en el caso de los bombillos incandescentes<sup>236</sup>, y mediante la composición química del gas que hace parte de las bombillas fluorescentes.

En este caso, se evidencia la existencia de un mecanismo de obsolescencia programada de calidad que no constituye un vicio redhibitorio, pues no cumple con uno de los requisitos dispuestos por la ley, el carácter oculto, toda vez que los productores anuncian en el empaque de los bombillos la vida útil media o proyectada de los productos.

(III) Pantimedias

En 1939 DuPont empezó a comercializar pantimedias hechas con la fibra sintética creada por ellos, el Nylon<sup>237</sup>. Las primeras pantimedias fabricadas con Nylon eran muy resistentes, al punto que existen grabaciones que dan cuenta que resistían tanto como para jalar carros con ellas, sin embargo, a partir de su comercialización al público se hicieron menos duraderas mediante la modificación de sus componentes químicos<sup>238</sup>.

Desde entonces no es un misterio que las pantimedias de materiales sintéticos tienen una vida útil muy corta y una tasa de recambio alta, por ello, hemos decidido hacer el mismo ejercicio anterior.

Pantimedias marca Jenny	
Parte delantera del empaque	Parte trasera del empaque
	

<sup>236</sup>Ibíd. p. 98.

<sup>237</sup>SLADE. Op. Cit. p. 125

<sup>238</sup>A este respecto se puede consultar la obra documental de Cossima Dannoritzer en los minutos 35:30 a 40:05





En las fotografías se evidencia que no se hace mención alguna frente a la vida útil de los productos. A partir de estas y de la situación descrita frente a la durabilidad de las pantimedias, analizaremos los requisitos que configuran la existencia de un vicio redhibitorio.

1. **Vicio anterior al contrato:** La composición química de la fibra usada para la confección de la pantimedia, es la que determina la vida útil o durabilidad. Por lo tanto, se cumple con el primer requisito, referido a que el vicio existía al tiempo de la venta, toda vez que este vicio existe desde la fabricación misma del producto.
2. **Gravedad del vicio:** La pantimedia sirve para su uso natural, sin embargo, la vida útil de la misma se encuentra limitada por la composición del material con que se encuentra confeccionado el producto.

Por ello, consideramos a partir de las reglas de la experiencia, que una persona común o comprador promedio optaría por no comprar la pantimedia o comprarla a un precio inferior, si se le informará la vida útil de la misma. Aunque, se debe tener en cuenta que estos productos no tienen un precio muy alto en el mercado, de hecho, para el público, estos son productos considerados como desechables, aunque no sean anunciados así.

Adicionalmente, el vicio no es reparable, pues una vez que se ha afectado materialmente el producto su reparación resulta muy difícil debido a la debilidad del material.

Lo anterior implica que el vicio es grave, cumpliendo con el segundo requisito.

3. **Carácter oculto del vicio.** Los productores no informan al comprador la vida útil de los productos, la calidad de este o la tasa de reemplazo de los mismos. A simple vista el comprador no podría conocer la existencia del vicio, consistente en la composición química del material con que se encuentra confeccionado el producto

Dado el caso, que el comprador fuera una persona que debido a su profesión u oficio posea conocimientos avanzados en química, ingeniería química o composición de textiles, creemos que tampoco tendría forma de saber esta situación salvo que sometiera el producto a pruebas de resistencia o de composición.

Sin embargo, es de conocimiento general, entre las personas que adquieren este tipo de producto que los mismos no son durables, es más, se les suele considerar como productos desechables.

Por ello, en este caso no se cumple con el carácter oculto que deben cumplir los vicios redhibitorios debido al carácter conocido de la corta vida útil de estos productos.

En este caso nos encontramos ante un mecanismo de obsolescencia programada que no se constituye como vicio redhibitorio en la medida que es de público y fácil conocimiento que

las pantimedias están hechas para ser poco duraderas y resistentes, por ende, ser reemplazadas rápidamente tras pocos usos.

#### (IV) iOS 9 y el iPhone 4S.

La versión 9 del sistema operativo de los celulares producidos por Apple, generó que los dispositivos del modelo 4S se vieran afectados en su rendimiento al punto de que los mismos se tornaron prácticamente inservibles, puesto que no servían para ejecutar las tareas básicas propias de un celular, tales como hacer llamadas o enviar mensajes de texto<sup>239</sup>.

Se debe tener en cuenta que el iPhone 4S empezó a ser comercializado desde el 14 de octubre de 2011<sup>240</sup> hasta el 9 de septiembre de 2014, cuando fue anunciado el iPhone 6<sup>241</sup>. Al momento de su lanzamiento, este modelo contaba con la versión 4.0 de iOS<sup>242</sup>, y recibió actualizaciones del sistema operativo hasta la versión 9.0 del mismo, lanzada el 16 de septiembre de 2015<sup>243-244</sup>.

A partir de la situación descrita hemos realizado una lectura del Contrato de Licencia de Software iOS 9.0, sin que en el mismo se haga mención alguna frente a la afectación que puede generar dicha versión en los modelos 4S del iPhone, de hecho, se incluye a este dispositivo como compatible con el sistema operativo. Únicamente se menciona que el usuario asume el riesgo en caso de que el software afecte el rendimiento de los dispositivos<sup>245</sup>.

Teniendo en cuenta lo expresado, analizaremos los requisitos que configuran la existencia de un vicio redhibitorio:

1. **Vicio anterior al contrato:** El vicio es la versión 9.0 en adelante del sistema operativo iOS, y este no existía al momento del contrato debido a que como ya se relató, dicha versión fue liberada al público el 16 de septiembre de 2015, y el dispositivo fue dejado de vender por Apple el 9 de septiembre de 2014, por tanto, el iPhone 4S no llegó a contar con iOS 9.0 como versión de fábrica.

---

<sup>239</sup> Los hechos descritos dieron origen a una acción de grupo en Estados Unidos, al respecto puede consultarse el aparte (II) del acápite 2.1.2. del presente escrito.

<sup>240</sup> APPLE COMPUTER. iPhone 4S First Weekend Sales Top Four Million. Octubre, 2011. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/newsroom/2011/10/17iPhone-4S-First-Weekend-Sales-Top-Four-Million>.

<sup>241</sup> APPLE COMPUTER. Apple Announces iPhone 6 & iPhone 6 Plus—The Biggest Advancements in iPhone History. Septiembre, 2014. Consultado el 20 de mayo de 2018. <https://www.apple.com/newsroom/2014/09/09Apple-Announces-iPhone-6-iPhone-6-Plus-The-Biggest-Advancements-in-iPhone-History/>.

<sup>242</sup> APPLE COMPUTER. iPhone 4S First Weekend Sales Top Four Million. Octubre, 2011. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/newsroom/2011/10/17iPhone-4S-First-Weekend-Sales-Top-Four-Million>.

<sup>243</sup> APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS iOS 9.0-9.3.5. Consultado el 20 de mayo de 2018. [https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es\\_ES&viewlocale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es_ES&viewlocale=es_ES).

<sup>244</sup> La versión 10.0 del sistema operativo, no fue compatible para el iPhone 4s: APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS 10.0 - 10.3.3. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: [https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es_ES).

<sup>245</sup> APPLE COMPUTER. Contrato de licencia de software iOS 9.0. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS9.pdf>. “7. Exclusión de garantías. (...) 7.2. USTED RECONOCE Y ACEPTA DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL USO DEL SOFTWARE ios Y DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL SOFTWARE O A LOS QUE SE ACCEDA A TRAVÉS DEL SOFTWARE ios SE REALIZA A SU ENTERO RIESGO, Y QUE USTED ASUME TOTALMENTE EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO”.

Por ello a primera vista, tenemos que no se cumpliría con este requisito.

Sin embargo, a nuestro juicio, existe el vicio como germen, teniendo en cuenta que el productor del dispositivo al tener injerencia en el sistema operativo cuenta con la facultad de generar el vicio mediante actualizaciones futuras, con el simple hecho de incluirla en el código fuente. Es decir, la compañía productora del bien tendría en todo momento la capacidad de generar el vicio, por tanto, el vicio existe en potencia y se desarrolla a partir de la actualización del sistema operativo.

Somos conscientes de que en este caso nuestra posición frente al carácter potencial de vicio puede ser rebatida porque plantea la existencia de una condición meramente potestativa, relativa a que la empresa productora por medio de las actualizaciones futuras torne inutilizable el bien, debido a la capacidad de actualizar el software. Sin embargo, continuaremos con el análisis del resto de características.

2. **Gravedad del vicio:** Los dispositivos iPhone 4s servían desde el momento en que fueron sacados al mercado en 2011, hasta que fueron actualizados con la versión 9.0 de su sistema operativo lanzada en 2015. Es decir, el dispositivo servía para su uso natural, pero dicho uso se vio inhabilitado desde la actualización 9.0.

Por ello, consideramos a partir de las reglas de la experiencia, que una persona común o comprador promedio optaría por no comprar el iPhone 4S o comprarlo a un precio inferior si se le advierte que a partir de una actualización futura del sistema operativo con el que funciona el dispositivo, este dejaría de servir para su uso natural.

Aunado a lo anterior hemos encontrado información relativa a que el defecto causado por iOS 9.0 no es reparable, debido a que una vez que se actualiza la versión del sistema operativo, no es posible hacer *downgrade* a una versión anterior por políticas de Apple. Sin perjuicio de esto, debe mencionarse que, en enero de 2018, por error, la compañía permitió que cualquier usuario de un dispositivo que funcionaria con iOS pudiera instalar versiones antiguas del mismo, desde la versión 6.0, lo cual fue rápidamente corregido<sup>246-247</sup>.

3. **Carácter oculto del vicio.** El productor, en este caso Apple, por ningún medio manifestó la posibilidad de que una actualización del sistema operativo del iPhone pudiera tornarlo inutilizable, de hecho, la versión 9.0 de iOS, mencionaba que este modelo de iPhone era compatible con la referida actualización.

---

<sup>246</sup> MACRUMMORS. Apple Accidentally Allowed Downgrades All the Way Back to iOS 6 Early Today. Enero, 2018. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.macrumors.com/2018/01/11/apple-accidentally-signed-old-ios-versions/>.

<sup>247</sup> Es acertado mencionar que usuarios con conocimientos avanzados en informática pueden hacer downgrade de la versión 11 a la versión 10 del sistema operativo, mediante un software especial llamado Futurestore (<https://github.com/tihmstar/futurestore>), acudir a este procedimiento puede generar errores en el dispositivo que anulen por completo su funcionamiento. En todo caso, el uso de este software no permite reparar el caso que estamos analizando relativo a la versión 9.0 de iOS. Al respecto: RUIZ, Alberto. Cómo instalar versiones anteriores de iOS que Apple ya no firma. Ipadizate. Febrero, 2018. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.ipadizate.es/2018/02/24/downgrade-ios-apple/>

Consideramos que a ningún vendedor ni comprador por tener la carga de informarse o por ser expertos en temáticas relativas a programación de dispositivos móviles o desarrollo de software, se le puede exigir una carga tan extrema que implique analizar el código fuente del sistema operativo iOS para identificar las afectaciones que por vía de este se puedan ocasionar al dispositivo.

Tras el análisis efectuado consideramos que la actualización 9.0 de iOS en el iPhone 4S es un mecanismo de obsolescencia programada, específicamente de obsolescencia informática de calidad, que no se constituye como un vicio redhibitorio, debido a que no se puede afirmar, categóricamente, que cumpla con el requisito referido a la anterioridad al tiempo del contrato.

Sin embargo, haremos dos anotaciones en lo referido a la exigibilidad judicial por vicios redhibitorios en este caso, si se acepta nuestra posición frente a la potencialidad del vicio como existencia del vicio con anterioridad al tiempo del contrato.

La primera, referida a que si partimos del hecho de que una persona haya comprado un iPhone 4s el último día que Apple los vendió, el 9 de septiembre de 2014, y que esa misma persona haya actualizado a iOS 9.0 el mismo día que este se encontraba disponible, el 16 de septiembre de 2015, las acciones redhibitorias se encontrarían prescritas, tanto si aplican las normas civiles como si aplican las normas comerciales.

La segunda, en torno a que si bien es cierto, consideramos que no es necesario que el mecanismo de obsolescencia programada surta efectos para poder demandar por la existencia de un vicio redhibitorio, en este caso concreto, no sería posible demandar la existencia de un vicio redhibitorio antes de que el iPhone 4S fuera actualizado a iOS 9.0, porque no sería legítimo probar existencia potencial del vicio, como la simple capacidad del productor para introducir en actualizaciones futuras mecanismos que tornen inutilizable el dispositivo.

De la exposición inicial y de todos los casos analizados, concluimos que los mecanismos de obsolescencia programada pueden llegar a ser constitutivos de vicios redhibitorios que generen la facultad en el comprador del bien afectado a incoar acciones judiciales tendientes a la indemnización de los perjuicios, la resolución del contrato de compraventa o la reducción a justiprecio.

No obstante, frente a las acciones redhibitorias, sin importar el régimen en que se apoye, encontramos que no siempre resultan ser un mecanismo de protección eficaces para los adquirentes de bienes sometidos a obsolescencia programada por dos razones.

La primera, relativa a que los mecanismos de obsolescencia de calidad pueden surtir efectos -en el sentido de anular la funcionalidad del bien- en un tiempo superior a los tiempos de prescripción de las acciones estudiadas, no pudiendo acudir el afectado al ejercicio de esta acción. Quien ha comprado un producto sometido a estos mecanismos, bien podría accionar judicialmente antes de que el bien quede inutilizable, pero esto plantea en primer lugar la conciencia en torno a la presencia de obsolescencia de calidad en un bien y, en segundo lugar, un esfuerzo probatorio considerable.

La segunda, concerniente a que la prueba de la existencia de mecanismos de obsolescencia de calidad en un bien resulta costosa y técnicamente compleja, pues implica un conocimiento especializado en campos especiales de ingeniería y diseño de productos a fin de determinar que el productor de un bien lo ha fabricado con una fecha caducidad predispuesta.

Ahora nos corresponde estudiar la obsolescencia programada de calidad frente a las garantías en el contrato de compraventa, con el fin de determinar si estas pueden plantear una regulación a dicho fenómeno.

### 3.2. Garantía en el derecho privado

El legislador determinó la existencia de dos obligaciones de garantía frente al contrato de compraventa, la primera, con origen en la voluntad de las partes (3.2.1.), y la segunda, impuesta legalmente (3.2.2.).

#### 3.2.1. Pacto de garantía de buen funcionamiento.

El estatuto mercantil confiere a las partes la posibilidad de pactar una garantía de buen funcionamiento en el contrato de compraventa, que se entenderá otorgada cuando se trate de bienes que se acostumbran a vender con esta clase de garantía:

*Artículo 932. Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad.*

*El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador.*

*La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a partir de la fecha del contrato.*

*Artículo 933. Se presumen vendidas con garantía las cosas que se acostumbra vender de este modo.*

Nos refiere Oviedo<sup>248</sup>, que el *nomen iuris* garantía, hace referencia a la asunción del vendedor de un riesgo por un hecho eventual frente al comprador que afecte impida o disminuya la idoneidad del bien.

En virtud de esta garantía, el vendedor garantiza por el tiempo previsto, el buen funcionamiento de la cosa vendida y en caso de omitirse el término, la ley suple el vacío, estableciéndola por un espacio de dos años.

En lo que respecta al significado de la expresión “buen funcionamiento”, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en Sentencia del 16 de diciembre de 2013,

---

<sup>248</sup>OVIEDO. Op. Cit. p. 309.

expresó que esta se refiere “a las características que hacen posible que la cosa vendida, cualquiera que ella sea, sirva a la finalidad que le es propia o para la cual fue adquirida”<sup>249</sup>.

Para que el comprador haga efectiva esta garantía, deberá reclamarle al vendedor el defecto de funcionamiento que llegue a presentar la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a que lo haya descubierto, so pena de que opere la caducidad del reclamo, siempre y cuando el defecto se presente dentro del término pactado de la garantía o de los dos años establecidos por ley.

Hecha la reclamación en término, el vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados al comprador. Frente a esto considera Oviedo, que una forma de indemnización que puede ser pretendida es la reparación del bien teniendo en cuenta que “la figura no parece excluirla y a ella podría llegarse asumiendo que una forma de indemnizar al comprador es mediante su reparación o porque al pactar la garantía se hubiere incluido tal posibilidad”<sup>250</sup>.

En lo que tiene que ver con la exigibilidad judicial de esta garantía, apoyamos el criterio sostenido por la doctrina nacional<sup>251</sup> en el sentido de que, la acción judicial indemnizatoria por los perjuicios causados se podrá intentar dentro de los 10 años siguientes a la aparición del defecto, siempre y cuando el mismo haya sido reclamado oportunamente al vendedor, dentro del término de vigencia de la garantía y haya realizado la reclamación dentro de los 30 días siguientes a la producción del mal funcionamiento.

Con relación al objeto de nuestro estudio, consideramos que quien adquiera un bien sometido a obsolescencia programada y en el respectivo contrato de compraventa se estipule o le sea aplicable la garantía por buen funcionamiento, podrá requerir al comprador y consecuentemente demandarlo, únicamente cuando el bien se inutilice o deje de funcionar a causa del mecanismo de obsolescencia. Lo anterior se fundamenta en que la garantía de buen funcionamiento, según lo establecido en el artículo 932 del C. Co. y la interpretación contenida en la Sentencia de Casación Civil del 16 de diciembre de 2013, únicamente tiene aplicación cuando el bien objeto de la compraventa no sirva para su uso natural o para el uso por el cual fue adquirida.

Por ejemplo, en el caso de la impresora Epson Stylus C42UX<sup>252</sup> que cuenta con un chip contador de impresiones, el mecanismo de obsolescencia surte efectos al momento de llegar al número máximo de impresiones generando la inutilidad de la impresora, y hasta que no se llegue a dicho límite la impresora funcionará normalmente, por ello, el comprador de una impresora de estas no podrá alegar que la mera existencia del chip contador de impresiones genere una afectación al funcionamiento natural o buen funcionamiento del bien, sino que deberá esperar a que el mismo surta efectos para poder accionar.

---

<sup>249</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2013, M.P.: Ariel Salazar Ramirez. Expediente No. 04959. Consultado el 22 de mayo de 2018. Disponible en: <https://app.vlex.com/#vid/-509824855>.

<sup>250</sup> OVIEDO. Op. Cit. p. 320.

<sup>251</sup> En este sentido se expresan Oviedo en la página 316 de su obra ya citada, y Cárdenas en la página 257 de su obra “La resolución por problemas de funcionamiento de la cosa en el derecho colombiano: el régimen interno-vicios ocultos y garantía mínima presunta – y el régimen de la compraventa internacional de mercadería”.

<sup>252</sup> Véase: Aparte (I) del numeral 3.1.3. del presente trabajo.



Si analizamos el caso de los bombillos<sup>253</sup>, llegamos a la misma conclusión, puesto que al consistir el mecanismo de obsolescencia programada en este caso, en la relación o proporción de los componentes químicos de los materiales con que está hecho el bien, el bombillo servirá para su uso natural hasta cuando el mismo llegue al fin de su vida útil. En el caso en que el mismo se dañe y el comprador reclame dentro de los términos legales, el debate jurídico podría ceñirse en lo relativo a la garantía de funcionamiento o bien frente al cumplimiento del contrato puesto que el vendedor anuncia la vida útil esperada del producto.

Iguales consideraciones aplican para el caso del iPhone 4S y la actualización 9.0 de iOS, hasta que la última versión de iOS no sea instalada en el celular, generando la inutilidad de este, no es posible hablar de una situación en la cual se pueda reclamar por una garantía de buen funcionamiento.

Conforme con lo expresado, concluimos que la garantía de buen funcionamiento es una figura jurídica que puede regular la obsolescencia programada de calidad siempre y cuando, se produzcan dos condiciones: (I) que el bien afectado por un mecanismo de obsolescencia programada haya sido objeto de un contrato de compraventa mercantil y que en el mismo se pacte esta garantía o que el bien se suela vender por costumbre sujeto a este tipo de garantía, y (II) que el mecanismo de obsolescencia programada surta efectos dentro del término de la garantía.

Además de este garantía convencional o consuetudinaria, también se encuentra en el régimen mercantil una garantía de origen legal, que procederemos a analizar frente a la obsolescencia programada de calidad.

### 3.2.2. Garantía legal

Como garantía legal nos referimos a la disposición del artículo 931 del Código de Comercio:

***Artículo 931.*** *Salvo prueba en contrario, se presumirá que el comprador quiere adquirir la cosa sana, completa y libre de gravámenes, desmembraciones y limitaciones del dominio.*

*Si el comprador, dentro de los cuatro días siguientes a la entrega o dentro del plazo estipulado en el contrato, alega que la cosa presenta defectos de calidad o cantidad, la controversia se someterá a la decisión de peritos; éstos dictaminarán sobre si los defectos de la cosa afectan notablemente su calidad o la hacen desmerecer en forma tal que no sea de recibo o lo sea a un precio inferior. En este caso, el comprador tendrá derecho a la devolución del precio que haya pagado y el vendedor se hará de nuevo cargo de la cosa, sin perjuicio de la indemnización a que esté obligado por el incumplimiento. El juez, por procedimiento verbal proveerá sobre estos extremos.*

*Pero si el comprador lo quiere, podrá perseverar en el contrato al precio fijado por los peritos.*

---

<sup>253</sup> Véase: Aparte (II) del numeral 3.1.3. del presente trabajo.



Por virtud de la citada disposición, se le otorga al comprador el derecho de objetar dentro de los cuatro días siguientes a la recepción del bien o al pactado en el contrato de compraventa, que el bien presenta defectos de calidad o cantidad, dicha objeción será decidida por peritos en el marco de un procedimiento verbal sumario<sup>254</sup>, quienes determinarán si el defecto afecta la cosa al punto de que la misma no sea de recibo o que deba reducirse el precio pagado y al respecto emitirá sentencia el juez del proceso.

Consideramos que un mecanismo de obsolescencia programada de calidad, puede ser entendido como un defecto de calidad, debido a que limita la vida útil de la cosa, al punto de hacerla merecedora de un precio inferior, pues a raíz de los casos que hemos analizado en páginas precedentes, hemos concluido que por virtud de la obsolescencia programada de calidad las cosas llegan a funcionar, sin embargo, lo hacen con una vida útil predeterminada, y cuando esta no ha sido anunciada al comprador, la compra del bien se ha realizado sin conocer todas sus características, y de haberse informado que la cosa tenía una vida útil limitada quizá no la hubiere comprado o no a ese precio. De ahí que cuando un bien objeto del contrato de compraventa mercantil ha sido sometido a obsolescencia programada de calidad, y ni esta condición ni su vida útil han sido anunciadas, el comprador podrá ejercer el derecho de objeción contenido en el artículo 931 del C.Co. e intentar la rebaja de su precio, al justiprecio considerado por peritos según el procedimiento verbal sumario.

Esta disposición debe integrarse con el artículo 939 del C.Co.<sup>255</sup>, según el cual no procederán dichas objeciones en los siguientes casos: (I) Cuando el comprador revise las cosas al momento de la entrega y las reciba sin hacer protesta, y (II) Cuando el vendedor exija al momento de la entrega que el comprador manifieste el recibo a satisfacción de la cosa y el comprador no reserve su facultad de protestar con posterioridad.

Desde nuestra percepción, las situaciones establecidas en el artículo 939 generan que la garantía de orden legal sea inocua, pues el vendedor podrá abusar de lo establecido en la norma e imponerle al comprador que para la entrega del producto deba manifestar que ha recibido de conformidad la cosa, lo que generaría la inaplicabilidad de la garantía de orden legal, y además de esta situación, es muy común que un comprador reciba la cosa sin hacer reserva de su derecho de protesto o de examinarla con posterioridad, generándose el mismo efecto frente a la garantía.

Compartimos la consideración de Bonivento<sup>256</sup>, en torno a que el artículo 931 del Código Comercio constituye un grado especial de garantía que no se encuadra dentro de la noción general del saneamiento por vicios redhibitorios, y por tanto son completamente independientes.

---

<sup>254</sup> Tal como lo dispone el artículo 390 del Código General del Proceso.

<sup>255</sup> Código de Comercio. Artículo 939. Entregadas las mercaderías vendidas, el comprador no será oído sobre defectos de calidad o faltas de cantidad toda vez que las haya examinado al tiempo de la entrega y recibido sin previa protesta. El vendedor tendrá derecho a exigir del comprador el inmediato reconocimiento o el recibo que acredite la entrega de la cosa a satisfacción, y si el comprador no hace reserva de su facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa, se estará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

<sup>256</sup> BONIVENTO, Op. cit., p. 153. “Es, apenas un grado especial de garantía, que no se encuadra dentro de la noción general del saneamiento por vicios redhibitorios”.

En igual sentido se expresa Oviedo<sup>257</sup>, al manifestar que estas normas se aplican respecto de defectos aparentes al momento de la entrega, no interfiriendo en todo caso con las normas relativas a vicios redhibitorios, y en esa misma línea nos refiere Cárdenas que “(...) las únicas acciones que podrán intentarse posteriormente se refieren a defectos que no pudieron percibirse al recibir la cosa, es decir debe tratarse de defectos ocultos”<sup>258</sup>.

Los vicios o defectos aparentes son definidos en temprana jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como aquellos “susceptibles de ser descubiertos en el primer examen que de ellos se haga”<sup>259</sup>, y frente a estos se dijo, según las disposiciones del anterior Código de Comercio vigente en Colombia, que “el vendedor responde de los vicios aparentes que tienen los efectos vendidos, antes, durante y aun después de la adquisición con posterioridad a su tradición efectiva al comprador, hasta tres días inmediatos a la entrega – art. 251- y concede un plazo más dilatado para los ocultos, y la reclamación ha de hacerse en un plazo razonable sin exceder de seis meses -art. 246-”.

No obstante lo anterior, consideramos que aunque un defecto no sea aparente, por cuanto no pueda verse a simple vista, no implica que el comprador no se encuentre legitimado para ejercer el derecho de objeción contenido en el artículo 931 del Código de Comercio, y por tanto, frente a la obsolescencia programada de calidad, sostenemos que si el comprador tiene conocimiento de la existencia de un mecanismo de obsolescencia en el producto que ha comprado, el mismo podrá interponer las objeciones en debida forma, y las resultas de las mismas, en todo caso estarán determinadas por lo que se logre probar ante los peritos.

Por lo expuesto, sostenemos que la garantía legal establecida en el artículo 931 del C.Co. ofrece una regulación ante la obsolescencia programada de calidad, sin embargo, la misma no ofrece una solución eficaz debido a que el comprador deberá ejercer la objeción dentro de un término muy reducido, de 4 días o el estipulado contractualmente, en el que salvo que tenga conocimiento previo de la existencia de la obsolescencia no podrá darse cuenta de la misma y por tanto ejercer la debida objeción, además, lo establecido en el artículo 939 frente a las situaciones en que no podrá objetarse el defecto, hacen prácticamente inocua la garantía legal.

Respecto de las garantías en materia de derecho privado, es posible sostener que en principio, al igual que las acciones por vicios redhibitorios, servirían como un mecanismo de protección para el adquirente de bienes cuya producción ha obedecido o incluido la obsolescencia programada de calidad, pero en todo caso, no resultan ser un mecanismo idóneo desde el punto de vista práctico y judicial, en atención a los tiempos, la carga probatoria y los requisitos que deben cumplirse para poder accionar judicialmente.

Del presente capítulo concluimos que la obsolescencia programada de calidad se puede enmarcar dentro de los supuestos de hecho regulados por la figura de los vicios redhibitorios y de la garantía en el contrato de compraventa, sin embargo, la regulación plantea problemas

---

<sup>257</sup> OVIEDO, Op. Cit. p. 308. “Consideramos, además, que estos defectos de calidad no desplazan a las reglas sobre vicios redhibitorios, las que aplicarían para defectos ocultos y no aparentes al momento de la entrega”.

<sup>258</sup> CARDENAS, Op. Cit. p. 279.

<sup>259</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de marzo de 1952 M.P.: Pablo Emilio Manotas. Gaceta Judicial. T. LXXI Nos. 2110 y 2111, p. 510. Consultado el 22 de mayo de 2018. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20LXXI%20n.º%202110-2114%20\(1952-1953\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20LXXI%20n.º%202110-2114%20(1952-1953).pdf).

de orden práctico frente a las acciones judiciales a favor de los compradores por la obsolescencia programada para no verse afectados al comprar un bien sometido a esta.

A continuación, enunciaremos los mecanismos que, desde nuestra perspectiva, deberían ser tomados en cuenta para superar las dificultades de orden práctico que plantea la regulación de los vicios redhibitorios y de la garantía legal:

- Establecer un término de prescripción de las acciones a partir del conocimiento de la existencia del vicio constitutivo de obsolescencia programada sin que en todo caso pueda superarse un término determinado de años.
- Establecer la inversión de la carga de la prueba frente al vendedor demandado, siempre y cuando el mismo sea el productor del bien.

Debido a que existe claridad frente a las herramientas de protección con las que podrían contar los compradores en caso de que adquieren un bien afectado por obsolescencia programada mediante un contrato de compraventa comercial o civil, las fallas que presentan estas herramientas y algunas de las formas en que podrían ser superadas, nos corresponde averiguar esto mismo respecto del régimen de protección a los consumidores regulado en la Ley 1480 del 2011.

#### **4. Instituciones especiales del derecho del Consumo.**

Los más afectados por la obsolescencia programada de los productos son los consumidores, debido a que en el seno de las relaciones de consumo se desarrollan una gran cantidad de operaciones económicas en las cuales se transan bienes sometidos a obsolescencia programada de calidad, además, son los consumidores quienes suelen encontrarse en una posición de debilidad contractual respecto de los fabricantes y comercializadores de bienes<sup>260</sup>.

Las relaciones de consumo se rigen por las normas del Estatuto del Consumidor<sup>261</sup>, en adelante E.C., en lo que respecta al objeto de nuestro estudio, analizaremos algunas de las instituciones establecidas en el E.C., con el fin de determinar si estas ofrecen una regulación a la obsolescencia programada de calidad, específicamente: el régimen legal de garantía (4.1.) y el derecho del consumidor a ser informado (4.2.).

Antes de centrar el análisis en las mencionadas figuras, es acertado poner de presente que las normas del Código de Comercio sobre vicios redhibitorios también son un mecanismo que podría ser usado por el consumidor, en los términos expuestos en el capítulo anterior, debido a que el artículo 4° del E.C. establece que “En lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos de carácter sustancial se le aplicarán

---

<sup>260</sup> SÁNCHEZ. Op. Cit. p. 183. “La naturaleza del derecho de consumo está determinada por la asimetría de las relaciones entre productores o proveedores con respecto al consumidor. Por ello, se ha hecho necesario un derecho especial encaminado a tutelar o fortalecer el derecho que se le acoge al consumidor”.

<sup>261</sup> COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. (12, octubre, 2011). Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011, No. 48.220.

las reglas contenidas en el Código de Comercio”, y en el Estatuto nada se establece sobre los vicios redhibitorios.

#### 4.1. Garantía en el derecho del consumo.

En lo concerniente a la garantía, encontramos dos definiciones legales<sup>262</sup>. La primera, en el numeral 5° del artículo 5°, como: “**Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto**” (Negritas fuera de texto).

La segunda, en el artículo 7° del E.C. como “**la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos**” (Negritas fuera de texto).

Las definiciones legales anteriormente citadas contienen elementos comunes, específicamente el relativo a que la garantía es la responsabilidad a cargo del proveedor por la **calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos**.

A continuación, abordaremos las siguientes temáticas: (4.1.1.) Los elementos que componen la obligación de garantía haciendo una aproximación general de cada uno de estos elementos respecto de la obsolescencia programada; (4.1.2.) El carácter de la obligación de garantía; (4.1.3.) El alcance de la obligación de garantía; (4.1.4.) La forma de hacer exigible la obligación emanada de la garantía, y por último, (4.1.5.) analizaremos si la obligación de garantía proporciona herramientas a los consumidores para protegerse de la obsolescencia programada desde el análisis de casos concretos documentados de obsolescencia.

##### 4.1.1. Elementos que componen la garantía.

###### (I) La calidad.

La calidad, se define como la “*condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él*”<sup>263</sup>.

Frente a esta definición considera Giraldo, que las características inherentes corresponden “*(...) a las propias, obvias de cualquier producto de similares condiciones, que espera el consumidor que cumpla sin necesidad de que se las hagan expresas (...)*”<sup>264</sup>, mientras que

---

<sup>262</sup> En la doctrina se encuentran definiciones realizadas a partir de los componentes legales, al respecto: GIRALDO, Alejandro. La garantía en el nuevo estatuto del consumidor. En: JIMÉNEZ, Fernando (Coordinador Científico). Estudios de derecho del consumo (Ley 1480 de 2011). Conceptos básicos, garantías, publicidad y cláusulas abusivas. Homenaje al profesor Álvaro Mendoza Ramírez. Tomo I. Bogotá: Ed. Universidad de la Sabana, 2017. p. 231. “La garantía es un derecho que tiene todos los consumidores que adquieren bienes y servicios en el mercado. Por lo tanto, los productores y los expendedores son los responsables de responder solidariamente por el buen estado y el funcionamiento de los productos que ponen en circulación, durante el término que determine la autoridad competente, y a falta de este lo fije el propio productor. En caso de que el producto presente fallas, la obligación consistirá en reparar el bien, cambiarlo por uno nuevo de similares características o devolver el dinero pagado”.

<sup>263</sup> Numeral 1° del artículo 5° del EC.

<sup>264</sup> GIRALDO. Op. Cit., p. 234.

las características atribuidas “(...) *son las adicionales, no obvias, dadas a conocer por el productor o el proveedor en su proceso de comercialización* (...)”<sup>265</sup>.

Nos refiere Valderrama<sup>266</sup>, que para determinar si un producto presenta problemas de calidad se deben analizar tres puntos: (I) si hay algún parámetro normativo que establezca requisitos o características con las que deba cumplir el bien, (II) en caso de no existir una regulación, se deberá verificar la información suministrada por el proveedor o productor, y (III) se deberá establecer si el producto cumple con las características que le son inherentes.

Respecto de los parámetros normativos, expone la autora que, lo primero que debe ser examinado para establecer si un producto cumple o no con las condiciones de calidad, es la existencia de “disposiciones legales que regulen la materia, debido a que, de existir alguna norma al respecto, el producto que se ponga en el mercado deberá ser conforme a lo dispuesto en ella”<sup>267</sup>, estas disposiciones normativas podrán ser reglamentos técnicos (*normas de obligatorio cumplimiento para los productores o fabricantes en las que se definen las características de los productos y los procedimientos a seguir en su fabricación*)<sup>268</sup> o normas técnicas (*establecen de estándares de calidad y competitividad en los procesos productivos, pero que vinculan a los productores solo si estos han manifestado dar cumplimiento a estas*)<sup>269</sup>.

Frente a la información suministrada, explica la autora que, “La calidad del producto está determinada, (...) por la información suministrada por el productor o proveedor sobre el bien o servicio, incluidas todas las afirmaciones de carácter objetivo que se encuentren en los anuncios publicitarios sobre el producto”<sup>270</sup>.

Frente al cumplimiento de las características inherentes, afirma la autora<sup>271</sup> que, este será un parámetro subsidiario cuyo análisis deberá hacerse en ausencia de una norma aplicable que regule la calidad o a la falta de información suministrada. Y define las características inherentes como aquellas “propias y obvias de cualquier producto de características similares, y que en consecuencia no tendrían que ser informadas para poder ser conocidas por un consumidor”<sup>272</sup>. Por último, manifiesta que estas no podrán ser determinadas en abstracto sino que deberá hacerse un proceso comparativo donde se analicen productos de características similares<sup>273</sup>.

En lo que respecta a la obsolescencia programada, y su relación con la calidad, consideramos que un producto cuya vida útil se encuentra limitada, cumple con las condiciones propias de calidad, siempre y cuando el efecto inutilidad no se haya materializado. Como se sabe, por la obsolescencia programada de calidad, se establece una vida útil predeterminada para los

---

<sup>265</sup> *Ibíd.*

<sup>266</sup> VALDERRAMA, Carmen Ligia. De las garantías: una obligación del productor y el proveedor. En: VALDERRAMA, Carmen Ligia (Directora). *Perspectivas del derecho del consumo*. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2013. P. 235

<sup>267</sup> *Ibíd.* p. 236

<sup>268</sup> *Ibíd.* p. 235.

<sup>269</sup> *Ibíd.* p. 236.

<sup>270</sup> *Ibíd.* p. 239.

<sup>271</sup> *Ibíd.* p. 239.

<sup>272</sup> *Ibíd.*

<sup>273</sup> *Ibíd.*

bienes y durante dicho término, el producto funciona y puede cumplir con las características inherentes a él.

Por tanto, creemos que hasta que no se produzca el efecto inutilidad del bien, la obsolescencia programada no genera por sí sola que un bien no cumpla con las condiciones de calidad exigida.

Cosa diferente es cuando la vida útil del producto sea inferior a la vida útil mínima establecida en: (I) disposiciones normativas o reglamentarias, o en (II) la información o anuncios hechos por el productor o vendedor o (III) la propia de productos de similares características, en cuyo caso si existirá una falta de conformidad en lo que respecta a la calidad exigible.

Frente a la vida útil propia de los productos de similares características, se puede entender que cada tipo de producto cuenta con una vida útil mínima inherente, bien porque así sea un estándar en la industria, o que las condiciones en que se suele usar el producto así lo generan, sin embargo, esto entraña un problema esencial relativo a determinar ¿Cuál es la vida mínima con que debe cumplir cada tipo de producto?, y a que sea la industria quien en últimas establezca la vida útil que estime conveniente, como el caso del citado Cartel Phoebus.

Por tanto, tenemos que la única forma en que se podría adecuar, la obsolescencia y la garantía por calidad, sería entender que cada producto tiene una vida útil mínima e inherente, bien porque esta se encuentra establecida normativamente, sea informada o sea la propia del tipo de producto a que pertenece el bien. El problema surge en torno a la determinación de este término para cada producto en el mercado, se pensaría que el productor tiene el deber de anunciarla, pero, a la luz de la normativa vigente el productor no se encuentra obligado a proporcionar esta información<sup>274</sup>.

## (II) La idoneidad.

Por su parte, la idoneidad, se define como: la “aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado”<sup>275</sup>.

Al respecto considera Giraldo<sup>276</sup> que, esta hace referencia a que un bien sirva para lo que está hecho, y anota que, “es muy importante tener en cuenta los requerimientos del consumidor cuando compra, cuando este los ha hecho expresos”<sup>277</sup>.

En igual sentido, manifiesta Valderrama que, al analizar la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades para las que ha sido comercializado, debe incluirse “el cumplimiento de finalidades específicas informadas por el consumidor, y que determinan su decisión de consumo”<sup>278</sup>.

---

<sup>274</sup> Respecto a la información en el derecho del consumo, discurrirémos en el acápite 4.2. del presente escrito.

<sup>275</sup> Numeral 6 del artículo 5° del EC.

<sup>276</sup> GIRALDO. Op. cit., p. 234.

<sup>277</sup> Ibíd. p. 235.

<sup>278</sup> Ibíd. p. 240

Concepto que en relación con la obsolescencia de calidad no tendría mayor consideración, puesto que un bien sometido a obsolescencia programada funciona, y satisface la necesidad para la cual ha sido creado, sin embargo, si podría existir una relación en dos escenarios.

En primer lugar, cuando el consumidor comunique al productor o proveedor que dentro de su finalidad de consumo se encuentra una duración mínima del bien que va a adquirir, por tanto, al no durar el bien por lo menos por dicho término, el mismo no será idóneo a la luz de lo solicitado por el consumidor.

En segundo lugar, acudir a una interpretación extensiva, en la que se entienda que la idoneidad del producto es afectada por la vida útil del mismo, lo cual, si bien puede ser cierto, estaría sujeto a la predeterminación de la vida útil mínima ligada a la calidad, la cual se puede dar bien porque lo haya solicitado el consumidor, establecido por la normativa, informado en la publicidad o sea costumbre mercantil.

Sin embargo, en todo caso, la solución a estas dos situaciones estaría dada en términos de calidad de los productos.

### (III) La seguridad.

La seguridad, es la “condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores”<sup>279</sup>, la cual a efectos de la obsolescencia de calidad resulta indiferente en su adecuación a la responsabilidad por garantía, pues como bien indica Chacón<sup>280</sup>, los efectos de la obsolescencia se ciernen sobre la vida útil del bien y no sobre este como una fuente de riesgos para los consumidores, esto genera que no hagamos un análisis respecto de la responsabilidad por productos defectuosos frente a la obsolescencia programada<sup>281</sup>.

Así tenemos que con los tres conceptos primarios que definen la existencia de la responsabilidad por garantía, habrá lugar a esta responsabilidad respecto de un producto afectado por obsolescencia programada únicamente cuando deje de funcionar, o bien, cuando se logré demostrar que la vida útil mínima no es acorde a lo solicitado por el consumidor, lo establecido en la normativa, lo informado o lo anunciado por el productor o proveedor.

---

<sup>279</sup> Numeral 14 del artículo 5º del EC.

<sup>280</sup> CHACÓN. Op. Cit., p. 406. “El tercer aspecto con que se rematan los compromisos del Estatuto del Consumidor es la seguridad del producto, la cual se entiende como la (...). Aspecto que para efectos de nuestro análisis a la luz de la obsolescencia programada no tiene mayor relevancia, pues como lo habrá notado el ávido lector, ninguno de los casos relatados en esta investigación contiene daños a los usuarios de los productos, sino que todo se resume a detrimentos patrimoniales.”

<sup>281</sup> Al respecto opina Correa que “parece especialmente difícil estimar la aplicación del régimen de responsabilidad por producto defectuoso a los bienes con obsolescencia programada. Lo anterior, por cuanto para que tal conclusión se pudiera alcanzar sería necesario reconocer que el artificio por el cual el bien tiene una vida útil recortada necesitaría ser considerado en cuanto tal como un defecto, cosa que según la definición legal señalada no encuentra aún respaldo en el derecho [en referencia a la definición de producto defectuoso contenida en el numeral 17 del artículo 5 del E.C.]. Y aunque no se excluye la posibilidad de que el mismo pueda ocasionar daños, su ocurrencia no sería refutable de la característica en mención sino de otra condición del bien, esa sí admitida como defecto, o de la insuficiente información en la garantía legal sobre los riesgos que acarrea su uso después de un determinado tiempo”. CORREA. Op. Cit., p. 75.

#### (IV) El buen estado y funcionamiento.

El buen estado y funcionamiento de un producto no se encuentra definido o regulado en el E.C., ni en los Decretos reglamentarios, o en las circulares emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante S.I.C.), por lo cual es imperioso acudir a las definiciones propias de un uso general.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el funcionamiento se define como la ejecución realizada por una cosa de “las funciones que le son propias”<sup>282</sup>, y el estado como la “situación en que se encuentra alguien o algo”<sup>283</sup>, así podría concluirse que el “buen estado y funcionamiento” se refiere a que el producto no se encuentre deteriorado y sea apto para la ejecución de sus funciones.

Respecto del buen funcionamiento, indica Valderrama<sup>284</sup>, que este hace referencia a que el producto posibilite la satisfacción de las necesidades para las cuales es usualmente adquirido, y también, para la satisfacción de los requerimientos particulares del consumidor, cuando el mismo los haya manifestado al productor y este último haya aceptado este hecho.

En lo referido al buen estado, manifiesta Valderrama, que este se circunscribe a que el producto “se encuentre en buenas condiciones, es decir, que no esté averiado o dañado, salvo, claro está, que el consumidor hubiera conocido de antemano los defectos del producto”<sup>285</sup>.

En suma, desde nuestro criterio, el “buen estado y funcionamiento del producto”, no son más que la reafirmación del cabal cumplimiento de las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad a que deben ajustarse los bienes en el marco de una relación de consumo.

##### 4.1.2. Carácter de la obligación de garantía.

La responsabilidad que surge de la garantía, según el artículo 10 del E.C. es solidaria<sup>286</sup>, por tanto, podrá exigirse su cumplimiento al productor y/o al proveedor del bien, a elección del consumidor. Salvo en el caso dispuesto en el artículo 2.2.2.32.3.2. del Decreto 1074 de 2015, mediante el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo<sup>287</sup> (en adelante, D.U.R.), en el que se establece que respecto de los bienes usados cuya garantía haya expirado, la garantía estará a cargo únicamente del proveedor, si ha decidido venderlo con garantía.

<sup>282</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2017. “Funcionamiento”. Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=IbV5KQE>.

<sup>283</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2017. “Estado”. Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en <http://dle.rae.es/?id=6EawoZ6>.

<sup>284</sup> VALDERRAMA. Op. Cit., p. 251.

<sup>285</sup> Ibíd.

<sup>286</sup> Artículo 10. Responsables de la garantía legal. Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos. Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad establecidas en el artículo 16 de la presente ley.

<sup>287</sup> COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1074 de 2015. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2015, No. 49523.



La garantía, conforme con el numeral 5° del artículo 5° del E.C., es una obligación de carácter temporal, pues la misma se encuentra sometida a un plazo de carácter extintivo, el cual una vez cumplido, no será exigible la garantía al productor o proveedor<sup>288-289</sup>.

El término de la garantía de un producto, según lo establecido en el artículo 8° del E.C.<sup>290</sup>, se determinará en las siguientes formas:

1. El que establezca la ley o la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>291-292</sup>.
2. En caso de no existir disposición legal o de la autoridad administrativa, el término de la garantía será el anunciado por el proveedor o productor.
3. En caso de no encontrarse en ninguna de las situaciones anteriores, el término dependerá del tipo de bien así:
  - Productos nuevos (bienes y servicios), será de 1 año.
  - Productos perecederos, el término irá hasta la fecha de vencimiento.
  - Productos usados, será de tres meses sino se ha excluido por escrito la garantía.
  - Bienes inmuebles, frente a la estabilidad de la obra será de diez años y para los acabados será de 1 año.

<sup>288</sup> En este sentido: VALDERRAMA. Op. Cit., p. 246. “La garantía es una obligación de carácter temporal, por lo que una desde su misma naturaleza se encuentra sometida a un plazo de carácter extintivo, motivo por el cual, una vez vencido el término, dejará de estar en cabeza del productor y del proveedor”.

<sup>289</sup> Al respecto: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Delegatura para asuntos jurisdiccionales. Sentencia 12295 del 29 de noviembre de 2017. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: [http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol\\_d99d98261cf44873b1256c679b233cd8](http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_d99d98261cf44873b1256c679b233cd8). “Y es que siendo la garantía una obligación de carácter temporal, esto es, que no es indefinida en el tiempo, corresponderá a la autoridad jurisdiccional verificar que para el caso concreto, la efectividad de la garantía se haya requerido durante su vigencia, pues la consecuencia de no haber agotado el requisito sujetándose a las condiciones de temporalidad previstas para el negocio en cuestión, **derivará inevitablemente en la inexistencia de obligaciones en cabeza del productor o proveedor respecto de los defectos de calidad alegados**” (Negritas fuera de texto).

<sup>290</sup> Estatuto del Consumidor. Artículo 8o. Término de la garantía legal. El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o proveedor. El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.

De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos nuevos. Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o expiración.

Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses.

La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el servicio tiene garantía de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio.

Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.

<sup>291</sup> Esta competencia se encuentra consagrada en el numeral 16 del artículo 59 del E.C. Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad: (...) **16. Fijar el término de la garantía legal de que trata el artículo 8° de la presente ley para determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario.** (...). (Negritas fuera de texto)

<sup>292</sup> La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho uso de esta potestad para establecer periodos de garantía para varios tipos de bienes. Respecto de automotores estableció la garantía mínima en términos de meses o kilómetros recorridos, lo primero que se cumpla, distinguiendo entre: Vehículos particulares (doce meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o veinte mil kilómetros de recorrido); Vehículos de servicio público de transporte de pasajeros (seis meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o cincuenta mil kilómetros de recorrido); Vehículos de servicio público (cuatro meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o veinte mil kilómetros de recorrido); Vehículos comerciales particulares (doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o veinte mil kilómetros de recorrido); Motos, motonetas y motocarros (seis meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o seis mil kilómetros de recorrido). Adicionalmente, se establecieron términos especiales de garantía mínima para las baterías usadas en los diferentes tipos de vehículos mencionados. Se establecieron términos de garantía mínima para los siguientes productos no perecederos, contados desde la entrega al comprador original: Pisos (12 meses), Muebles y enseres (12 meses), Repuestos de Vehículos y motos (12 meses), Llantas (6 meses), Monturas y lentes (6 meses), Calzado (2 meses). SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Circular Básica Jurídica, Título II. Consultada el 1 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/062018/Titulo%20II%20Proteccion-NULIDAD%20pvc.pdf>.

Los términos de vigencia de la garantía se empezarán a contar desde la entrega del bien al comprador.

Según el artículo 9 del E.C., el término de la garantía se suspenderá por el tiempo en que “el consumidor esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía”, adicionalmente, si por virtud de la garantía “se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia”, o bien, si por virtud de la garantía se produce el cambio total del bien, “el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición”.

Frente a la suspensión del término, anota Valderrama que, por virtud de la suspensión del término, una vez sea “regresado el producto al consumidor, el tiempo de la garantía se continuara contando por el tiempo restante para el cumplimiento dentro del plazo previsto”<sup>293</sup>. Adicionalmente, sugiere la autora<sup>294</sup> que, pese a que la ley no lo determina, cuando por la garantía sea reemplazada una parte del bien, esta contará con un término de garantía independiente que no podrá ser inferior al término de garantía del bien íntegramente considerado.

El carácter temporal y la disponibilidad del término de la obligación de garantía, en opinión de Echeverri y Ospina, se traduce en un obstáculo en materia de protección al consumidor frente a la obsolescencia programada por lo siguiente:

*(...) resulta especialmente problemática la posibilidad de que el productor y/o proveedor pueda establecer el tiempo de duración de la garantía, por cuanto, como ya se ha visto, los fabricantes bien sean vía software, hardware, o con la elección de los materiales de producción, pueden determinar la vida útil de los productos lo justo para que solo sobrepase los umbrales de la garantía. Así mismo, podría disminuir el tiempo de la garantía de acuerdo con la obsolescencia planeada desde el diseño del bien*<sup>295</sup>.

Adherimos en su totalidad a la crítica anteriormente expuesta, al igual que a la consideración de Chacón<sup>296</sup>, relativa a que al darle la posibilidad de determinación del término de la garantía a los fabricantes, se les otorga una facultad ilimitada sin ningún arbitrio que propenda por la protección del consumidor.

---

<sup>293</sup> VALDERRAMA. Op. Cit., p. 264

<sup>294</sup> Ibid. p. 265.

<sup>295</sup> ECHEVERRI, Verónica & OSPINA, Julián. La obsolescencia programada y los derechos del consumidor. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 150.

<sup>296</sup> CHACÓN. Op. Cit. p. 407 - 408. “Veámoslo de esta forma, la garantía es un mecanismo de protección del consumidor para reclamar al productor y/o vendedor por un artículo que sale defectuoso de alguna manera. Esto quiere decir que la garantía es la caja de pandora que desatará una serie de gastos extras para la empresa de los que si por ella fuera no se haría cargo ¿Entonces qué sentido tiene ceder a ellas la poderosísima potestad de determinar cuánto tiempo tendrán que estar cruzando los dedos para que todo salga bien y un consumidor no llegue a incomodarles con sus reclamos? Esto no tiene ninguna justificación y echa al traste todos los intentos de protección del Estatuto, pues sin un límite legal obligatorio la garantía legal se bate entre 5 minutos y la eternidad, cuando bien sabemos que los fabricantes siempre tenderán a reducirla a un mínimo que puedan presentar decentemente en sociedad”.

#### 4.1.3. Alcance de la garantía.

Conforme con el texto del artículo 11 del E.C., cuando el producto adquirido, no cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento, el consumidor podrá, dentro del término de vigencia de la garantía, solicitar: (I) la reparación del bien, (II) la sustitución del bien, o (III) la devolución del dinero pagado. Además, el consumidor tiene derecho a que se (IV) disponga de repuestos y mano de obra para la reparación del bien por parte del productor o proveedor.

##### (I) La reparación.

Es la principal obligación a cargo del productor o proveedor, y también un derecho a su favor<sup>297</sup>, en el entendido de que la primera instancia de la garantía, debe ser la posibilidad de arreglar los defectos, errores o fallas que presenta el producto.

Para que se pueda proceder a la reparación, el consumidor deberá observar lo normado en el artículo 2.2.2.32.2.1 del D.U.R.<sup>298</sup>: informar el daño del producto, poner el producto a disposición del productor o vendedor, según prefiera, e indicar la fecha de la compra.

Una vez reparado el bien, dispone el citado el artículo, que este deberá ser entregado al consumidor en el mismo lugar donde se solicitó la garantía, salvo que las partes acuerden la entregue en otro sitio. En todo caso, una vez sea reparado el bien y el mismo deba transportarse para ser entregado al consumidor, los costos de envío serán asumidos por el productor o vendedor, al igual que los costos asociados a la reparación en sí misma, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 del E.C.<sup>299</sup>.

Frente al término dentro del cual deberá surtir la reparación para la efectividad de la garantía, dispone el artículo 2.2.2.32.2.7. del D.U.R.<sup>300</sup>, tres supuestos diferentes:

---

<sup>297</sup> GIRALDO. Op. Cit., p. 246. “Es importante resaltar que, si bien esta es una obligación para el productor o el proveedor, **también es un derecho para ellos mismos**. Es muy usual en los consumidores que, con la primera falla, exija en el reemplazo total del productor por uno nuevo o la devolución. La norma, tratando de guardar el equilibrio entre el derecho de los consumidores y la estabilidad de los empresarios, determinó que si es posible arreglar el bien y dejarlo en perfectas condiciones, se podrá hacer dicha reparación” (Negritas fuera de texto).

<sup>298</sup> Artículo 2.2.2.32.2.1. Solicitud de la efectividad de la garantía legal. Para solicitar la efectividad de la garantía legal, el consumidor estará obligado a informar el daño que tiene el producto, ponerlo a disposición del expendedor en el mismo sitio en el que le fue entregado al adquirirlo o en los puntos de atención dispuestos para el efecto, a elección del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o de la celebración del contrato correspondiente.

En caso de que desee hacer efectiva la garantía legal directamente ante el productor, el consumidor deberá entregar el producto en las instalaciones de aquel.

El producto reparado o el de reposición deberán ser entregados al consumidor en el mismo sitio en donde solicitó la garantía legal, salvo que el consumidor solicite otro sitio y el productor o expendedor así lo acepte. Si se requiere transporte para el bien, los costos deberán ser asumidos por el productor o expendedor, según el caso.

Parágrafo. El consumidor que ejerza la acción jurisdiccional de protección al consumidor deberá haber surtido previamente la reclamación directa prevista en el numeral 5 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

<sup>299</sup> Artículo 11. Aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones: 1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero. (...)

<sup>300</sup> Artículo 2.2.2.32.2.7. Plazo para la reparación del bien. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará, de acuerdo con la naturaleza del bien y la falla que esté presente, el plazo máximo dentro del cual se deberá cumplir con la reparación para la efectividad de la garantía legal. En los casos para los cuales la Superintendencia no haya fijado un plazo distinto, la reparación deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la entrega del bien para la reparación.

En los casos en los que el productor o proveedor dispongan de un bien en préstamo para el consumidor mientras se efectúa la reparación del mismo, el término para la reparación podrá extenderse hasta por sesenta (60) días hábiles.

- El que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con *“la naturaleza del bien y la falla que este presente, el plazo máximo dentro del cual se deberá cumplir”*.
- En caso de que la entidad administrativa no haya fijado un término, *“la reparación deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la entrega del bien para la reparación”*.
- Si el productor o proveedor, entrega un bien sustituto al consumidor en préstamo mientras se realiza la reparación, *“el término para la reparación podrá extenderse hasta por sesenta (60) días hábiles”*.

Se debe mencionar que por la norma contenida en el artículo 2.2.2.32.3.5., respecto de los bienes desechables o de único uso, no procederá la reparación a título de garantía, sino únicamente la sustitución o la devolución de lo pagado.

Por último, según el numeral 2 del artículo 11 del E.C.<sup>301</sup>, si una vez reparado el bien la falla persiste, el consumidor tendrá a su elección: una nueva reparación, devolución de lo pagado o cambio del bien, los cuales trataremos de seguido.

## (II) La sustitución del bien.

La sustitución, es una herramienta supletiva, que procede únicamente cuando el bien no puede ser reparado o cuando pese a ser reparado persiste la falla.

El bien sustituto deberá ser “de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía”<sup>302</sup>.

Frente al término en que debe ser entregado el bien sustituto, dispone el artículo 2.2.2.32.2.8. del D.U.R., que la Superintendencia de Industria y Comercio, determinará el plazo máximo dentro del cual deberá realizarse la sustitución o reposición del bien para la efectividad de la garantía, en todo caso, de no existir fijado un plazo, “la reposición deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al momento en que el consumidor ponga a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal”.

## (III) La devolución del dinero.

Otra herramienta supletiva, a elección del consumidor, es la devolución del dinero pagado como precio del bien.

Cuando el bien no pueda repararse, o presente la falla reiteradamente, el consumidor podrá solicitar le sea reintegrado el valor que pagó por el bien, previa devolución del bien cuya garantía se reclama, libre de cualquier gravamen o impuesto.

<sup>301</sup> Artículo 11. Aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones: (...) 2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía.

<sup>302</sup> Ibid.

Frente al término en el cual debe realizarse la devolución del precio pagado, dispone el artículo 2.2.2.32.2.9. del D.U.R., que “*esta deberá producirse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que el consumidor ponga a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal, libre de gravámenes*”.

Opina Valderrama<sup>303</sup>, que como la restitución del precio pagado conlleva a la resolución del contrato y terminación de la relación de consumo, esta debería ser la última herramienta a la cual acudir, debiéndose antes, intentar la reparación y el reemplazo del producto para conservar la relación de consumo.

(IV) Disposición de repuestos, partes y mano de obra tras la terminación de la garantía.

Si bien esta no es una herramienta a la que pueda acudir un consumidor cuando el bien adquirido no cumple con las condiciones debidas, si es un derecho a su favor para que tras la expiración del término de garantía, en caso de presentarse un defecto o error en el bien, el proveedor o expendedor ponga a su disposición repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para la reparación de los productos.

Este derecho a favor del consumidor se encuentra dispuesto en el numeral 7º del artículo 11 del E.C.:

**Artículo 11.** Aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones: (...)

*7. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía, por el término establecido por la autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor. En caso de que no se haya anunciado el término de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por información insuficiente, será el de las condiciones ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Los costos a los que se refiere este numeral serán asumidos por el consumidor, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1 del presente artículo. (...).*

Debiéndose resaltar del citado artículo, que el término por el cual tiene vigencia esta obligación a cargo del productor, en primer lugar, será el dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>304</sup>; en caso de no estar determinado, será el anunciado por el

<sup>303</sup> VALDERRAMA. Op. Cit., p. 258-259.

<sup>304</sup> Artículo 2.2.2.32.3.1. Garantía de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada. La Superintendencia de Industria y Comercio fijará el término durante el cual los productores o expendedores deben garantizar la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para la reparación de los productos, de acuerdo con la naturaleza de los mismos y, además, establecerá la forma en la que los productores o expendedores deberán informar a los consumidores sobre dicho término.

productor<sup>305</sup>; y si no es anunciado por el productor, será el corriente del mercado, es decir, el que dicte la costumbre mercantil<sup>306</sup>.

Sobre este último aspecto opina Giraldo<sup>307</sup> que, en caso de no anunciarse, el término será equivalente al tiempo de vida habitual para productos similares.

Si bien, como ya se expresó, la garantía es una obligación a cargo del productor o proveedor, y por tanto es gratuita frente al consumidor, lo mismo no opera respecto de este derecho, por tanto, una vez expirada la garantía, el consumidor deberá pagar los repuestos, insumos y mano de obra para reparar el bien que sea puesto a su disposición por parte del productor.

A nuestro juicio, este derecho a favor del consumidor, y correspondiente deber a cargo del productor, es de vital importancia frente a la superación de los efectos de la obsolescencia programada de calidad, pues dado el caso, en que no se pueda reclamar la sustitución, reparación o devolución de lo pagado, el consumidor podrá arreglar el bien que ha adquirido y que ha devenido inservible a causa de los mecanismos de obsolescencia usados por el productor del bien.

En igual sentido se manifiestan Echeverri y Ospina, para quienes la garantía legal y la disposición de repuestos tras la terminación de esta, actúan como un “muro de contención que cumple la función de frenar, por lo menos por un periodo de tiempo determinado, que los productos devengan obsoletos por el solo deseo del productor”<sup>308</sup>. Además, opinan que este aspecto de la garantía genera a su vez, el deber de los proveedores y productores de informar sobre la vida útil de los bienes<sup>309</sup>.

Sin embargo, pueden existir problemas a la hora de exigir este derecho, por ejemplo, que el productor establezca un término muy corto que haga inane este derecho, o que el consumidor no tenga claridad respecto del término aplicable, y se vea abocado a tener que acudir a un mecanismo jurisdiccional en el cual deba probar, bien por vía de la costumbre mercantil o de la expectativa de vida de productos similares, el término que vincula al productor.

Consideramos que para que este elemento de la garantía pueda materializarse en un mecanismo que permita a los consumidores superar los efectos de la obsolescencia programada es necesario que se regule expresamente el término de vigencia de la obligación a cargo del productor, con el fin de que el consumidor tenga claridad y certeza frente al

---

<sup>305</sup> Sobre esta situación opina Bianchi, que “dejar a criterio de los fabricantes el periodo o la fecha hasta la cual garantizarán la provisión de esas piezas o repuestos podría constituirse en una solución aparente al problema, dado que en definitiva ellos mismos seguirían ‘programando’ la vida útil de los productos y decidiendo el periodo por el cual estarán disponibles las piezas de repuesto”. BIANCHI, Lorena. La influencia del principio del consumo sustentable en el combate de la obsolescencia programada, la garantía de los “productos durables” y el derecho a la información de los consumidores en Argentina. En: Revista de Derecho Privado. Marzo, 2018, Vol. 34. p. 306. Consultado el 10 de julio de 2018. Disponible en: <https://revistas.uecuenca.edu.co/index.php/derpri/article/view/5266>.

<sup>306</sup> GIRALDO. Op. Cit., p. 246.

<sup>307</sup> *Ibid.*

<sup>308</sup> ECHEVERRI & OSPINA. Op. Cit., p. 153.

<sup>309</sup> ECHEVERRI & OSPINA. Op. Cit., p. 156. “Dado que en virtud de la ley se debe brindar información acerca de los modos de instalación, uso y mantenimiento de los bienes, de las garantías y de la fecha de vencimiento cuando el producto es perecedero, y que la Superintendencia de Industria y Comercio puede reglamentar la información adicional que se deba brindar a los consumidores, **es posible estipular que, junto con la obligación de informar sobre la disponibilidad de repuestos y de mano de obra calificada para la reparación de bienes, el productor debe hacer saber a los consumidores el tiempo probable de duración de los mismos, para hacer de este un elemento de la decisión racional de compra**”. (Negritas fuera de texto)

término durante el cual deberá garantizarse la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y de mano de obra capacitada para poder refaccionar el bien<sup>310</sup>.

Siendo claro lo referido al alcance, los derechos o herramientas que supone para el consumidor la garantía establecida en el E.C., es preciso analizar lo referido a la forma de exigir el cumplimiento de estos.

#### 4.1.4. Exigibilidad de la garantía.

El consumidor que desee hacer efectivos los derechos que le corresponden por virtud de la garantía, deberá, en primer lugar, hacer una reclamación directa ante el productor o proveedor, y en caso de no recibir una respuesta o solución satisfactoria, podrá acudir al mecanismo jurisdiccional de protección.

La reclamación directa se encuentra regulada en el numeral 5° del artículo 58 del E.C., debiéndose hacer algunas observaciones al respecto en el presente.

La reclamación directa, se refiere a la solicitud hecha por el consumidor al productor o proveedor, de que se cumpla con la garantía respectiva. Esta solicitud puede ser hecha por escrito o en forma verbal, siendo válidos los medios telemáticos. Una vez realizada la reclamación, el obligado, deberá responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción, y si responde negativamente, o si la prestación realizada a título de efectividad de la garantía no es satisfactoria, el consumidor podrá acudir ante el aparato jurisdiccional para hacer efectiva su garantía.

No satisfecho el consumidor con la reclamación directa, podrá incoar una acción judicial, denominada Acción de Protección al Consumidor<sup>311</sup>, mediante la cual se pretende la efectividad de la garantía. Esta acción se encuentra regulada en los artículos 56 a 58 del E.C., en lo dispuesto en las normas concordantes del Código General del Proceso, y en el Capítulo 32 del Decreto 1074 de 2015.

Siendo acertado mencionar que para hacer efectiva la garantía en un plano jurisdiccional, el consumidor únicamente deberá demostrar la existencia del defecto<sup>312</sup>, de tal manera que, según Giraldo, “el consumidor solo está obligado a probar que el bien tiene un defecto, sin necesidad de demostrar las causas que lo generaron”<sup>313</sup>.

Tanto productor como vendedor, se exonerarán de la responsabilidad derivada de la garantía cuando demuestren que el defecto del bien proviene de un caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, utilización indebida del bien o inobservancia de las instrucciones de

---

<sup>310</sup> En igual sentido opina Bianchi: “Por otra parte, la reglamentación de estas obligaciones puede constituirse en una herramienta explícita para prevenir la obsolescencia programada, si se regula expresamente un plazo de vigencia para las mismas. (...) Con estas medidas se persigue el objetivo de alargar la vida de los productos, promover la reparación de los mismos e impulsar al sector dedicado a la reparación de bienes, generando nuevos empleos a nivel local”. BIANCHI, Op. Cit., p. 305.

<sup>311</sup> Así la denomina el Título VIII del Estatuto del Consumidor.

<sup>312</sup> Artículo 10. Responsables de la garantía legal. (...) Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad establecidas en el artículo 16 de la presente ley.

<sup>313</sup> GIRALDO, Op. Cit. p. 250.

instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. En todo caso, deberá demostrar el nexo causal entre la causal invocada y el defecto del bien<sup>314</sup>.

Tratándose de la obsolescencia programada, el defecto del bien debe ser entendido como la situación de inutilidad del mismo causada por el mecanismo de obsolescencia programada, en virtud de lo que se expuso sobre la calidad en el numeral (I) del acápite 4.1.1.

#### 4.1.5. La garantía y la obsolescencia programada.

Una vez abordado lo relativo a la obligación de garantía, su carácter, alcance y forma en que se puede hacer exigible, consideramos acertado, analizar, si dicha obligación plantea soluciones frente a casos documentados de obsolescencia programada de calidad, ya recogidos en el presente escrito, con el fin de emitir una conclusión frente a la aplicabilidad de la garantía en materia de obsolescencia.

##### (I) Chip contador de impresiones.

En el caso expuesto de la impresora Epson Stylus C42UX<sup>315</sup>, cuya vida útil se encuentra predeterminada a un número máximo de impresiones, por este solo hecho no hay una afectación que genere la exigibilidad del derecho a la garantía a favor del consumidor, puesto que la impresora funciona normalmente y satisface las necesidades para las cuales ha sido fabricada, producida y comercializada, es decir, se adecua a las condiciones de calidad e idoneidad debidas.

Sin embargo, cuando dicho mecanismo de obsolescencia programada genere la inutilidad del bien, el consumidor podrá accionar el derecho de garantía a su favor, siempre y cuando existen las condiciones que relacionaremos.

En primer lugar, que el efecto inutilidad se genere en el término cubierto por la garantía. Al respecto, debido a que el modelo específico de impresora data del año 2002, no encontramos información específica sobre garantía. Al consultar la página web para Colombia del fabricante Epson, tampoco se encuentra ningún tipo de información relativa al periodo de garantía, por tanto, aplicaría el término legal de 1 año, suponiendo que el producto haya sido comprado nuevo.

En segundo lugar, el consumidor deberá probar que la impresora ha dejado de imprimir, y por tanto que ya no satisface la necesidad para la cual fue creada.

---

<sup>314</sup> Estatuto del Consumidor. Artículo 16. Exoneración de responsabilidad de la garantía. El productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de: 1. Fuerza mayor o caso fortuito; 2. El hecho de un tercero; 3. El uso indebido del bien por parte del consumidor, y 4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano.

Parágrafo. En todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien.

<sup>315</sup> Véase aparte (I) del acápite 3.1.3.



Cumplidas estas condiciones, el consumidor deberá hacer el reclamo ante en el fabricante o proveedor, y en caso de que no se dé respuesta favorable al requerimiento hecho conforme con lo dispuesto en la normativa, el consumidor se encontrará legitimado para intentar una acción judicial de protección al consumidor.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que un consumidor podrá salir airoso en una reclamación jurisdiccional por garantía, pese a que el mecanismo de obsolescencia programada no haya surtido efecto. Siempre que pueda demostrar que (I) la vida útil de la impresora adquirida se encuentra predeterminada, y (II) que dicha vida útil es menor a la anunciada o a la pactada al momento de la venta, o si no fue anunciada ni pactada, que es inferior al estándar de productos similares en el mercado.

Dejando claro que somos conscientes de la dificultad probatoria que esto supone para el consumidor, especialmente, en lo que tiene que ver con la existencia del mecanismo y los efectos que este genera, además, de la comprobación del estándar de vida útil en mecanismos similares, cuando esta no ha sido anunciada o pactada.

## (II) Bombillos

En el caso expuesto de los bombillos<sup>316</sup>, habría lugar a la existencia de obligación de garantía a cargo del productor o expendedor, únicamente si el producto no cumple con las condiciones de vida útil anunciadas, recordando, que como ya se expuso, en los empaques de estos, los productores suelen revelar las horas de servicio estimadas de cada uno.

Dado el caso, en que el producto no cumpla con la vida útil mínima, deberá observarse si en el empaquetado se anuncia algún término de garantía especial, en caso de no anunciarse, el término de garantía será el de 1 año establecido legalmente.

Frente a la reclamación, reiteramos nuestra posición, el consumidor deberá probar únicamente el desperfecto del bien, es decir, que el bombillo no emite luz, y no el mecanismo de obsolescencia que genera dicha inutilidad.

## (III) Pantimedias.

En el caso expuesto de las pantimedias<sup>317</sup>, cuya vida útil ha sido limitada mediante la composición química del textil con el cual son hechas, consideramos, que debido a la costumbre mercantil y a la forma en que se ha desarrollado este producto, las mismas se han convertido en un producto desechable, de tal manera que se rasgan o deterioran fácilmente, teniendo una vida útil muy corta.

En este caso no existe una regulación normativa frente al término de garantía que las rige, como tampoco evidenciamos que se haya anunciado un término de garantía en los productos fotografiados, por tanto, el término aplicable, sería el de un año, establecido legalmente.

---

<sup>316</sup> Véase aparte (II) del acápite 3.1.3.

<sup>317</sup> Véase aparte (III) del acápite 3.1.3.

En lo que respecta a la exigibilidad de la garantía se debe anotar, que al ser productos desechables, por virtud de la garantía solamente se podrá conseguir su sustitución o la devolución de pagado<sup>318</sup>, sin embargo, debido a la mínima representatividad económica de estos bienes, no vemos muy factible que un consumidor se tome la molestia de iniciar la reclamación directa o la reclamación jurisdiccional a que haya lugar.

#### (IV) iOS 9 y el iPhone 4S.

Frente al defecto generado por la actualización 9.0 de iOS en los dispositivos iPhone 4S<sup>319</sup>, consideramos que la garantía del derecho del consumidor, podría ser una herramienta de protección para los consumidores que adquirieron los dispositivos móviles y que la actualización del sistema operativo tornó inutilizables.

En nuestro criterio, los efectos causados por la versión 9 del sistema operativo generan una afectación a la calidad e idoneidad del bien, puesto que como ya se documentó, los usuarios informaron que la actualización tornó prácticamente inutilizables a sus dispositivos para las tareas básicas que debe cumplir un teléfono celular, a saber, realizar llamadas y enviar mensajes de texto, y otras acciones aplicaciones básicas que debería ejecutar un *Smartphone*<sup>320</sup>.

Sin embargo, podría surgir un inconveniente, específicamente el relativo a la exigibilidad de la garantía debido al término de la misma, puesto que los iPhone 4S dejaron de venderse oficialmente en los Estados Unidos el día 9 de septiembre de 2014, cuando fue anunciado el iPhone 6<sup>321</sup>, y la actualización de la versión 9.0 del sistema operativo fue lanzada a nivel mundial el 16 de septiembre de 2015<sup>322-323</sup>, es decir, paso un año y 7 días desde la última vez en que se pudo haber comprado uno de estos dispositivos y la recepción de la fatídica actualización, no siendo cubierto por la garantía de 1 año establecida por Apple<sup>324</sup>.

Para el análisis de la exigibilidad, no hemos podido analizar un caso concreto desde el mercado colombiano, puesto que no fue posible encontrar la información referida a la última fecha en que se pudo haber comprado oficialmente a un distribuidor autorizado un iPhone 4S.

Sin embargo, como generalmente, la salida de un nuevo dispositivo y la clausura de las ventas de los modelos anteriores coincide, encontramos que en Colombia el iPhone 6 empezó a

---

<sup>318</sup> Decreto 1074 de 2015. Artículo 2.2.2.32.3.5. Garantía de bienes de único uso o desechables. Respecto de los bienes de único uso o desechables, no resultará procedente a título de efectividad de la garantía, la reparación del bien ni el suministro de repuestos. Las formas de efectividad de garantía procedentes para estos bienes son el cambio del bien por otro o la devolución del dinero en los términos de la Ley 1480 de 2011.

<sup>319</sup> Véase aparte (IV) del acápite 3.1.3. del presente trabajo.

<sup>320</sup> Véase aparte (II) del numeral 2.1.2. del presente escrito.

<sup>321</sup> APPLE COMPUTER. Apple Announces iPhone 6 & iPhone 6 Plus—The Biggest Advancements in iPhone History. Publicado el 9 de septiembre de 2014. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/newsroom/2014/09/09Apple-Announces-iPhone-6-iPhone-6-Plus-The-Biggest-Advancements-in-iPhone-History/>.

<sup>322</sup> APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS 9.0-9.3.5. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: [https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es\\_ES&viewlocale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es_ES&viewlocale=es_ES).

<sup>323</sup> La versión 10.0 del sistema operativo, no fue compatible para el iPhone 4s. APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS 10.0 - 10.3.3. Consultado el 20 de mayo de 2018. Disponible en: [https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es_ES)

<sup>324</sup> APPLE COMPUTER. Apple One (1) Year Limited Warranty – Accessory - For Apple and Beats Branded Products Only – version for October 27, 2014 - August 14, 2015. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/warranty/products/accessory-warranty-english.html>.

venderse oficialmente el día 14 de noviembre de 2015<sup>325</sup>, pudiendo considerarse que hasta ese día se vendió oficialmente el iPhone 4S, suponiendo que las políticas de venta de la compañía norteamericana coinciden con las de sus distribuidores en Colombia. De tal manera que, al haberse establecido la garantía de 1 año por parte de Apple en nuestro país<sup>326</sup>, hubiera sido legítima la reclamación de un usuario afectado por iOS 9.0, que haya comprado su dispositivo el 13 de noviembre y actualizado el sistema operativo a su novena versión el día 16 de septiembre de 2015, puesto que aún no se había cumplido el término de 1 año cubierto por la garantía.

Como se vio, una actualización puede afectar profundamente el funcionamiento del hardware. Razón por la cual coincidimos con la propuesta de Soto<sup>327</sup>, quien manifiesta que debe plantearse una garantía para el software que sea completamente independiente, de tal manera que las empresas no realicen actualizaciones por fuera del periodo cubierto por la garantía con el fin de generar la obsolescencia sobrevenida de los productos sin consecuencia alguna para ellos.

La propuesta del respetado autor se hace lógica y justa, si tenemos en cuenta que las actualizaciones de software, en la práctica generan o producen que el dispositivo pueda convertirse casi que en uno nuevo y completamente diferente, bien en forma positiva, cuando introducen novedades y utilidades con las que antes no contaba el producto, o en forma negativa, cuando generan la inutilidad del bien como en el presente caso.

Tras analizar los casos expuestos, podemos concluir que la garantía establecida en el E.C. plantea una regulación frente a la obsolescencia programada, específicamente, desde la garantía por defectos de calidad y por el componente de la garantía concerniente al deber del productor de asegurar la disponibilidad de repuestos y mano de obra especializada, sin embargo, encontramos que en la legislación actual existen varios obstáculos para que la institución de la garantía pueda ser un mecanismo eficaz de protección de los consumidores, dichos obstáculos son:

- La garantía únicamente tendrá efectos frente a la obsolescencia si la inutilidad se genera durante el término de vigencia de la garantía.
- Al encontrarse el término de vigencia de la garantía supeditado a lo que establezca el productor, este podrá establecer un término reducido o en todo caso más corto que la vida útil del producto.
- El término de vigencia del deber de disponibilidad de repuestos y mano de obra especializada no se encuentra debidamente determinado.
- No existen normas que regulen la garantía frente a las actualizaciones de software de los productos tecnológicos.

---

<sup>325</sup> ENTER.CO. El iPhone 6 llega en dos semanas a los operadores colombianos. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/iphone-6-en-colombia-disponibilidad/>.

<sup>326</sup> APPLE COMPUTER. Garantía limitada de un (1) año. Consultada el 7 de julio de 2018. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-alac-spanish.html>.

<sup>327</sup> SOTO. Op. cit., p. 401. “Por lo tanto, plantear de forma clara una garantía independiente que le permitiera al consumidor contar con asistencia técnica prestada por el fabricante una vez instalada la actualización, independientemente de si la garantía del hardware vigente, podría ser considerado un extremo positivo en favor de las empresas. Máxime cuando dicha dinámica les permitiría comprobar que actúan con lealtad y buena fe en el curso de las relaciones de consumo fruto de la comercialización de sus productos, pudiendo ser tomado en cuenta en una hipotética interpretación contractual”.

Habiéndose evacuado lo relativo a la garantía como un mecanismo de protección al consumidor frente a la obsolescencia programada, nos corresponde analizar el segundo mecanismo relevante, el deber de información a cargo de los productores y el correlativo derecho de los consumidores a ser informados.

#### 4.2. Derecho y deber de información.

En el presente aparte, expondremos el (4.2.1.) significado y el alcance de la información como derecho-deber en la regulación especial de protección al consumidor, y analizaremos si estos son una (4.2.2.) herramienta de protección para el consumidor que adquiere un producto sometido a obsolescencia programada.

##### 4.2.1. Naturaleza y alcance de la información en el Estatuto del Consumidor.

El numeral 1.3. del artículo 3° del E.C. consagra como un derecho de los consumidores el de “Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos”.

Correspondientemente, el artículo 23 del E.C., consagra el deber de los proveedores y productores de informar a los consumidores sobre los productos ofrecidos, en los siguientes términos, “Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información”.

En lo que respecta a la información, el numeral 7° del artículo 5° del mencionado Estatuto, la define como, “Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización”.

La información, como derecho, goza de gran importancia y relevancia en la regulación de las relaciones de consumo, al respecto en las Directrices para la Protección del Consumidor de las Naciones Unidas, se estableció que es un imperativo garantizar a los consumidores el acceso a “una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual”<sup>328</sup>, y consecuentemente se estableció el deber de informar a cargo de las empresas, como un principio de las buenas prácticas comerciales, consistente en que:

---

<sup>328</sup> NACIONES UNIDAS, CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. Directrices para la protección del consumidor. Nueva York y Ginebra: 2016. Consultado el 8 de julio de 2018. Disponible en: [http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1\\_es.pdf](http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf).

*Las empresas deben facilitar información completa, exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, términos, condiciones, cargos aplicables y costo final para que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundadas. Las empresas deben velar por que se pueda acceder fácilmente a esa información, especialmente a los términos y condiciones claves, con independencia del medio tecnológico empleado*<sup>329</sup>. (Negritas fuera de texto)

El derecho de los consumidores a recibir información fue reconocido como una garantía a su favor para tomar decisiones de consumo razonables teniendo en cuenta que los productores y proveedores son los que cuentan con el acceso a la información, en la Sentencia 12719 del 11 de diciembre de 2017 proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió una acción de protección al consumidor<sup>330</sup>, se expresó:

*En efecto, asistiéndole a los compradores el derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos y servicios que se le ofrecen y habiéndose consagrado la responsabilidad en cabeza de los productores y proveedores por el incumplimiento de tales obligaciones conforme se dispone en los artículos 23 y siguientes del estatuto de protección al consumidor, no se pretende otra cosa más que garantizar que los consumidores cuenten con los elementos de juicio suficientes que les permitan elegir entre la variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y así, adopten decisiones de consumo razonables. Y es que centrándonos en los productores y expendedores, como consecuencia de su experiencia en el mercado y de sus conocimientos en el proceso de producción y comercialización, suelen tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que venden, mientras que el consumidor, a pesar de ser quien mejor sabe qué es lo que le interesa, no necesariamente tiene a su disposición la información que le permita adoptar la decisión que más le conviene. De este modo, evaluar la veracidad y suficiencia de la información que determinó la intensión de compra en un determinado caso, siempre será un aspecto de suma relevancia a la hora de proteger los derechos de los consumidores en el marco de la acción jurisdiccional de protección al consumidor*<sup>331</sup>. (Subrayado fuera de texto)

Lo referido anteriormente se condensa en que, con el deber de informar a cargo de los productores y el correspondiente derecho de los consumidores a ser informados, se busca corregir la asimetría de información existente entre el productor y el consumidor, con el fin de lograr un equilibrio en las relaciones de consumo protegiendo a la parte débil<sup>332-333</sup>.

<sup>329</sup> Ibíd.

<sup>330</sup> Con la acción se pretendía la devolución del dinero pagado por un consumidor, en razón a la celebración de un contrato de prestación de servicios turísticos, en el cual no se le informó suficientemente al consumidor las condiciones en que se cumplirían las obligaciones emanadas del contrato, por parte de la agencia de viajes demandada.

<sup>331</sup> COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. Sentencia 12719 del 11 de diciembre de 2017. Consultado el 8 de julio de 2018. Disponible en: [http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol\\_101f0c9feb83492ebf23aace1cda2df0](http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_101f0c9feb83492ebf23aace1cda2df0).

<sup>332</sup> VILLALBA, Juan. Introducción al derecho del consumo. Bogotá: Ed. Universidad Militar Nueva Granada, 2015. p. 174. “En este sentido la obligación de información en las relaciones de consumo tiene un papel fundamental y pretende corregir la asimetría existente entre productor y consumidor. El estado a través de normas que se consideran de orden público, el derecho del consumo, debe velar por equilibrar las relaciones económicas de consumo en aras de proteger a la parte débil, el consumidor”.

<sup>333</sup> NAMÉN, Jeannette et al. La obligación de información en las diferentes fases de la relación de consumo. En: Revista e-Mercatoria. Bogotá, 2009. Vol. 8, No. 1, p. 3. Consultado el 10 de julio de 2018. Disponible en

El deber de información no se extiende en los términos amplios y genéricos de los artículos precitados, sino que se delimita conforme con lo establecido en el artículo 24 del E.C.:

*Artículo 24. Contenido de la información. **La información mínima comprenderá:***

*1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, **como mínimo el productor debe suministrar la siguiente información:***

*1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio;*

*1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;*

*1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.*

*1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.*

*2. **Información que debe suministrar el proveedor:***

*2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;*

*2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.*

*En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el mercado.*

*Parágrafo. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación. (Negritas fuera de texto)*

Siendo acertado precisar que la información mínima contenida en el artículo 23 puede ser ampliada vía reglamentación, según el numeral 5° del artículo 59 del Estatuto del Consumidor, teniendo la Superintendencia de Industria y Comercio la potestad para “Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer la información que deba indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla así como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores”.

En todo caso, no se debe obviar, que el consumidor, tiene un deber de informarse en los términos del numeral 2.2. del artículo 3 del E.C., “Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación

---

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2033>. “Es posible que uno de los puntos más relevantes dentro del proceso contractual de consumo sea el de la información que debe suministrarse o que ha de suministrar el profesional al consumidor, y su importancia radica en que a través de ésta se ha considerado factible ponerle fin a la asimetría existente entre las partes”.

con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación”, pero en todo caso, consideramos que dicho deber se corresponde con la información que sea suministrada por el productor o proveedor, en cumplimiento de la obligación a su cargo, o de aquella a la que pueda acceder fácilmente el consumidor sin que deba ejecutar acciones de investigación excesivas para informarse o que excedan de sus capacidades.

#### 4.2.2. La información y la obsolescencia programada.

Aterrizando al objeto de nuestro estudio, desde nuestra perspectiva, la obsolescencia programada de calidad, o el efecto de la misma, la vida útil predeterminada, se enmarca dentro de lo que el E.C., define como información (numeral 7º del artículo 5º), puesto que la vida útil de un producto es una propiedad, característica o referencia relevante del bien, alusiva al tiempo durante el cual el producto podrá ser usado, y por ende, determinante del periodo en el cual el mismo cumplirá con las condiciones de calidad e idoneidad propias.

Sin embargo, el derecho del consumidor a ser informado resulta inocuo como herramienta de protección frente a los efectos de la obsolescencia, puesto que la obligación a cargo del productor o proveedor de informar se encuentra limitada al catálogo establecido en el artículo 24 del E.C., como información mínima que deben suministrar el productor y proveedor, dentro de dicho catálogo nada se establece respecto de la obsolescencia programada ni la vida útil esperada o mínima de los productos. Debiéndose anotar que fruto de nuestra investigación no se encontró un desarrollo del referido artículo por parte de la S.I.C., en ejercicio de la competencia reglamentaria otorgada por el artículo 59 del E.C.

En similar sentido se desarrollan las conclusiones de Correa al analizar el artículo 24 del E.C., así: “no se esclarece el sentido de la obligación de informar sobre la fecha de vencimiento para bienes no perecederos y menos aún se determina la inclusión de este carácter para los bienes producidos para tener una vida útil limitada de modo artificial”<sup>334</sup>.

Si bien es cierto, el artículo 24 del E.C. es claro frente a los componentes de la información mínima, proponemos que fruto de una interpretación sistemática y teleológica del Estatuto se entienda que la vida útil hace parte de la información mínima que debe ser suministrada por el productor o proveedor por dos razones.

La primera, haciendo uso del principio de interpretación normativa *pro consumatore* o favorable al consumidor que informa a todas las disposiciones del E.C., dispuesto en el inciso 3º del artículo 4º de la ley, se concluye que el vacío normativo frente a la vida útil es colmado con el reconocimiento de esta como una propiedad, característica o referencia relevante del bien que debe ser informada al consumidor, pues de lo contrario, la información suministrada por el productor y recibida por el consumidor no sería *completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, precisa e idónea*, ya que no se le estaría comunicando al consumidor el tiempo durante el cual podría servirse del bien<sup>335</sup>.

---

<sup>334</sup> CORREA, Op. Cit., p. 70.

<sup>335</sup> En este mismo sentido se manifiesta Correa, al decir que “Solo una interpretación garantista basada en el principio del in dubio pro consumatore puede abrir de manera definitiva la argumentación para sostener que con la obsolescencia programada objetiva no notificada se vulnera el derecho fundamental a la información del consumidor potencial y efectivo”. CORREA, Op. Cit. p. 70-71.

La segunda, relativa a que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del E.C., los consumidores tienen a su favor la garantía de acceder “a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas”, lo que a su vez es un principio del E.C., de tal forma que si no se le informa al consumidor la vida útil del bien, este no podrá tomar una decisión de consumo completamente fundamentada y razonable.

Similar interpretación es propuesta por Pinochet, respecto de la ley chilena N° 19.496 de Protección a los Derechos de los Consumidores<sup>336</sup>, en la cual tampoco se establece explícitamente la vida útil como elemento del deber de información a cargo de los proveedores, quien concluye que para que la información suministrada al consumidor pueda ser considerada como “veraz y oportuna” en los términos de la ley debe contener lo relativo a la vida útil de los productos:

*En efecto, la información que el proveedor tiene y no entrega, como lo es la vida útil del producto, perfectamente conocida por él, permitirá que la información parcial entregada pueda ser calificada de veraz, ya sabemos que no es completa, pero por omisión culpable no podrá entenderse también que la información entregada, aunque cierta, por incompleta, pueda estimarse también como no veraz<sup>337</sup>.*

Si bien la interpretación que proponemos puede ser fácilmente rebatida debido al carácter unívoco del artículo 23 del E.C., esta es la única alternativa posible, si se quiere proteger a los consumidores de la obsolescencia programada de calidad a la luz de la normativa actual, reconociendo que la solución idónea sería que, vía reglamentación o ley, se incluya la vida útil de los productos como un componente de la información mínima.

Frente a la importancia y relevancia, e incluso, necesidad de incluir la obsolescencia programada como un componente dentro de la información suministrada al consumidor, se encuentran múltiples voces a favor en la doctrina que ha analizado la relación existente entre la obsolescencia y el derecho, algunas de las cuales relacionaremos a continuación.

Soto manifiesta que, es una obligación de los productores informar la duración de los productos con el fin de dotar a los consumidores de la información necesaria para tomar una decisión de consumo informada, teniendo en cuenta las condiciones de la industria y la situación de indefensión de los consumidores frente a los productores. En palabras propias del autor:

*En ese sentido, no hay riesgo al afirmar que la duración y expiración de los productos configuran elementos esenciales del sistema al completo. Al margen de la naturaleza perecedera o no perecedera de los productos, es una obligación transmitir siempre a los consumidores, dicha información, toda vez que constituye un instrumento de*

---

<sup>336</sup> La información es definida como un deber y un derecho por esta ley, en su artículo 3°, de la siguiente forma: “(...) Son derechos y deberes básicos del consumidor: (...) b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos”. CHILE. CONGRESO NACIONAL. Ley 19496 de 1997. (7, febrero, 1997). Establece normas sobre protección de los derechos de los Consumidores. Consultado el 10 de julio de 2018. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=243235](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=243235)

<sup>337</sup> PINOCHET, Ruperto. Obsolescencia programada y protección del derecho a la información en la Ley N° 19.496 de Protección de los Consumidores. En: VIDAL, Álvaro; SEVERÍN, Gonzalo & MEJÍAS, Claudia (Editores), Estudios de Derecho Civil X, Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Valparaíso: Editorial Thomson Reuters La Ley, 2014. P. 406.



*estabilización de la relación que estos tienen con las empresas. Razón por la cual, de acuerdo a dicha realidad, resulta posible preguntarse si una conducta como la obsolescencia planificada –debidamente trasladada a un producto– también debería transmitirse al consumidor en el momento de perfeccionamiento del contrato, o si por el contrario, tal y como sucede en la actualidad, está justificado «custodiar» dicha información en sede empresarial.*

*La respuesta a aquel cuestionamiento parece clara a pesar de que es susceptible de generar dudas de múltiples índoles, ya que **la información de obsolescencia puede resultar esencial para la toma de decisión por parte del consumidor y no debería ser diferenciada de otra información vinculada con productos visiblemente perecederos que tradicionalmente comportan dicha obligación.** Así, puede interpretarse que, a día de hoy, fortalecer la transmisión de información para trasladar a los consumidores la conducta de obsolescencia, es más que lógico, no solo porque un amplio catálogo de productos que aparejan un alto nivel de innovación requieren un volumen de información incluso superior al que requieren la mayor parte de productos –o al que han venido requiriendo los productos hasta el momento–, sino también por el amplio y creciente desconocimiento de los consumidores acerca de las condiciones y características de los productos que adquieren, dada su complejidad<sup>338</sup>. (Negritas fuera de texto)*

Correa considera que del estudio sistemático de las normas del E.C. emana el deber de los productores de informar de la obsolescencia programada, como un atributo de los productos, en los siguientes términos:

*Con base en tales preceptos, en el derecho colombiano, **de los ingredientes que cualifican la información por suministrar sobre los bienes puestos a disposición de los consumidores en el mercado, podría también inferirse el deber del productor de advertir sobre la obsolescencia programada de aquellos por dos razones, una, por ser parte de sus atributos caracterizadores, al resultar determinante para que la información suministrada al consumidor sea adecuada y suficiente. Y dos, porque la falta de información sobre la obsolescencia programada de los bienes permite a las empresas crear un marco de conducta particular en perjuicio del consumidor<sup>339</sup>.*** (Negritas fuera de texto)

De igual manera, Echeverri y Ospina<sup>340</sup>, exponen que aparejado al deber a cargo de los proveedores y/o productores de brindar la información relativa a la disponibilidad de repuestos y de mano de obra calificada para la reparación de los bienes, se encuentra el deber de informar a los consumidores el tiempo probable de duración de los mismos por ser este un elemento integrante de la decisión racional de compra.

Carrascosa, al analizar la normativa de información contenida en los artículos 18 y 20 del texto refundido de la ley española General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, expone que: “en el Derecho de consumo español existe **el derecho básico a la información correcta sobre las características esenciales del producto, entre las que es posible incluir**

<sup>338</sup> SOTO, Jesús. Reflexiones Acerca de las Posibles Incompatibilidades de la Obsolescencia Programada Con el Sistema de Defensa de los Consumidores. En: Actualidad Civil - Editar La Ley. Junio, 2015. No. 6. págs. 1-18. Consultado el 10 de julio de 2018. Disponible en: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2951097](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951097).

<sup>339</sup> CORREA, Op. Cit., p. 69.

<sup>340</sup> ECHEVERRI & OSPINA. Op. Cit., p. 156.

la **duración de un bien**, por ello, la no inclusión de información en este aspecto podría conllevar la aplicación de la figura de la omisión engañosa ” <sup>341</sup>(Negritas fuera de texto).

Concluye la precitada autora que, “**cabría un ataque a la obsolescencia programada haciendo valer el derecho a la información de las características esenciales del producto**. Ahora bien, **debido a la no mención específica de la durada entre ellas, el éxito de una eventual acción dependería del juicio del tribunal** y por lo tanto, las características del caso tomarían extrema relevancia en torno a la sanción del comportamiento del fabricante” <sup>342</sup> (Negritas fuera de texto).

Chacón, expone que en el derecho colombiano “**no hay constancia de una normatividad que concrete qué se entiende por vida útil mínima** de un producto ni establezca una base que los productores deberán cumplir por mandato legal, **laguna que urge llenar para poder tomar medidas más efectivas contra la amenaza obsolescente**”<sup>343</sup> (Negritas fuera de texto).

Pinochet, manifiesta que la existencia de la obsolescencia programada hace parte de la “(...) *información relevante en la decisión de consumo y, en consecuencia, su ocultamiento constituye una infracción en general al Derecho de información presente en todo el Derecho de consumo y, en el caso particular de nuestro país, al deber contenido en el artículo 30, letra b de nuestra ley N° 19.496 de Protección de los Consumidores*”<sup>344</sup>.

Anabalón<sup>345</sup>, considera que la durabilidad del producto es un factor importante que debe ser informado para que el consumidor pueda tomar una decisión libre, informada y racional.

Sánchez, declara que “*el productor, fabricante o importador tendrá el deber de informar, si lo supiera, de la posible obsolescencia programada del bien. Esto, con la doble finalidad de proteger al futuro consumidor y de asegurarle la eficacia en posibles reclamos por parte de estos consumidores contra proveedores-distribuidores (vendedores) en relaciones de consumo*”<sup>346</sup>.

Se observa entonces que a pesar de existir el derecho del consumidor a ser informado sobre las propiedades y características de los productos que adquiere o planea adquirir, y a que dicha información deba ser *completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, precisa e idónea*, en todo caso, se encuentra desprotegido frente a la obsolescencia de calidad, pues, este derecho de información deviene inocuo en atención a que tanto el productor como proveedor solo están obligados a proporcionar una información mínima, en los términos del

---

<sup>341</sup> CARRASCOSA, Ariadna. La obsolescencia programada: Análisis de la posibilidad de su prohibición. Trabajo de fin de grado en Derecho. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2015. P. 31.

<sup>342</sup> Ibíd. p. 39.

<sup>343</sup> CHACÓN. Op. Cit., p. 393.

<sup>344</sup> PINOCHET. Op. Cit., p. 410.

<sup>345</sup> ANABALÓN. Op. Cit. p. 70. Las palabras textuales del autor al respecto son: “Como se puede ver, **la durabilidad del producto es un elemento que el consumidor considera**, en mayor o menor medida, al momento de celebrar el acto de consumo. **Esta circunstancia, al ser relevante para tomar una decisión libre e informada, integra la relación de consumo, y por tanto, debe considerarse como característica relevante del bien que se adquiere**. La duración de los productos es un elemento esencial que debe ser informado a los consumidores, según se desprende del examen de la legislación extranjera que se hizo en el capítulo tercero. El hecho de ocultar esta información puede calificarse como una conducta que altera el comportamiento económico racional de un consumidor promedio, lo cual podría constituir, según las circunstancias, un dolo capaz de viciar el consentimiento” (Negritas fuera de texto).

<sup>346</sup> SÁNCHEZ. Op. Cit., p. 186.

artículo 23 del E.C., y en esta norma ninguna mención se hace frente a las condiciones de funcionamiento temporal del producto.

Del presente capítulo se concluye que en el derecho de protección al consumidor, la garantía se alza como una institución que ofrece una regulación frente a la obsolescencia programada, sin embargo, para que sea una solución eficaz en términos prácticos, se requiere que la inutilidad del bien se produzca estando en vigencia la garantía, cuyo término se encuentra supeditado a lo que establezca el productor. Adicionalmente, el deber de disponer de repuestos y mano de obra para la refacción, que sería un mecanismo de superación de la obsolescencia programada, no se encuentra debidamente determinado, y se le otorga la misma facultad de determinación al productor. Por último, se destaca que no existe una regulación especial sobre la garantía frente a los productos que pueden verse afectados por actualizaciones ulteriores del software, como tampoco existe una regulación expresa sobre el software.

En lo que corresponde al derecho-deber de información, parecería ser la institución del derecho del consumo que mejor puede proteger al consumidor, sin embargo, al estar limitada la información mínima a partir de un catálogo específico, en el que nada se advierte sobre la vida útil de los productos o la existencia de obsolescencia, la misma no otorga ninguna protección para los consumidores.

Por ello, enunciaremos elementos, que desde nuestra consideración deben hacer parte de una regulación que proteja a los consumidores frente a la obsolescencia programada:

- Establecimiento de un término mínimo de garantía de un año para los productos nuevos, salvo que el productor y/o proveedor anuncie un término mayor.
- Establecimiento de la vida útil de los productos nuevos como un componente de la información mínima.
- Establecer que el productor deberá contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada por un tiempo mayor al de la vida útil informada del producto.
- Establecer reglas especiales de garantía y de información respecto de las actualizaciones de software.

En atención a que se ha analizado el fenómeno de la obsolescencia programada de calidad desde diversas instituciones del derecho privado, ahora nos corresponderá analizar este fenómeno a la luz de la Constitución Política de 1991.

## 5. Análisis Constitucional.

En atención al carácter preponderante de la Constitución Política de 1991<sup>347</sup> como la norma central y superior de nuestro ordenamiento jurídico, consideramos conveniente analizar las implicaciones que tienen las disposiciones constitucionales respecto de la obsolescencia programada de calidad.

Para dicho análisis, hemos decidido centrarnos en dos ópticas, la primera, relativa a la protección del consumidor (5.1.) con énfasis en las normas del consumo analizadas, y la segunda, desde la protección constitucional al medio ambiente (5.2.).

### 5.1. La protección constitucional al consumidor.

La Carta Política de 1991, estableció la protección de los consumidores en el artículo 78:

***ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. (...) (Negritas fuera de texto)***

Este artículo es el fundamento de las normas de protección al consumidor analizadas previamente, y nuestro análisis en el presente capítulo se centrará en la relación existente entre la normativa de orden legal con la disposición constitucional, específicamente, en lo que tiene que ver con la información mínima legal y la garantía frente a la obsolescencia programada, para ello iniciaremos dilucidando la naturaleza del artículo 78 supremo.

En principio podría concluirse que el artículo 78 otorga una plena libertad de configuración legislativa, sin embargo, el alcance real de esta norma fue establecido por la jurisprudencia constitucional en la Sentencia C-1141 del 2000<sup>348</sup>.

En la referida providencia se demandaba la inexequibilidad de los artículos 11 y 29 de la anterior normatividad de protección al consumidor, Decreto 3466 de 1982, en los cuales se establecía que la acción jurisdiccional de exigibilidad de la garantía únicamente podía intentarse contra el proveedor o expendedor. Los demandantes sostenían que al no incluirse al productor como sujeto pasivo de dicha acción se estaba ante una situación de desprotección al consumidor.

Frente a esto, la Corte declaró la exequibilidad de las normas demandadas bajo el entendido de que “el consumidor o usuario también puede exigir de manera directa del productor el cumplimiento de las garantías de calidad y el pago de los perjuicios por concepto de los daños derivados de los productos y servicios defectuosos”<sup>349</sup>.

---

<sup>347</sup> COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá D.C., 1991, No. 116.

<sup>348</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141 del 30 de agosto de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Consultado el 22 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-1141-00.htm>

<sup>349</sup> Ibid.

Frente a la competencia otorgada al legislador, manifestó el juez constitucional, que la misma debe ser ejercida de acuerdo con la finalidad de la norma, proteger al consumidor, en los siguientes términos:

*Cuando la Constitución encomienda al legislador el desarrollo de un cierto régimen de protección, no está simplemente habilitando una competencia específica para dictar cualquier tipo de normas. Lo que el Constituyente se propone que la finalidad de la protección efectivamente se intente actualizar y se imponga en la realidad política y social - por lo menos en un grado razonable y en la medida de las posibilidades y recursos existentes -, articulando de la manera más armoniosa y eficaz dentro de las políticas públicas las justas demandas de los sujetos merecedores de dicha protección especial<sup>350</sup>. (Negritas fuera de texto)*

De seguido se enunció que al examinarse la constitucionalidad de las normas legales de protección al consumidor frente al artículo 78 superior, el juez constitucional tiene el deber de verificar que la ley sea congruente con la finalidad de protección constitucional, y que en caso de que no se cumpla con dicha protección, la norma demandada deberá ser declarada inexecutable:

*Por consiguiente, el control de constitucionalidad de este sector del ordenamiento no se reduce a la mera verificación de los requisitos de competencia del órgano regulador. Compete a la Corte comprobar el cabal cumplimiento del deber del órgano responsable de conformar un sistema que sea congruente con el propósito específico que justifica la protección constitucional. Si en lugar de dispensar la protección que ha de concederse a un grupo social, la ley no lo hace o si deja ella injustificadamente de reparar en la situación objetiva de debilidad o desigualdad que impone el tratamiento, no puede la Corte abstenerse de apreciar aquí suficientes motivos para declarar la inexecutable, pues no se habrá cumplido el encargo de dar seguridad a una categoría de personas que constitucionalmente la requieren reordenando sus cargas o mitigando realmente su debilidad, así sea, atendidas las circunstancias y los otros intereses, en una medida mínima y razonable. En otras palabras, la deferencia de la Corte con el principio de libertad configurativa respecto de los regímenes de protección especial, se subordina al cumplimiento razonable del programa de defensa instituido por la propia Constitución y cuyo desarrollo se confía al órgano democrático<sup>351</sup>. (Negritas fuera de texto)*

Por último, se concluye, frente a la protección constitucional del consumidor, que “no puede entonces en modo alguno ignorarse la posición real del consumidor y del usuario, puesto que justamente su debilidad en el mercado ha sido la circunstancia tenida por el constituyente para ordenar su protección”<sup>352</sup>.

Siendo claro el alcance del artículo 78 superior, sostenemos que al haberse omitido la inclusión de un componente de información mínima relativo a la obsolescencia programada o a la vida útil mínima de los productos, el legislador incumplió con la competencia-deber a su cargo, por cuatro razones.

---

<sup>350</sup> Ibid.

<sup>351</sup> Ibid.

<sup>352</sup> Ibid.

La primera, los consumidores son sujetos de especial protección debido a su posición de inferioridad frente a los productores y proveedores, especialmente en cuanto al acceso a la información, por lo tanto, el legislador tiene el deber de establecer normas para corregir dicha situación.

La segunda, el legislador debió reconocer el fenómeno de la obsolescencia programada como un fenómeno de la realidad económica y social del país que ha existido por aproximadamente un siglo dentro de los sistemas económicos capitalistas, especialmente, teniendo en cuenta que el E.C. vigente fue promulgado a inicios del segundo decenio del siglo XXI.

La tercera, el legislador debió reconocer que el fenómeno de la obsolescencia programada de calidad afecta al consumidor en tanto que la vida útil de los bienes se encuentra delimitada por la voluntad del productor, con el fin de aumentar la tasa de reemplazo de los bienes, sin que esta situación sea informada a los consumidores sino que los mismos deben llegar al conocimiento de esto vía experiencia al sufrir los efectos de la obsolescencia.

Por último, como corolario de lo anterior, el legislador debió haber establecido un componente dentro de la información mínima que protegiera al consumidor frente al fenómeno de la obsolescencia programada, vía la puesta en conocimiento obligatoria de la existencia de un mecanismo de obsolescencia programada en los bienes, o en todo caso, y en forma más entendible para los consumidores, el establecimiento de la vida útil mínima como un componente de información mínima.

Dicha omisión legislativa se traduce, en nuestra opinión, en que la disposición contenida en el artículo 24 del E.C. es condicionalmente exequible, bajo el entendido de que el productor debe informar la vida útil de los productos, esto con el fin de que los consumidores cuenten con toda la información necesaria a la hora de tomar sus decisiones de consumo.

El análisis que hemos hecho frente a la información mínima fue realizado por Gutiérrez respecto de las normas de garantía del E.C. como un mecanismo de protección contra la obsolescencia programada, en los siguientes términos:

***La obsolescencia programada es, según nuestra manera de ver, un problema de calidad que podría ser resuelto mediante la ampliación de las garantías legales que prevé en la actualidad el ordenamiento colombiano. Al analizar la normativa correspondiente, es evidente que el modelo que ha sido dispuesto por el legislador resulta insuficiente para la solución de los defectos que se derivan de nuestro fenómeno debido a los exiguos términos que se ofrecen: según el artículo 8 del estatuto del consumidor, el término de la garantía será el fijado por la ley (se esperaba que fuese el propio estatuto el que lo fijara, sin embargo, el legislador decidió posponer la definición de este asunto). En definitiva, en ausencia de definición legal, el término de la garantía será el que indique el productor y/o proveedor. Si este no ha sido establecido por ellos, dispone el estatuto, el término será de apenas un año.***

*A nuestro juicio, la decisión de dejar la definición de este asunto en manos de la parte fuerte del contrato desconoce de manera abierta la Constitución, pues deja inerme al consumidor frente a la libertad del productor o proveedor. (...)*

*De tal suerte, las medidas dispuestas por el legislador sobre la garantía mínima legal, que podrían ser utilizadas para combatir la obsolescencia programada, no solo resultan insuficientes para tal fin, sino también inconstitucionales. En tal sentido, la Corte bien podría intervenir para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 8 que dispone que el término de la garantía será el fijado por el productor o por el proveedor. Mediante un fallo de inexequibilidad similar al emitido en el proceso promovido en contra de los artículos 11 y 29 del Decreto 3466 de 1982, la Corte podría modificar la redacción de la norma para que, en aras de garantizar los derechos del consumidor, la garantía mínima legal ascendiera en todos los casos a un mínimo de un año. De este modo, quedarían sin efectos las determinaciones de fabricantes o proveedores dirigidas a ofrecer una garantía de menor duración. De modo adicional, el tribunal podría declarar la constitucionalidad condicionada del resto de la disposición en el sentido en que “las autoridades competentes podrán hacer exigibles las garantías de esta ley y las indemnizaciones correspondientes cuando, vencido el término de un año, se logre comprobar que el deterioro del producto no es consecuencia del uso normal, sino de la decisión deliberada del fabricante para acortar su vida útil”<sup>353</sup>. (Negritas fuera de texto)*

Lo expuesto por el citado autor puede resumirse en que la solución a la obsolescencia programada en materia de protección al consumidor se encuentra en las normas de garantía, sin embargo, las disposiciones vigentes son inocuas en términos prácticos, y por tanto inexecutable, debido a que dejan en manos de la parte dominante de la relación de consumo el establecimiento del término de garantía. En razón a ello, propone la exequibilidad condicionada de dichas normas, bajo el entendido de que el término mínimo sea en todo caso de un año, adicionalmente, considera que cuando haya expirado dicho término y se logre comprobar que un bien se deteriora por la voluntad del fabricante de predeterminar la vida útil, el mismo deberá responder por la garantía del producto.

Lo hasta aquí reseñado demuestra que la protección otorgada a los consumidores por la Constitución Política de 1991 tiene efectos frente a la obsolescencia programada, por cuanto las máximas constitucionales disponen que el régimen legal en materia de consumo debe suponer una regulación verdaderamente protectora y ajustada a la realidad, conforme con los intereses de los consumidores.

Dada la regulación actual, la normativa constitucional genera la exequibilidad condicionada de las normas de garantía y de información del E.C., bajo el entendido de que:

- Exista un término mínimo de la garantía que no pueda ser reducido por el productor o proveedor.
- Que la garantía opere aun vencido ese término si el defecto proviene de la obsolescencia programada.
- Que la vida útil de los productos haga parte de la información mínima a cargo del productor.

---

<sup>353</sup> GUTIÉRREZ, Andrés. Una mirada constitucional a la obsolescencia programada. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. Págs. 38-39

Sin perjuicio de lo anterior y haciendo eco de la opinión de Gutiérrez<sup>354</sup>, creemos que la omisión legislativa frente a la inclusión de mecanismos que protejan a los consumidores de la obsolescencia programada no debería ser solucionada por el legislador negativo mediante una sentencia de exequibilidad condicionada. Sino que una verdadera solución debe ser establecida por el legislador positivo, habida cuenta que este tiene una mayor libertad de configuración y que puede incluir muchas más herramientas de protección diferentes a la información mínima y a la garantía.

Existiendo claridad respecto a cómo la protección constitucional del consumidor irradia la legislación existente respecto de la obsolescencia programada, nos corresponde analizar esto mismo respecto de las normas constitucionales de protección del medio ambiente.

## 5.2. La protección constitucional al medio ambiente.

La obsolescencia programada de calidad busca aumentar la tasa de reemplazo de los bienes mediante la reducción de su vida útil, lo cual además de los efectos de mercado, tiene otro efecto relevante, los desechos generados cuando los bienes cumplen con su vida útil.

En nuestro concepto, la generación de desechos a raíz de la obsolescencia programada de calidad tiene relevancia frente a la Constitución, especialmente, respecto de la denominada “constitución ecológica”, por ello, en el presente acápite procederemos a explicar los efectos ambientales de la obsolescencia programada para de seguido discurrir sobre la protección ambiental contenida en la constitución de 1991 y su relación con la obsolescencia.

### 5.2.1. Efectos ambientales de la obsolescencia programada.

Los efectos de la obsolescencia programada frente al medio ambiente son condensados por Gutiérrez, así “(...) la obsolescencia programada trae como secuela una elevada producción de residuos y una explotación desmedida de los recursos naturales, esta práctica afecta también el derecho a un medio ambiente sano”<sup>355-356</sup>.

El ciclo de afectación ambiental generado por la obsolescencia programada de calidad, según Correa, es el siguiente: “Al acelerar la producción se reduce la disponibilidad de minerales no renovables y al mismo tiempo se incrementa el consumo de energía. De igual modo, la contaminación a que se ha aludido no solo produce daños sobre las personas sino en general

---

<sup>354</sup> Ibid. p. 39. “Juzgamos necesario reiterar que esta solución dista de ser la óptima. La solución más satisfactoria sería, en cualquier caso, la intervención activa del legislador, para que fuese él quien determinara todos los extremos normativos de la responsabilidad que nace –o que debería hacerse exigible– de la obsolescencia programada. Sin embargo, dado el escaso interés que ha demostrado hasta ahora en la regulación de este fenómeno, se hace necesario recurrir a este tipo de propuestas, que bien pueden contribuir al debate académico y a despertar la disposición del legislador a ocuparse de estos asuntos”.

<sup>355</sup> Ibid. p. 33.

<sup>356</sup> En similar sentido: ECHEVERRI & OSPINA. Op. Cit., p. 159. “(...) la obsolescencia es perjudicial para el medio ambiente en una doble vía. En primer lugar, se genera un detrimento de los recursos naturales que son extraídos para fabricar los productos ofrecidos a las masas de los consumidores. De otro lado, la disposición de aquellos bienes cuya ‘vida útil’ ya ha terminado genera un alto grado de contaminación debido a que, no en pocas ocasiones, esta no es amigable con el medio ambiente. Lo anterior se ve agravado por el hecho de que no es común que los consumidores conozcan cual es el procedimiento apto para deshacerse de muchos de los productos que desechan”.



sobre los sistemas vivos, ya que la producción de dioxina y otros contaminantes genera daños en la composición de la atmosfera”<sup>357</sup>.

Dentro de los residuos generados a causa de la obsolescencia programada, son relevantes aquellos denominados como *ewaste*, en referencia a “todos los aparatos eléctricos y sus componentes, que han sido desechados por sus dueños como basura sin la intención de reutilizarlos”<sup>358</sup>, respecto de este tipo de desechos se ha desarrollado un estudio a nivel mundial liderado por organismos vinculados a las Naciones Unidas<sup>359</sup>, el cual arrojó las siguientes estadísticas:

- Durante el año 2016, en todo el mundo se generaron 44,7 millones de toneladas métricas de *ewaste*, equivalente a 6,1 kilogramo de *ewaste* por habitante, comparado a los 5,8 kilogramos por habitante generados en el año 2014<sup>360</sup>.
- Se espera que para el año 2021 se generen 52,2 millones de toneladas métricas de *ewaste*, equivalentes a 6,8 kilogramos por habitante<sup>361</sup>.
- Únicamente el 20% del total de *ewaste* producido a nivel mundial fueron sometidos a procesos de recolección y reciclaje adecuados<sup>362</sup>.
- En Colombia durante el año 2016 fueron producidas 275.000 toneladas de *ewaste*, equivalentes a 5,6 kilogramos por habitante<sup>363</sup>.

Son relevantes estas estadísticas al tener en cuenta que un producto electrónico que deja de servir y se convierte en desecho, generalmente se encuentra compuesto por los siguientes elementos: plástico, vidrio, ácidos, plomo, mercurio, oro, plata, arsénico, bromo, berilio, aluminio, cromo, cobre, cadmio, litio, selenio, níquel, titanio y zinc entre otros<sup>364-365</sup>, los cuales resultan altamente tóxicos para el medioambiente, las plantas, animales y seres humanos.

También es preocupante, el hecho de que países del tercer mundo como Ghana, son utilizados como vertederos de los productos electrónicos del primer mundo, debido a que resulta mucho

---

<sup>357</sup> CORREA, Magdalena. La obsolescencia programada: tensión constitucional y abuso del derecho. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 65.

<sup>358</sup> BALDÉ, Cornelis. Et al. The Global E-waste Monitor 2017: Quantities, Flows, and Resources. Viena: International Telecommunications Union United Nations University Vice Rectorate in Europe & International Solid Waste Association, 2017. P. 11. Consultado el 20 de julio de 2018. Disponible en <https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf>. Traducción libre de: “Electronic waste, or e-waste, refers to all items of electrical and electronic equipment (EEE) and its parts that have been discarded by its owner as waste without the intent of re-use”.

<sup>359</sup> Ibid. Respaldo portada. “Acknowledgments: The Global E-waste Monitor 2017 is a collaborative effort of the United Nations University (UNU), represented through its Vice-Rectorate in Europe hosted Sustainable Cycles (SCYCLE) Programme, the International Telecommunication Union (ITU), and the International Solid Waste Association (ISWA).

<sup>360</sup> Ibid. p 4.

<sup>361</sup> Ibid. p 4.

<sup>362</sup> Ibidem.

<sup>363</sup> Ibid. p. 103.

<sup>364</sup> VEGA, Omar. Efectos colaterales de la obsolescencia tecnológica. En: Revista Facultad de Ingeniería - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Enero-Junio de 2012. Vol. 21, No. 32. p. 57. Consultado el 10 de julio de 2018. Disponible en: <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1434>. Figura 1. Composición porcentual aproximada de los residuos electrónicos.

<sup>365</sup> FERNÁNDEZ, Laura. La obsolescencia programada: Sus consecuencias en el ambiente y la importancia del consumo responsable. En: Terra Mundos, Buenos aires, 2014. Vol. 1. No. 1. Págs. 4 a 6. Consultado el 20 de julio de 2018. Disponible en: [http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2867/Obsolescencia\\_Fernandez-Rev.pdf?sequence=1](http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2867/Obsolescencia_Fernandez-Rev.pdf?sequence=1).

más barato botar los productos electrónicos, que reutilizarlos y darles un manejo adecuado a sus componentes<sup>366-367</sup>.

Por último, en lo que respecta al *ewaste*, se destaca un estudio realizado en Alemania por la Universidad de Bonn y el Instituto Oeko, en el cual se investigó la vida útil de productos tales como: electrodomésticos de gran tamaño (neveras, lavavajillas, lavadoras, etc.), electrodomésticos de pequeño tamaño (tostadoras, sanducheras, hornos microondas, etc.), productos de electrónica de consumo y productos de electrónica de comunicación, donde se concluyó que para la mayoría de productos, dentro de los primeros 5 años de uso, se había aumentado la tasa de reemplazo por defectos técnicos de un 3,5% a un 8,3%, al comparar datos de los años 2004 y 2012<sup>368</sup>.

Adicionalmente, a la contaminación generada por los productos cuya vida útil ha caducado, la obsolescencia programada de calidad genera contaminación con la producción y fabricación de bienes, al respecto refiere Robayo:

*Para satisfacer el actual consumo desahogado de productos eléctricos y electrónicos, producto muchas veces de una demanda creada de modo artificial por la reducción voluntaria de la vida útil de estos productos, es necesaria la excavación de grandes extensiones de tierra, la deforestación y eliminación de la naturaleza, y la destrucción de tierras fértiles, con el fin de explotar los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo terrestre. Tres grandes consecuencias se derivan de estas prácticas extractivas salvajes: (...) extinción de recursos naturales no renovables como los minerales y los metales; (...) deforestación y extinción de la biodiversidad (...) contaminación que se genera con ocasión de la explotación de recursos minerales, cuyos procesos precisan de sustancias altamente contaminantes como el cianuro, el arsénico y el mercurio (...)*<sup>369</sup>.

Adicionalmente, el aumento del consumo de bienes manufacturados, debido a su vida útil reducida, ha generado un aumento significativo en la depredación de los recursos naturales, según expone un dictamen del Comité Económico y Social Europeo<sup>370</sup> con estadísticas vigentes hasta el año 2013:

<sup>366</sup> Esta situación es ampliamente descrita entre los minutos 58:00 a 1:05:25 del documental producido por Cosima Dannoritzer para la RTVE: Comprar, Tirar, Comprar: La Historia Secreta de la Obsolescencia Programada.

<sup>367</sup> ADADEVOH, David; PALITZA Kristi. Vivir entre basura. 2015. Citado por ROBAYO, Wilfredo. Las empresas globales y la obsolescencia programada. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 375. “Agbogbloshie, un suburbio de Accra, la capital de Ghana. En el país aterrizan todos los años unos cinco millones de aparatos electrónicos usados, procedentes sobre todo de Europa, Estados Unidos y China, informó el Ministerio de Medio Ambiente de Ghana (...). Los que están rotos –en torno a un tercio del total– acaban en Agbogbloshie (...), La chatarra llega como donación o declarada como producto usado para su reventa en el país. Pero desde el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos critican que muchos comerciantes declaran los aparatos rotos como usados para evitar los elevados costes del reciclaje en sus países de origen. Los ghaneses más pobres seguirán buscando metal entre la basura. Por cada 100 kilos reciben unos 24 dólares”.

<sup>368</sup> PRAKASH, Siddhart et al. Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen “Obsoleszenz”. Bonn-Freiburg: Öko-Institut e.V. & Universität Bonn. p. 24. Consultado el 20 de julio de 2018. Disponible en: [https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte\\_11\\_2016\\_einfluss\\_der\\_nutzungsdauer\\_von\\_produkten\\_obsoleszenz.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf). “In 2012/2013 lag der Anteil der Geräte, die aufgrund eines Wunsches nach einem besseren Gerät ausgetauscht wurden, obwohl das alte Gerät noch funktioniert hat, bei 30,5% der Gesamtersatzkäufe. Kritisch zu sehen ist, dass zwischen 2004 und 2012 der Anteil der Haushaltsgroßgeräte, die innerhalb von weniger als 5 Jahren aufgrund eines Defektes ausgetauscht wurden, von 3,5% auf 8,3% der Gesamtersatz- käufe stieg”.

<sup>369</sup> ROBAYO, Op. Cit., p. 372.

<sup>370</sup> UNIÓN EUROPEA. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. Dictamen “Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza”. Diario Oficial de la Unión Europea.

- A 2013 el consumo anual de materias primas en la Unión Europea era de aproximadamente 60.000 millones de toneladas, lo que equivalía a cerca de un 50 % más de recursos naturales que 30 años atrás<sup>371</sup>.
- De acuerdo con los niveles conocidos desde 1999, se estima que con una tasa de crecimiento anual de producción primaria del 2%, las reservas de cobre, plomo, níquel, plata, estaño y cinc no durarían más de 30 años, y las de aluminio y hierro entre 60 y 80 años<sup>372</sup>.
- La vida útil de los electrodomésticos es de seis a ocho años, mientras que veinte años atrás oscilaba entre diez y doce años<sup>373</sup>.

A partir de lo expuesto se encuentra debidamente probado que la obsolescencia programada de calidad tiene efectos negativos frente al medio ambiente, por un lado, genera un aumento en el consumo de los recursos naturales, y por el otro, causa contaminación cuando los productos sometidos a ellas devienen obsoletos y pasan a ser basura.

#### 5.2.2. La Constitución Ambiental y la obsolescencia programada.

El término Constitución Ecológica hizo carrera a partir de la Sentencia C-126 de 1998, en la cual la Corte Constitucional dispuso que “la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera ‘Constitución Ecológica’, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente”<sup>374</sup>.

En forma más elaborada, se destaca la definición de Gutiérrez, de la Constitución Ecológica como un “conjunto de normas constitucionales que establecen derechos, obligaciones y directrices encaminadas a asegurar la defensa de los ecosistemas naturales y de todos los derechos de las personas que dependen de su protección efectiva”<sup>375</sup>.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente se encuentran varias disposiciones de la Constitución Política de Colombia, que plantean regulaciones o principios frente a los efectos ambientales de la obsolescencia programada. De una parte, se encuentran las disposiciones que protegen los recursos naturales, y de otra, las normas relativas al saneamiento ambiental, las cuales serán analizadas a continuación.

***Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. (Negritas fuera de texto)***

Según Amaya, este artículo se refiere a “la carga que tiene el Estado de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural de la nacionalidad

Bruselas. 2014. C 67. P. 23. Ponente: LIBAERT, Thierry. Coponente: HABER, Jean-Pierre. Consultado el 4 de mayo de 2018. Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE1904>.

<sup>371</sup> Ibíd. Numeral 2.8.

<sup>372</sup> Ibíd.

<sup>373</sup> Ibíd. Numeral 2.11.

<sup>374</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-126 del 01 de abril de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Consultado el 22 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm>

<sup>375</sup> GUTIÉRREZ, Op. Cit. p. 33.

colombiana”<sup>376</sup>, y citando a la Corte Constitucional, manifiesta que “para el cumplimiento del deber de protección de las riquezas naturales de la Nación están establecidas dos vías: por una parte la planificación y fijación de políticas estatales y, por otra, la consagración de acciones judiciales encaminadas a la preservación del ambiente”<sup>377</sup>.

En el mismo sentido se desarrolla el artículo 80 Constitucional.

*Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.*

*Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (...).*

Respecto del desarrollo sostenible, refiere Amaya, que hace referencia a “un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”<sup>378</sup>, y que la importancia del desarrollo sostenible para el modelo socioeconómico y ambiental del país ha conducido a que la Corte Constitucional lo reconozca como un verdadero principio del Derecho Ambiental<sup>379</sup>.

Igualmente, se destaca lo dispuesto en el primer inciso del artículo 334 superior.

***ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. (...). (Negritas fuera de texto)***

De las disposiciones constitucionales citadas se extrae que es una obligación del estado velar por la racionalidad en la explotación de las riquezas naturales y la protección de estas, como pieza fundamental del desarrollo socioeconómico sostenible, las cuales se ven afectadas por el consumo y explotación desmedidos que genera el fenómeno de la obsolescencia programada. De igual manera, concluimos que, el Estado tiene el deber de fijar políticas estatales que regulen la obsolescencia programada con miras en la protección del patrimonio ecológico y la racionalización en su explotación.

En lo correspondiente al saneamiento ambiental, se destacan los artículos 49 y 366 de la Constitución Política.

---

<sup>376</sup> AMAYA, Óscar. La Constitución Ecológica de Colombia. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 158.

<sup>377</sup> Ibid.

<sup>378</sup> Ibid. p. 192.

<sup>379</sup> Ibid. p. 193.

**ARTICULO 49.** *La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.*

*Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.*

*Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. (...)* (Negritas fuera de texto)

**ARTICULO 366.** *El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.*

*Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.* (Negritas fuera de texto)

El saneamiento ambiental, según Amaya, hace referencia a las obligaciones a cargo del Estado “dirigidas a la preservación, conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general”<sup>380</sup>.

En Sentencia C-449 de 2015, la Corte Constitucional definió el saneamiento ambiental como las obligaciones en cabeza del Estado relativas a la “planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Adicionalmente, deberá prevenir y controlar los factores de ‘deterioro ambiental’, imponer sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”<sup>381</sup>.

Frente al saneamiento ambiental, debe expresarse que, si bien tiene una relación cercana con la protección de los recursos naturales, el mismo tiene un componente diferenciador denominado “control ambiental”, entendido como:

*(...) la inspección, la vigilancia y la aplicación de las medidas técnicas y legales necesarias para evitar o disminuir cualquier tipo de afección al ambiente producto de las actividades humanas o desastres naturales, entendiéndose que un impacto se produce por cualquier alteración en el medio biótico, abiótico o socioeconómico, ya sea adversa o beneficiosa, total o parcial, siempre que pueda ser atribuido al desarrollo de una obra, actividad o hecho de la naturaleza*<sup>382</sup>.

<sup>380</sup> *Ibíd.* p. 162.

<sup>381</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-449 del 16 de julio de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Consultado el 24 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-449-15.htm>.

<sup>382</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-227 del 20 de abril de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Consultado el 24 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-227-17.htm>

De lo expuesto se extrae que el Estado tiene el deber de tomar las medidas necesarias para evitar las afectaciones producidas por el fenómeno de la obsolescencia programada al medio ambiente, tanto por la generación de residuos, como por la consideración de que con una producción desaforada se pueden afectar notablemente los recursos naturales de la nación.

En nuestro concepto, dicho deber se sitúa en cabeza del legislador y el ejecutivo, para que el primero establezca medidas de control ambiental frente a los residuos y de explotación responsable de los recursos, y el segundo, coordine e implemente su correcta aplicación.

Por último, es acertado recordar que las regulaciones que se lleguen a plantear frente a la obsolescencia programada en desarrollo de la regulación constitucional, y que puedan llegar a tener efectos adversos frente la actividad económica y la iniciativa privada, son legítimas por cuanto constitucionalmente se establece que la ley puede limitar dichas actividades en atención de la protección del ambiente, según lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución Política:

*ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.*

*(...)*

*La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Negritas fuera de texto)*

Por lo expresado, se evidencia que los efectos ambientales de la obsolescencia programada tienen relevancia constitucional, específicamente, frente a la protección del medio ambiente que ha sido establecida en la Constitución Política de 1991, a razón de que este fenómeno económico genera efectos frente al ambiente, tanto por el acelerado consumo de los recursos naturales como por la gran cantidad de desechos generados cuando los objetos cumplen con su vida útil.

En suma, tenemos que la Constitución Política de 1991 plantea una regulación de principios frente a los efectos que genera la obsolescencia programada, de un lado, por la protección al consumidor, y de otro por la protección al medio ambiente, en todo caso al ser máximas generales, las mismas deben ser desarrolladas por el legislador.

Por todo lo analizado en este escrito, concluimos que en la normativa colombiana no existe una regulación eficaz respecto de la obsolescencia programada, y haciendo eco del derecho comparado y del deber constitucional que corresponde al Estado de prevenir los efectos de la obsolescencia programada, expondremos a continuación un proyecto de regulación de esta figura en Colombia.

## 6. Una propuesta de regulación.

Debido a que no existe una regulación de la obsolescencia programada de calidad en Colombia, y a que la misma, es necesaria en atención a los efectos de la obsolescencia programada de calidad, proponemos la elaboración de una regulación integral de la figura, en la cual se incluyan los siguientes elementos:

- Definición conceptual de la obsolescencia programada de calidad.
- Incluir dentro de la información mínima a cargo de los productores y proveedores, la vida útil estimada de los bienes.
- Establecimiento de sanciones severas al incumplimiento del deber de informar la vida útil, tales como la inhabilidad para ejercer el comercio.
- Establecimiento de un término mínimo de la garantía en el derecho del consumo.
- Establecer normas especiales de garantía respecto del software o soporte lógico.
- Establecimiento de un término mínimo del deber de disponer de repuestos y mano de obra para la reparación de los bienes en función de la vida útil anunciada del producto.
- Establecimiento de políticas de manejo de residuos especiales a cargo de los productores y proveedores de bienes electrónicos.
- Replicar las políticas de protección del consumidor en materia de las adquisiciones y compras públicas, y establecer políticas propias acordes al régimen de contratación estatal.
- Establecimiento de términos especiales de prescripción para las acciones emanadas de los vicios redhibitorios cuando el vicio alegado sea constitutivo de obsolescencia programada.

Estos elementos se materializarían en el ordenamiento jurídico nacional mediante la creación de una normativa completamente nueva y la introducción de modificaciones al ordenamiento vigente, especialmente a muchas de las normas analizadas en esta monografía.

Teniendo como fundamento la experiencia en el derecho comparado, la falta de instituciones que supongan una solución práctica frente a la obsolescencia, los efectos nocivos de la obsolescencia programada y el deber constitucional que existe de evitarlos, proponemos la siguiente construcción normativa para regular la obsolescencia programada en Colombia:

**PROYECTO DE LEY POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA, SE INTRODUCEN MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL, AL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.**

**ARTÍCULO 1º. OBJETO.** Las normas de esta ley regulan la obsolescencia programada a partir de la protección de los bienes jurídicos que son afectados por esta, específicamente, los consumidores, el medio ambiente y el erario, a causa del efecto principal de la obsolescencia programada, la vida útil predeterminada de los bienes manufacturados que genera una alta tasa de reemplazo de los mismos.

**ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

2.1. Obsolescencia programada: Las técnicas usadas por un fabricante de bienes, para determinar deliberadamente la vida útil de los productos que comercializa con el fin de aumentar su tasa de reemplazo.

2.2. Obsolescencia programada informática: La implementación de una actualización de software o de componente lógico respecto de un bien electrónico que afecta su funcionalidad en forma negativa con el fin de aumentar su tasa de reemplazo.

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 8° de la ley 1480 de 2011, el cual quedará así:

*Artículo 8°. Término de la garantía legal. **El término de la garantía legal será de dos (2) años. Podrá ser mayor si así lo anuncia el productor y/o proveedor. El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.***

***En ningún caso el término de garantía legal podrá ser menor a dos años, salvo en lo que se dispondrá a continuación.***

*Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o expiración.*

*Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses.*

*La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el servicio tiene garantía de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio.*

*Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.*

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el numeral 7 del artículo 11 de la ley 1480 de 2011, el cual quedará así:

*Artículo 11. Aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:*

***7. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía, por un término equivalente a una y media veces de la vida útil anunciada del producto. El productor y/o proveedor podrá establecer un término mayor. Los costos a los que se refiere este numeral serán asumidos por el consumidor, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1 del presente artículo.***

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el artículo 24 de la ley 1480 de 2011, el cual quedará así:

*ARTÍCULO 24. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. La información mínima comprenderá:*

*1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe suministrar la siguiente información:*

*1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio;*

*1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;*

*1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.*

*1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.*

***1.5. El período de vida útil para el cual ha sido concebido, diseñado y fabricado el producto, mediando un uso normal, responsable y adecuado del mismo.***



**1.6. La determinación de si el producto se encuentra o no sometido a obsolescencia programada.**

**1.7. Describir las fallas probables en el funcionamiento del equipo o en su diseño que lo torne parcial o totalmente inhábil para el fin con el cual fue desarrollado, dando detalles de fechas o períodos de tiempo dentro de los cuales se espera o especula que el producto comience a presentar alguna falla determinada, describiéndola los más claramente posible.**

**1.8. Anunciar el periodo de tiempo durante el cual se contará con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, para la refacción del bien.**

**2. Información que debe suministrar el proveedor:**

**2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;**

**2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.**

**En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7. y 1.8. de este artículo, el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el mercado.**

**PARÁGRAFO 1º. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación.**

**PARÁGRAFO 2º. El productor o el proveedor que no cumpla con lo dispuesto en este artículo podrá ser sancionado con multa y declarado inhábil para ejercer el comercio mediante un proceso administrativo sancionatorio ajustado a lo dispuesto en el Título VIII de la presente ley.**

**ARTÍCULO 5º. INFORMACIÓN EN EL EMPAQUETADO DE LOS PRODUCTOS.** La información establecida en los numerales 1.5. y 1.6. del artículo anterior deberá ser anunciada en una parte visible del empaquetado del producto. Los productos en cuyo empaquetado no se encuentre esta información no podrán ser comercializados al público.

**PARÁGRAFO.** Esta disposición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación de la presente ley.

**ARTÍCULO 6º. FACULTAD INVESTIGATIVA FRENTE A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA.** La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá a su cargo la facultad de iniciar investigaciones administrativas para determinar si un producto se encuentra sometido a obsolescencia programada cuando esta condición no haya sido informada al consumidor.

**ARTÍCULO 7º. FACULTAD SANCIONATORIA.** La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer tanto al productor como al proveedor, que pongan en circulación un bien sometido a obsolescencia programada, sin anunciar esta condición, las sanciones establecidas en el artículo 61 de la ley 1480 del 2011, y las siguientes:

**7.1. Inhabilidad para ejercer el comercio hasta por un término de 20 años.**

**7.2. Multas hasta de 5 veces el valor de las ventas netas del producto cuya condición obsolescente no fue anunciada.**

**PARÁGRAFO 1º.** Las facultades establecidas en los artículos 6º y 7º de la presente ley serán ejercidas conforme con lo dispuesto en la ley 1480 de 2011.

**PARÁGRAFO 2º.** La Superintendencia de Sociedades tendrá la facultad para investigar y sancionar cualquier evento de interposición societaria con el fin de hacer fraude a la inhabilidad para ejercer el comercio dispuesta como sanción.

**ARTÍCULO 8. PROTECCIÓN FRENTE A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA INFORMÁTICA.** Los productores y/o proveedores que realicen actualizaciones de software o soporte lógico a los productos por ellos comercializados, deberán anunciar al consumidor los efectos que tengan las mismas en el rendimiento del bien.

En caso de que con la actualización se generen efectos negativos en el rendimiento, la misma deberá ser sometida a la aceptación expresa del consumidor previa su realización, mediante doble clic de confirmación.

Deberá permitirse e informarse a los consumidores la forma en que pueden hacer la reversión de la actualización que genera efectos negativos en el rendimiento.

**PARÁGRAFO 1º.** Cuando se omita informar o se informe erróneamente los efectos negativos generados por un software al rendimiento de un producto, los productores y/o proveedores podrán ser sancionados conforme con lo dispuesto en el artículo 7º y 8º de la presente ley. Lo mismo se predicará cuando no se le posibilite al consumidor hacer la reversión de la actualización.

**ARTÍCULO 9. ACCIÓN JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA.** Los consumidores que adquieran productos sometidos a obsolescencia programada de calidad u obsolescencia programada informática y no les sea informada esta condición, podrán solicitar durante el término de vigencia de la garantía, la resolución del contrato por medio del cual adquirieron el bien, conforme con las disposiciones de la ley 1480 de 2011 y la ley 1564 del 2012.

**ARTÍCULO 10. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR VICIOS REDHIBITORIOS.** Cuando se intenten las acciones por vicios redhibitorios reguladas en los artículos 1923 y 1926 del Código Civil, y en el artículo 938 del Código de Comercio, que se fundamenten en un vicio constitutivo de obsolescencia programada u obsolescencia programada informática, los términos de prescripción de las acciones se contarán a partir del día en que el comprador tuvo conocimiento del vicio.

**ARTÍCULO 11. LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS.** En todos los procesos de contratación estatal en la cual se adquieran bienes, los oferentes estarán obligados a informar la vida útil de los productos ofrecidos y si los bienes se encuentran sometidos a obsolescencia programada, de igual forma, deberán informar si los bienes ofrecidos pueden ser objeto de obsolescencia programada informática.

Cuando durante la ejecución del contrato estatal se logre comprobar que el contratante no informó la situación de obsolescencia de los bienes o que no informó debidamente la vida útil de los mismos, esta situación dará lugar a la declaratoria de la caducidad.

Cuando se haya ejecutado y liquidado el respectivo contrato estatal y se logre comprobar que el contratista no informó la situación de obsolescencia de los bienes o que no informó debidamente la vida útil de los mismos, esta situación dará lugar a la inhabilidad para contratar con el Estado por un término de 20 años.

**ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL AMBIENTAL.** Los productores y/o proveedores de bienes de consumo masivo, tienen el deber de velar por la correcta disposición, tratamiento, acumulación y reutilización de sus productos e insumos tras la finalización de la vida útil de los productos comercializados.

Este deber será reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

## 7. Conclusiones.

De lo expuesto en la presente monografía se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La obsolescencia programada es un fenómeno económico que describe las conductas desarrolladas por los productores de bienes para predeterminar su vida útil con el fin de aumentar la tasa de reemplazo de estos. Esta práctica empezó a desarrollarse y difundirse ampliamente en el transcurso del siglo XX hasta la actualidad, siendo considerada como una de las estrategias de negocios más influyentes de los últimos tiempos.
2. La obsolescencia como fenómeno económico plantea problemáticas de orden jurídico que la han hecho merecedora de regulación o de pronunciamientos judiciales en sistemas jurídicos extranjeros. Los retos jurídicos que plantea esta figura, se predicen de una tipología especial conocida como obsolescencia programada de calidad o absoluta, en virtud de la cual los productores predeterminan desde el diseño, la fabricación o mediante actualizaciones de software posteriores a esta, la vida útil de los bienes. Dichas problemáticas se concentran en dos campos, el primero de ellos, respecto de los bienes jurídicos individuales de los compradores de bienes y consumidores, y el segundo de ellos, respecto del bien jurídico colectivo del medio ambiente.
3. La obsolescencia programada de calidad afecta los intereses jurídicos de consumidores y adquirentes de bienes, por cuanto afecta el derecho de propiedad que a ellos les corresponde al delimitar la vida útil de los bienes, analizando esta situación desde el régimen del derecho privado colombiano se concluye que en materia de derecho civil y comercial la regulación existente en materia de vicios redhibitorios y garantías en el contrato de compraventa no ofrece una solución real a esta problemática en razón de las limitaciones temporales, probatorias y formales impuestas para accionar judicialmente.

Por su parte, en lo que corresponde a las normas de protección al consumidor, las instituciones de la garantía y el derecho de información parecerían otorgar soluciones a la problemática, sin embargo, las soluciones son más aparentes que reales, debido a la inexistencia de un término mínimo de garantía y de información mínima que proteja al consumidor, precisamente, estas fallas de la ley generan que conforme con la Constitución Política de 1991 las normas que regulan están seguras sean inexecutable parcialmente o exequibles bajo una interpretación condicionada a la protección real del consumidor.

4. La obsolescencia programada de calidad genera serias afectaciones al medio ambiente tanto por los bienes obsoletos que se convierten en desecho como por la explotación de los recursos naturales destinados a la producción, frente a esta problemática se encuentra que la Constitución Política de 1991 establece máximas de protección ambiental que deben ser atendidas por el Estado colombiano para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, las

disposiciones constitucionales no han sido desarrolladas por el legislativo ni el ejecutivo a este respecto.

5. La experiencia de los sistemas jurídicos extranjeros, los problemas prácticos que presentan las normas del derecho privado y la afectación que genera la obsolescencia programada de calidad al medio ambiente, exponen la necesidad de que en el ordenamiento jurídico colombiano se expida una normativa especial con la cual se solucionen las dificultades y los vacíos normativos de la legislación actual frente a uno de los fenómenos económicos más influyentes del último siglo.

En la regulación deberá conceptualizarse la obsolescencia programada, disponer términos de prescripción de las acciones por vicios redhibitorios que se contabilicen a partir del conocimiento sobre la situación de obsolescencia, consagrar la vida útil de los productos como información mínima obligatoria, establecer un periodo mínimo legal de garantía, implementar políticas tendientes a la superación de la obsolescencia mediante la reparación de bienes, establecer normas de garantía especial respecto del software, proteger al Estado colombiano en materia de adquisiciones públicas respecto de la obsolescencia programada, y por último, adoptar políticas de responsabilidad empresarial ambiental frente a la obsolescencia programada.

## **Bibliografía.**

### **Libros:**

- AMAYA, Óscar. La Constitución Ecológica de Colombia. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 158.
- BARBON, Nicholas. A Discourse of Trade. United States: Createspace, 2013.
- BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los Principales Contratos Civiles Y Su Paralelo Con Los Comerciales. 19ª ed. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2015.
- COMBLEY, Roz. Cambridge Business English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- HINDLE, Tim. Guide to Management Ideas and Gurus. London: Profile Books Ltd - Economist books, 2008.
- LONDON, Bernard. "Ending the Depression Through Planned Obsolescence." New York: University of Wisconsin Digital Collection, 1932.
- OVIEDO, Jorge. La Garantía Por Vicios Ocultos En la Compraventa. Bogotá: Universidad de La Sabana - Editorial Temis, 2015.
- PACKARD, Vance. The Waste Makers. New York: David Mckay Company, 1960.
- SLADE, Giles. Made to Break: Technology and Obsolescence in America. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
- VILLALBA, Juan. Introducción al derecho del consumo. Bogotá: Ed. Universidad Militar Nueva Granada , 2015.

### **Artículos en libros de colaboración:**

- CORREA HENAO, Magdalena. La obsolescencia programada: tensión constitucional y abuso del derecho. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.
- ECHEVERRI, Verónica & OSPINA, Julián. La obsolescencia programada y los derechos del consumidor. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.
- GIRALDO LÓPEZ, Alejandro. La garantía en el nuevo estatuto del consumidor. En: JIMÉNEZ, Fernando (Coordinador Científico). Estudios de derecho del consumo (Ley 1480 de 2011). Conceptos básicos, garantías, publicidad y cláusulas abusivas. Homenaje al profesor Álvaro Mendoza Ramírez. Tomo I. Bogotá: Ed. Universidad de la Sabana, 2017.
- GUTIÉRREZ, Andrés. Una mirada constitucional a la obsolescencia programada. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.
- PINOCHET, Ruperto. Obsolescencia programada y protección del derecho a la información en la Ley N° 19.496 de Protección de los Consumidores. En: VIDAL,

Álvaro; SEVERÍN, Gonzalo & MEJÍAS, Claudia (Editores), Estudios de Derecho Civil X, Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Valparaíso: Editorial Thomson Reuters La Ley, 2014.

- REGUEIRO, Raquel. La obsolescencia programada desde la perspectiva de la Unión Europea. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.
- SÁNCHEZ, Mateo. La obsolescencia programada en las prácticas comerciales y su relación con el régimen de vicios ocultos y garantías de consumo. En: SOTO, Jesús (Coordinador). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017.
- SOTO PINEDA, Jesús Alfonso. En Torno a la Relevancia Jurídica de Una Estrategia Empresarial Consolidada Y Subyacente: La Obsolescencia Programada. En Colección Enrique Low Murtra: Derecho económico. Tomo X. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.
- VALDERRAMA, Carmen Ligia. De las garantías: una obligación del productor y el proveedor. En: VALDERRAMA, Carmen Ligia (Directora). Perspectivas del derecho del consumo. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2013.

#### Artículos en revistas:

- FREDERICK, Justus George. Is Progressive Obsolescence the Path Toward Increased Consumption?. En: Advertising and Selling. Septiembre, 1928. Vol. 11, No. 10, págs. 19-46.
- BIANCHI, Lorena. La influencia del principio del consumo sustentable en el combate de la obsolescencia programada, la garantía de los “productos durables” y el derecho a la información de los consumidores en Argentina. En: Revista de Derecho Privado. Marzo, 2018, Vol. 34. págs. 277-310. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/5266>.
- FERNÁNDEZ, Laura. La obsolescencia programada: Sus consecuencias en el ambiente y la importancia del consumo responsable. En: Terra Mundos, Buenos aires, 2014. Vol. 1. No. 1. Págs. 1-12. Disponible en: [http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2867/Obsolescencia\\_Fernandez-Rey.pdf?sequence=1](http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2867/Obsolescencia_Fernandez-Rey.pdf?sequence=1).
- NAMÉN, Jeannete et al. La obligación de información en las diferentes fases de la relación de consumo. En: Revista e-Mercatoria. Enero-junio, 2009. Vol. 8, No. 1, págs. 1-29. Disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2033>.
- SOTO, Jesús. Reflexiones Acerca de las Posibles Incompatibilidades de la Obsolescencia Programada Con el Sistema de Defensa de los Consumidores. En: Actualidad Civil - Editar La Ley. Junio, 2015. No. 6. págs. 1-18. Disponible en: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2951097](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951097)
- VEGA, Omar. Efectos colaterales de la obsolescencia tecnológica. En: Revista Facultad de Ingeniería - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Enero-Junio, 2012. Vol. 21, No. 32. págs. 55-62. Disponible en: <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1434>.

## Recursos electrónicos:

- AMAZON WEB SERVICES. Almacenamiento en la nube, ¿Qué es el almacenamiento en la nube?. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-storage/>
- APPLE COMPUTER. Apple Announces iPhone 6 & iPhone 6 Plus—The Biggest Advancements in iPhone History. Septiembre, 2014. <https://www.apple.com/newsroom/2014/09/09Apple-Announces-iPhone-6-iPhone-6-Plus-The-Biggest-Advancements-in-iPhone-History/>.
- APPLE COMPUTER. Apple One (1) Year Limited Warranty – Accessory - For Apple and Beats Branded Products Only – version for October 27, 2014 - August 14, 2015. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/warranty/products/accessory-warranty-english.html>
- APPLE COMPUTER. Contrato de licencia de software iOS 9.0. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS9.pdf>.
- APPLE COMPUTER. Garantía limitada de un (1) año. Disponible en: <https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-alac-spanish.html>
- APPLE COMPUTER. iPhone 4S First Weekend Sales Top Four Million. Octubre, 2011. Disponible en: <https://www.apple.com/newsroom/2011/10/17iPhone-4S-First-Weekend-Sales-Top-Four-Million>.
- APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS 10.0 - 10.3.3. Disponible en: [https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/dl1893?locale=es_ES)
- APPLE COMPUTER. Requerimientos del sistema de iOS 9.0-9.3.5. [https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es\\_ES&viewlocale=es\\_ES](https://support.apple.com/kb/DL1842?locale=es_ES&viewlocale=es_ES).
- APPLE INC. A Message to Our Customers about iPhone Batteries and Performance. Disponible en: <https://www.apple.com/iphone-battery-and-performance/>
- BUSSINESS INSIDER. Batterygate: How Apple secretly slowed down older iPhones and why it's such a big deal. Diciembre, 2017. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/apple-batterygate-how-older-iphones-slowed-down-and-why-its-a-big-deal-2017-12>
- Bussiness Insider. People are suing Apple for \$5 million claiming iOS 9 slowed down their iPhones. Diciembre, 2015. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/apple-ios-9-class-action-lawsuit-2015-12>.
- CENTENNIAL LIGHT BULB COMMITTEE. *Bulb-cam*. Disponible en: <http://www.centennialbulb.org/index.htm>.
- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Consulta de Procesos Judiciales. Disponible en: <http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8UIP5I5FIiV2nQwrMWGQcrVvzu4%3d>.
- DANNORITZER, Cosima y RTVE. Comprar, Tirar, Comprar: La Historia Secreta de la Obsolescencia Programada., Noviembre 30, 2010. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/>.

- ENTER.CO. El iPhone 6 llega en dos semanas a los operadores colombianos. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/iphone-6-en-colombia-disponibilidad/>.
- EPSON AMERICA INC. EPSON Stylus® C42 Series: User's Manual. 2002. Disponible en: <https://files.support.epson.com/pdf/sc42ux/sc42uxu1.pdf>
- GUINNESS WORLD RECORDS. *Longest Burning Light Bulb*. Disponible en: <http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-burning-light-bulb>.
- HAARETZ DAILY NEWSPAPER. Apple Slapped With Class Action Suit in Israel for Deliberately Slowing Older iPhones. Diciembre, 2017. Disponible en: <https://www.haaretz.com/israel-news/business/apple-slapped-with-class-action-in-israel-for-slowing-older-iphones-1.5629578>.
- HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. "Noss missions H.O.P.". Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/a-propos/#pourquoi-hop>.
- HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Epson mis en cause par une plainte pénale en obsolescence programmée : l'enquête est ouverte". Diciembre, 2017. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/dossier-de-presse/>.
- HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Faut-il télécharger la mise à jour Apple ?. Enero, 2018. Disponible en: <https://www.halteobsolescence.org/faut-telecharger-mise-a-jour-apple/>

#### Tesis de pregrado:

- ANABALÓN, Pablo. Obsolescencia programada: análisis desde el derecho comparado y proyecciones de su aplicación en materia civil y de derecho del consumo en Chile. Memoria de prueba para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2016.
- CARRASCOSA, Ariadna. La obsolescencia programada: Análisis de la posibilidad de su prohibición. Trabajo de fin de grado en Derecho. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2015.
- CHACÓN, Fuad. La travesía obsoleta: la indefensión del consumidor. Trabajo de grado para optar al título de abogado. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014.



#### Acciones judiciales:

- ARAQUE, Camilo & Mesa, Juan. Acción de grupo. En el proceso de Oscar Iván Guaque Peña y Otros Vs. Apple Colombia S.A.S., Proceso No. 11001310301520180016600. Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá D.C.
- BERNSTEIN, Stanley; OTTENSOSER, Seth & BEIGE, Stephanie. Class Action Complaint. En el proceso de Eliezer Rabinovits & Victor Mazzeo Vs. Apple Inc. Case No. n/a. United States District Court For The Southern District Of New York. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367816750/Eliezer-Rabinovits-v-Apple-Class-Action>.
- FAZZIO, Jeffrey & Michelletti, Dinna. Class Action Complaint For Damages And For Equitable Relief. En el proceso de Keaton Harvey Vs. Apple Inc. Case No. CV-10-01610. United States District Court Northern District Of California Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367815541/Keaton-Harvey-vs-Apple-Battery-Issue-Lawsuit-3-Dec-2017>.
- HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Plainte au Procureur de la République contre Apple France. París: 27 de diciembre de 2018 Disponible en: <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2017/12/Plainte.pdf>
- HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. Plainte au Procureur de la République contre indéterminées. París: 18 de septiembre 2017. Disponible en <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2017/09/Plainte-obsolescence-programmée-imprimante.pdf>.
- PERETZ, Bronstein & SHIMON, Yiftach. Second Ammendment Class Action Complaint. En el proceso de Lerman. Et Al. V. Apple Inc. Case No. 1:15-cv-07381. New York Eastern District Court.
- PRITZKER, Elizabeth & WILLIAMS, Steven. First Amended Class Action Complaint. En el proceso de Andrew E. Westley V. Apple Computer Inc. Case No. CGC 03 427701. Superior Court of California, County of San Francisco. Consultado 4 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.plainsite.org/dockets/download.html?id=40774246&z=7631139e>
- SAADIAN, Bobby & JONES, Colin. Class Action Complaint. En el proceso de Stefan Bogdanovich & Dakota Speas Vs. Apple Inc. Case No: n/a. United States District Court For The Central District Of California. Disponible en: [https://es.scribd.com/document/367729251/Class-Action-Lawsuit-against-Apple-Inc#from\\_embed](https://es.scribd.com/document/367729251/Class-Action-Lawsuit-against-Apple-Inc#from_embed).
- SETAREH, Shaun & SEGAL, Thomas. Class Action Complaint. En el proceso de Michael Hakimi Vs. Apple Inc. Case No. n/a. United States District Court Northern District Of California. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/367896137/Michael-Hakimi-v-Apple-Class-Action-for-Purposely-Slowing-IPhones>.

## Decisiones judiciales:

- COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-126 del 01 de abril de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Consultado el 22 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm>
- COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-227 del 20 de abril de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Consultado el 24 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-227-17.htm>
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de octubre de 2009, M.P.: William Namén Vargas
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de enero de 2005, M.P.: Edgardo Villamil Portilla. Expediente No. 7524. Disponible en: <https://app.vlex.com/#vid/n-005-suprema-justicia-sala-civil-14-44113381>.
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de octubre de 2009, M.P.: William Namén Vargas. Expediente No. 00263. Disponible en: <https://app.vlex.com/#vid/691832033>.
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de marzo de 1969, M.P.: Enrique López de la Pava. Gaceta Judicial. T. CXXIX Nos. 2306, 2307 y 2308, p. 17. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CXXIX%20n.%202306-2308%20\(1969\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CXXIX%20n.%202306-2308%20(1969).pdf).
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de marzo de 1952 M.P.: Pablo Emilio Manotas. Gaceta Judicial. T. LXXI Nos. 2110 y 2111, p. 510. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20LXXI%20n.%202110-2114%20\(1952-1953\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20LXXI%20n.%202110-2114%20(1952-1953).pdf).
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2013, M.P.: Ariel Salazar Ramírez. Expediente No. 04959. Disponible en: <https://app.vlex.com/#vid/-509824855>
- COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de julio de 1899, M.P.: Luis. M. Isaza. Gaceta Judicial. T. XIV. Nos. 713 y 714, p. 282. Disponible en: [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20XIV%20n.%200679-0732%20\(1900-1901\).pdf](http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20XIV%20n.%200679-0732%20(1900-1901).pdf).
- COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia 12295 del 29 de noviembre de 2017. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: [http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol\\_d99d98261cf44873b1256c679b233cd8](http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_d99d98261cf44873b1256c679b233cd8).
- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-449 del 16 de julio de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Consultado el 24 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-449-15.htm>.

- ESTADOS UNIDOS. DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF NEW JERSEY. United States V. General Electric Co. et al. F. Supp. 753 (1949). Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/82/753/1755675/>
- ESTADOS UNIDOS. SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County Of San Francisco. Andrew E. Westley V. Apple Computer Inc. Case No. CGC 03 427701 (2003). Disponible en: <http://www.plainsite.org/dockets/wog8xuhz/superior-court-of-california-county-of-san-francisco/andrew-e-westley-v-apple-computer-inc-et-al/>
- ESTADOS UNIDOS. NEW YORK EASTERN DISTRICT COURT. Order on motion to dismiss. Lerman et Al. vs. Apple Inc. Case No. 1:15-cv-07381 (2017). Disponible en: <https://www.truthinadvertising.org/wp-content/uploads/2017/11/Lerman-v-Apple-order-denying-motion-to-dismiss.pdf>

### Estudios científicos:

- PRAKASH, Siddhart *et al.* Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen “Obsoleszenz”. Bonn-Freiburg: Öko-Institut e.V. & Universität Bonn. Disponible en: [https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/text\\_e\\_11\\_2016\\_einfluss\\_der\\_nutzungsdauer\\_von\\_produkten\\_obsoleszenz.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/text_e_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf).
- BALDÉ, Cornelis *et al.* The Global E-waste Monitor 2017: Quantities, Flows, and Resources. Viena: International Telecommunications Union, United Nations University Vice Rectorate in Europe & International Solid Waste Association, 2017. Disponible en <https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-Ewaste%20Monitor%202017%20.pdf>.

### Normatividad:

- ARGENTINA. SENADO. Expediente de Proyecto de Ley 1934/12. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1934.12/S/PL>
- ARGENTINA. SENADO. Expediente de Proyecto de Ley 985/15. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/985.15/S/PL>
- BÉLGICA. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. Proposition de loi relative à l’obsolescence programmée. Document parlementaire. Bruselas. 2016. 54K1783. Disponible en: <http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1783/54K1783001.pdf>.
- BÉLGICA. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. Proposition de résolution visant le développement de l’économie circulaire et la lutte contre l’obsolescence programmée. Bruselas. 2018. 54K2884004. P. 8199. Consultado el 9 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2884/54K2884006.pdf>.

- BÉLGICA. PARLEMENT FÉDÉRAL BELGE. Code de droit économique. Document Parlementaire. Bruselas. 2013. A11134. P. 19975. Disponible en: [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=fr&la=F&table\\_name=loi&cn=2013022819](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819).
- BÉLGICA. SENÁT DE BELGIQUE: COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES. Proposition de résolution visant le développement de l'économie circulaire et la lutte contre l'obsolescence programmée. Document législatif. Bruselas. 2012. 5 - 1251/4. Disponible en: <http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MINamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=83888219>.
- CHILE. CONGRESO NACIONAL. Ley 19496 de 1997 (7, febrero, 1997). Establece normas sobre protección de los derechos de los Consumidores. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=243235](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=243235)
- COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá D.C., 1991, No. 116.
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. (12, octubre, 2011). Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011, No. 48.220.
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 57 de 1887. (15, abril, 1887). Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional: se adopta el Código Civil de la Nación. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1887, No. 7.019 P.1.
- COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141 del 30 de agosto de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Consultado el 22 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-1141-00.htm>
- COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1074 de 2015. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2015, No. 49523.
- COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1971, No. 33.339 de junio. P. 1.
- COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. Sentencia 12719 del 11 de diciembre de 2017. Disponible en: [http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol\\_101f0c9feb83492ebf23aace1cda2df0](http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_101f0c9feb83492ebf23aace1cda2df0)
- COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Circular Básica Jurídica, Título II. Consultada el 1 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/062018/Titulo%20II%20Proteccion-NULIDAD%20pvc.pdf>.
- ECUADOR. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (29, noviembre, 2016). Registro Oficial, Quito, 2016. No. 899 del 9 de diciembre. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>.

- ECUADOR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. Decreto ejecutivo 1435 de 2017. (23, mayo, 2017). Registro Oficial Suplemento, Quito, 2017. No. 9 del 7 de junio. Disponible en: <https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/REGLAMENTO-CODIGO-CONOCIMIENTOS.pdf>
- GUASTAVINO, Pedro. Proyecto de Ley S-0985/15. Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/985.15/S/PL#textoOriginal>.
- ITALIA. PRESIDENTTE DELLE REPUBBLICA. Decreto Legislativo No. 206. (6, settembre, 2005). Codice del Consumo. Gazzeta Ufficiale, Roma, 2005, No. 235 del 8 de octubre. Disponible en: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm>.
- NACIONES UNIDAS, CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. Directrices para la protección del consumidor. Nueva york y Ginebra: 2016. Disponible en: [http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1\\_es.pdf](http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf).
- UNIÓN EUROPEA. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. Dictamen “Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza”. Diario Oficial de la Unión Europea. Bruselas. 2014. C 67. P. 23. Ponente: LIBAERT, Thierry. Coponente: HABER, Jean-Pierre. Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE1904>.
- UNIÓN EUROPEA. PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas. Pendiente de publicación oficial. 2017. Disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0287&language=ES&ring=A8-2017-0214>.